



DERECHOS EN PELIGRO

**El avance de la ultraderecha amenaza las conquistas sociales
y libertades que creíamos garantizadas**

VISIT CORREOS

EL LUGAR MÁS VISITADO DE ESPAÑA, O UNO DE ELLOS 

Si las oficinas de Correos reciben cada año 88 millones de visitas, será por algo.

El algo:

Tarjeta Correos Prepago. Servicios DGT. Ingreso y retirada de efectivo. Telefonía e internet. Libros. Paq Bicicleta. Pago de recibos y tributos. Venta de balizas. Cambio de divisas. Servicios de luz y gas. Venta de entradas. Paq Maleta. Correos Market. Embalajes Línea Bosques. Citypaq. Registro electrónico de la Administración. Tarjetas regalo. Sellos. Voto por correo. Paq Peregrino.

Envíos de Paquetería . Buzón de vacaciones. Envío de dinero. Identificaciones para mascotas. Pantallas de promoción...

visitcorreos.es



Derechos en peligro

Cuando tocan poder, limitan derechos. Vox en España, otros partidos similares en todo el mundo. Es una ola ultraconservadora, en muchos casos neofascista, que está sacudiendo las democracias y en algunos casos arrastrando a las derechas a lugares muy peligrosos. En esta revista hablamos de la importancia de lo que está en juego.

TRIBUNAS

Ignacio Escolar

La lucha por los derechos humanos no terminó

PÁGINA 5

Pablo Stefanoni

El anti-progresismo que recorre América Latina

PÁGINA 20

Neus Tomàs

Nuestros hijos merecen un futuro mejor

PÁGINA 82

ENTREVISTAS

Catherine Fieschi:

“Los partidos de extrema derecha en Europa se están volviendo más hábiles”

María Ramírez

PÁGINA 14

José Juan Toharia:

“Vox está en la línea de desaparición”

Gumersindo Lafuente

PÁGINA 68

RELATO

Jose Antonio Pérez Ledo

PÁGINA 76

HUMOR

Manel Fontdevila

PÁGINA 22

Bernardo Vergara

PÁGINA 74

DIRECTOR

Ignacio Escolar
@iescolar

DIRECTORES ADJUNTOS

Neus Tomàs
@neustomas

Ander Oliden
@anderinaki

José Precedo
@joseprecedo

EDITOR DE LA REVISTA
Gumersindo Lafuente
@sindolafuente

DISEÑO

David Velasco
@DVelasco

Susana Millán
@VWalkisu

EDICIÓN

Isabel Navarro
@isabelnavarr0

EDITA **Diario de Prensa Digital, S.L.**
Gran Vía, 46. 28013 Madrid
Tel. 91 548 96 67

DL: M-4188-2013
ISSN: 2255-3932

FOTOMECÁNICA **Esther García**

IMPRIME **SolgestXXI, S.L.**

DISTRIBUYE **SGEL, S.A.**

www.eldiario.es



Ilustraciones de **Fede Yankelevich**

Y el PP se abrazó a Vox

Andrés Gil PÁGINA 6

Radiografía de la oposición judicial, fiscal y policial

Elena Herrera PÁGINA 24

La negación no es solo un discurso

Ana Requena Aguilar PÁGINA 28

La imparable revolución de un planeta sano

Raúl Rejón PÁGINA 32

Un succulento pastel para la privada

David Noriega PÁGINA 36

El adoctrinamiento como excusa para sabotear a la escuela pública

Daniel Sánchez Caballero PÁGINA 40

Cuarenta y cinco años buscando memoria democrática

Olga Rodríguez PÁGINA 44

La España de las lenguas menguantes

Pau Rodríguez PÁGINA 48

El aborto, un derecho 'al filo de la navaja'

Lucía M. Quiroga PÁGINA 52

Vox apunta a los que viven en los márgenes

Gabriela Sánchez PÁGINA 56

Desteñir el arcoíris para volver al blanco y negro

Marta Borraz PÁGINA 60

La ofensa, ese motor de la censura

Elena Cabrera PÁGINA 64

Nazcas donde
nazcas.
Vivas donde
vivas.



Existimos para que
las personas más olvidadas,
en los lugares más olvidados,
tengan Derecho a la Salud.

**Dona para combatir las
enfermedades olvidadas.**



FUNDACIÓN
anesvad

La lucha por los derechos humanos no terminó

Presentación

Ignacio Escolar
Director de elDiario.es



PATRICIA BOLLINCHES

Tendemos a ver la historia como un avance lineal. Como una flecha que se mueve en una única dirección, donde los progresos en derechos sociales nunca suelen retroceder. Formalmente parece ser así y no hay nadie en 2023 que defienda la vuelta de España a 1970, cuando el adulterio se castigaba con la cárcel, pero solo si lo cometía la mujer. Ni a 1960, cuando la homosexualidad era un delito que se penaba con cárcel y trabajos forzados. Ni a 1870, cuando España era uno de los últimos países del mundo donde estaba permitida la esclavitud.

Hoy no hay casi nadie en Europa, ni siquiera los más ultras, que defiendan injusticias así: que el hombre blanco tenga derecho a fletar un barco, secuestrar a cientos de personas en África, cargarlas de cadenas y esclavizarlas de por vida en un cafetal. O que quiera encarcelar a los homosexuales –en Europa: en Irán se castiga con pena de muerte–. O que crea que un hombre tiene derecho a asesinar a su mujer impunemente si le es infiel –el castigo para ese tipo de asesinato hasta 1963 era solo el destierro, no la prisión–. Pero no por ello ha desaparecido el racismo, ni el machismo, ni la discriminación contra las personas LGTBI.

Los racistas de hoy ya no son esclavistas, pero siguen discriminando a las personas por el color de su piel. Los machistas de hoy no exculpan el maltrato o el asesinato de una mujer, pero niegan el origen de esa violencia, que es el machismo. Los homófobos hoy tienen todos “un amigo gay” –incluso pueden ir a su boda, como hizo Mariano Rajoy después de manifestarse contra la ley del matrimonio igualitario–. Pero les ofende que las personas que no son heterosexuales dejen de esconderse en los armarios y formen familias con los mismos derechos que las demás.

La extrema derecha, en el fondo, no es otra cosa que eso: una reacción a los derechos humanos y a su despliegue efectivo más allá de la teoría. Y aunque estoy convencido de que, a largo plazo, los reaccionarios tienen siempre el futuro perdido –porque no tienen razón–, a corto plazo siempre es posible la involución. Ya pasó antes en la historia de España, donde la primera democracia no llegó en 1978. Y está pasando hoy por media Europa, donde el ascenso de partidos contrarios a los derechos humanos es una preocupante realidad.

Nadie en Italia podía imaginar, por ejemplo, que un gobierno en el siglo XXI se atreviera a borrar a las madres lesbianas de los registros públicos, del equivalente a nuestro libro de familia. O lo que está pasando en Polonia, donde varios municipios se han declarado “zonas libres de ideología LGTBI”, lo que ha multiplicado las agresiones físicas contra quien simplemente besa a su pareja por la calle. Ya no hay esclavitud, en teoría. Pero no es casual que alguno de los líderes de la extrema derecha española tenga su origen en los negocios de los burdeles y la trata, que es la esclavitud moderna.

La extrema derecha intenta hacer suyas palabras bellísimas: libertad, igualdad, democracia, Constitución. La realidad es que son herederos de quienes hicieron lo imposible porque estos derechos nunca existieran. El futuro que buscan es una vuelta al pasado, y tal vez lo puedan conseguir.

Dossier
DERECHOS
EN PELIGRO

Y el PP se abrazó a Vox

La derecha, cada vez más derecha. Y el centro, cada vez más mito. Tras haber devorado electoralmente cualquier atisbo de centro, 2023 ha sido el año que ha evidenciado que el PP sobre todo mira a su derecha. ¿Dónde queda el espíritu democrático cuando el ex presidente Aznar apela al “¡Basta Ya!” contra el Gobierno de Sánchez? El espíritu se ha transformado en espectro: bulos, censura, datos retorcidos, teorías de la conspiración y acuerdos con Vox



Andrés Gil

Subdirector de elDiario.es

@andresgil



Ilustraciones de **Fede Yankelevich**







La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien Manuel Fraga probablemente admiraría con orgullo, recuperaba a mediados de septiembre lenguajes guerracivilistas. Ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso recurrió a la retórica de hace 100 años: “Nos encontramos, por primera vez en muchas décadas, con un frente. Un frente que opera en contra, no a favor, de España”, dijo en un acto para iniciar el curso político del PP en Madrid. “Hagan lo que hagan, es su bando. Como en el siglo XX, nos llevan al combate”, añadió. “Ese frente no necesita ganar elecciones. Le basta con que España entera pierda. Rompen la convivencia en todo el país, llevan el problema de convivencia que ha habido en Catalunya a toda España. Para que no nos podamos entender entre amigos, familias, hermanos. Lo peor de todo no es que quieran discrepar, niegan a los demás. Niegan al otro supuesto bando”, concluyó.

¿A qué se refiere Isabel Díaz Ayuso cuando dice “como con el siglo XX”? ¿A qué se refiere con “nos llevan al combate”? ¿A otro 18 de julio? ¿A otro Alzamiento Nacional? El historiador Ángel Viñas decía recientemente en una entrevista en elDiario.es en la que analizaba esta deriva trumpista del PP y su relato sobre la historia de España a la que alude Ayuso: “La derecha española está vendiendo todavía una versión que está falseada en su concepción primitiva. Tienes que justificar el golpe [de 1936], y recurres a los asesinatos, disturbios, quemas de iglesias”.

“Está tan metido en el corazón de la extrema derecha que no necesitan a Trump: la batalla por el relato la descubrieron las derechas en los años 30, como Hitler la descubrió en los años 20 y 30 gracias a Goebbels. Y como Mussolini la había descubierto también en los años 20 y 30. La batalla por el relato es fundamental”, prosigue Viñas.

El sistema político español actual y, en realidad, los sistemas políticos europeos, parecen estar inmersos en una ola reaccionaria en la que cada vez se ve con más claridad cómo los estilos y formas trumpistas se van imponiendo, empujando a las derechas hacia posiciones ultras: así, el trumpismo –cuyas expresiones en América Latina son Bolsonaro en Brasil y Milei en Argentina– en Europa se representan por dos líderes que suponen la decantación del conservadurismo his-

tórico de sus respectivos países junto con nuevas formas de la política de la derecha alternativa –y hasta anarcocapitalista, más aún en casos como el argentino–, como son Isabel Díaz Ayuso y Giorgia Meloni.

El centro devorado

Mensajes y discursos de la derecha española actual, representada en el PP y Vox, recuerdan a comportamientos del pasado. No en vano, el partido del harakiri de las Cortes franquistas era UCD, el que impulsó la ley para la reforma política –de la ley a la ley– para convocar unas elecciones generales con partidos políticos legalizados. Su nombre, Unión de Centro Democrático, era engañoso, pues ocultaba que estaba liderado por un ex secretario general del Movimiento como Adolfo Suárez, falangista desde niño. En la memoria quedan los siete magníficos de la Alianza Popular de Manuel Fraga, todos ellos ex ministros de Franco. Pero suele olvidarse que la UCD era tan hija del régimen como AP. Eso sí, con el paso del tiempo, AP y su artefacto, el PP, fueron fagocitando a los sectores más conservadores de UCD –el partido pasó de 165 escaños en 1977 a 11 en 1982–, incluso a través de su secuela, el CDS –sólo tuvo representación en tres elecciones, 1982, 1986 y 1989–, mientras algunos más liberales –como Francisco Fernández Ordóñez– acabaron en el PSOE.

Con el paso del tiempo, la AP que apenas tenía 16 escaños en 1977, llegó al Gobierno con Aznar en 1996 –156 disputados– y la mayoría absoluta de 2000 –183, superada en 2011 por Mariano Rajoy con 186 escaños– después de quedarse con los cuadros y los votos de la UCD y el CDS, los partidos con la palabra “centro” en su nombre.

No fueron los últimos, ni los únicos

El PP ha ido devorando intentos posteriores, como los de UPyD –apenas logró representación en 2008 y 2011 antes de desaparecer– y Ciudadanos –que pasó de los 57 escaños a 10 en sólo siete meses de 2019–. Ambos partidos, fugaces, aspiraron a no ser ni rojos ni azules y acabaron en el azul oscuro, como Rosa Díez, por ejemplo, o Juan Carlos Girauta: el PP crece cuando la UCD y el concepto de centro mueren, y todos los intentos

Ignacio Sánchez Cuenca: “Una democracia no puede excluir que exista un partido como Vox, pero los partidos democráticos pueden impedir que Vox llegue a tomar decisiones”

AP, que en 1977 tenía 16 escaños, llegó a los 186 en 2011 con Rajoy tras quedarse con los cuadros y los votos de la UCD, el CDS y todos los partidos con la palabra “centro” en su nombre

Ángel Viñas: “La derecha española está vendiendo todavía una versión del golpe del 36 falseada. No necesitan a Trump, la batalla por el relato la descubrieron en los años 30”

de resucitarlo fracasan, en beneficio del partido creado por Manuel Fraga, quien empezó perdiendo, mientras sus herederos políticos han tenido grandes momentos de éxito: eso sí, mirando cada vez más a su derecha.

El historiador Santos Juliá, cuando presentó su libro “Demasiados retrocesos. España 1898-2018” (Galaxia Gutenberg), afirmó: “El PP se ha tirado ya de hoz y coza a la extrema derecha”. Otro historiador, Josep Fontana, fue aún más lejos en un sonado artículo en El Periódico de Catalunya hace diez años, ni más ni menos, titulado “La deriva nazi del Partido Popular”: “Entiendo que este título pueda parecer provocativo, porque está claro que hay grandes diferencias entre la España de 2013 y la Alemania de 1933. Pero aquello sobre lo cual quiero llamar la atención es la semejanza que tienen, en sus objetivos, la actual política centralizadora del Partido Popular y la actuación del NSDAP (el partido nazi alemán) en 1933, en su lucha por hacerse con el poder absoluto”. Y concluía: “De ahí la necesidad de resistirnos a una deriva autoritaria que amenaza con dejarnos impotentes y sin capacidad de reacción mientras nos conducen al abismo”.

Las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo pasarán a la historia por ser el momento en el que PP y Vox han llegado a acuerdos de gobierno en todas las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde han podido. Y,

a partir de ahí, están aplicando decisiones que poco tienen que ver con consensos que se daban superados en torno a los derechos sociales y civiles. Al revés, las decisiones de la extrema derecha y la derecha de siempre pasan por recortar libertades: películas, obras de teatro, concentraciones contra la violencia machista y banderas LGTBI ya están en el punto de mira de muchas localidades y comunidades.

El peligro de normalizar a Vox

El politólogo Ignacio Sánchez Cuenca reflexionaba en una entrevista en La Trivial sobre los pactos y las alianzas con Vox: “Una democracia no puede excluir que exista un partido como Vox, pero los partidos democráticos pueden impedir que Vox llegue a tomar decisiones, que para mí es lo más grave. En España esto se ve como una posición intolerante o excluyente. Ahora se ha hecho popular “Cómo mueren las democracias” (Booket, 2021), el libro de Ziblatt y Levitsky, y ahí claramente se defiende la posición del cordón sanitario. Es la principal lección que se extrae de los años 30: en aquellos países en los que se frenó a la extrema derecha se evitó la involución fascista, por el contrario, donde se dijo ‘bueno, va a ser mejor integrarlos porque así los desactivamos’, la extrema derecha se hizo con el poder y el cambio autoritario se hizo irreversible. El argumento electoral no es un argumento suficientemente poderoso. Hay cosas más importantes. A mí me da igual que Vox pase del 12 al 18 por ciento por el hecho de haber sido excluido del gobierno siempre y cuando no llegue a dictar políticas”.

Pero el PP de Alberto Núñez Feijóo ha preferido que Vox dicte políticas tras el 28M. Y, quizá por ello, el resultado del 23J supuso en España un frenazo al cambio de ciclo que parecía intuirse desde 2021, cuando las derechas mostraron su músculo en Andalucía, Castilla y León y Madrid, algo que se vio ratificado tras las últimas autonómicas y municipales.

Feijóo, que llegó a la calle Génova con vitola de “moderado”, el mismo que aparece en una foto con crema solar en la espalda junto a un narcotraficante, decidió que era buena idea en campaña electoral hablar del “maquillaje” de Yolanda Díaz para desacreditar unos datos del paro históricos en España. En efecto, el mismo moderado Feijóo que calificó de “divorcio duro” la sentencia por violencia psíquica habitual

del dirigente de Vox Carlos Flores con el que pactó el PP para gobernar la Comunidad Valenciana.

El PP se ha abonado a la tesis de la derogación del sanchismo, concepto usado para erosionar al Gobierno de coalición, al que cada votante le da un significado pero que intenta resumir una voluntad de cambio representada en PP y Vox. En ese sentido, Feijóo también ha querido vincular la pulsión de cambio que él dice representar con la que llevó a Adolfo Suárez, a Felipe González y a José María Aznar y Mariano Rajoy a La Moncloa. Y lo hace mientras Abascal, su aliado potencial de Gobierno y real en comunidades y ayuntamientos, recibe el apoyo de los ultras italianos, húngaros y polacos, Giorgia Meloni, Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, respectivamente.

Lo que intentan las derechas españolas, en la línea de otras en el resto del mundo –como el trumpismo o el bolsonarismo– es imponer un marco simplificador, que evite la discusión o deliberación sobre políticas públicas concretas o sobre un proyecto de país. Un marco que es nacionalista, incluso con las políticas climáticas y con la Constitución, que la identifican con ser español.

De esta manera, el marco de las derechas recoge el descontento e incluye discursos de odio y de deslegitimación del Gobierno por las “posiciones radicales de los socios de Sánchez”. Así, Feijóo opone el partido sanchista al partido socialista, en el sentido de que el PSOE ya no sería el PSOE, sino un PSOE que tiene como socios a “comunistas, golpistas y filoetarras”.

Un lenguaje que le lleva de la mano con la extrema derecha, que no tiene ningún complejo, ni en España ni en Europa. Meloni señalaba en un acto de Vox su esperanza del cambio en España como condición de posibilidad para impulsar cambios en las políticas europeas. Meloni es la líder del partido ultra Fratelli D'Italia, además de presidenta de ECR (el partido de los Conservadores europeos), familia política que engloba al partido de Abascal, además de al partido gobernante polaco (los ultras de PiS, con los que Vox mantiene unas relaciones más estrechas que con sus aliados italianos) o los búlgaros de IMRO, cuyo eurodiputado Angel Dzhambazki, ponente del suplicatorio de Puigdemont, fue sancionado en el Parlamento Europeo por hacer el saludo fascista en el pleno de Estrasburgo.

La pregunta que tumbó a Feijóo

El día que peor lo ha pasado Feijóo desde que accedió a la presidencia del PP fue cuando acudió en el último tramo de la campaña electoral del 23J a La Hora de La 1, de TVE. Fue el momento en el que Silvia Intxaurrenondo le puso, de manera firme, frente al espejo de unas imprecisiones ante las que el líder del PP respondió de malas maneras. Pero tardó 48 horas en reconocer que él estaba equivocado y que la periodista tenía razón.

Lo que intentan las derechas españolas, en la línea del trumpismo y el bolsonarismo, es imponer un marco simplificador, que evite la deliberación sobre políticas públicas concretas o sobre un proyecto de país

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se refirió a la bandera LGTBI como “un trapo arcoíris”

El eurodiputado búlgaro del IMRO Angel Dzhambazki, ponente del suplicatorio de Puigdemont y aliado de Vox, fue sancionado en el Parlamento por hacer el saludo fascista en un pleno de Estrasburgo

En contra de lo dicho por Feijóo en aquella entrevista, la mayoría de las pensiones españolas perdieron poder adquisitivo entre 2012 y 2018, los siete años que gobernó Mariano Rajoy. Una falsedad que ha reiterado en varias ocasiones. Tanto le han pesado a Feijóo los bulos en los medios como la constatación práctica de qué significa gobernar con Vox.

La cruzada de la extrema derecha y la derecha de siempre contra la cultura ha arrancado allí donde se han comenzado a repartir el poder tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. La realidad de PP y Vox tiene que ver con eso, pero también con la persecución del diferente y, en concreto, el colectivo LGTBI y su visibilidad en producciones culturales.

Así, el partido de Santiago Abascal, allá donde ya gobierna con el PP, ha vetado en Valdemorillo (Madrid) una obra de Virginia Woolf sobre homosexualidad; ha censurado la última película de Buzz Lightyear en el municipio cántabro de Santa Cruz de Bezana por el beso de dos mujeres –coincidiendo con una campaña del colectivo ultracatólico CitizenGo, marca internacional de HazteOír contra la productora por ser “un rehén de los activistas LGTB empeñados en corromper” a los niños “mediante el adoctrinamiento homosexual”–; ha cancelado en Briviesca (gobernado por el PP con el apoyo de Vox y de Ciudadanos) una obra de teatro que homenajeaba a un maestro de

Cuando era joven nadie me explicó que lo peor de envejecer fuese la soledad

Mariona, 84 años

¡Hazte socio/a!

**Ayúdanos a llevar
compañía y calor humano
a las personas mayores**

Fotografía: Ferran Taberner



Mesa presidencial del I Congreso de Alianza Popular (embrión del Partido Popular) en marzo de 1977. De izquierda a derecha, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Licinio de la Fuente, Manuel Fraga Iribarne, Gonzalo Fernández de la Mora, Thomas de Carranza y Cruz Martínez Esteruelas. Todos ellos fueron ministros o altos cargos durante la dictadura de Franco. Foto: EFE



la Bureba (Burgos) que fue fusilado en julio de 1936; y ha continuado su cruzada contra la bandera LGTBI, a la que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se refirió como “un trapo arcoíris”.

Pero hay más. El partido de Abascal en el municipio madrileño de Getafe, donde está en la oposición, ha pedido al Ayuntamiento que retire “las insinuaciones sexuales” de ‘La villana de Getafe’, una obra de teatro de Lope de Vega que se representó en la ciudad.

Según anunció Abascal, es sólo el principio de lo que puede venir: “Seguiremos cancelando sus programas culturales”.

Si la recta final del 28M el PP decidió sembrar dudas sobre el sistema electoral, a la manera de los seguidores de Donald Trump o Jair Bolsonaro, en la campaña del 23J las sombras de sospechas han vuelto a aparecer por parte de Núñez Feijóo. El sistema electoral español está entre los mejores del mundo, pero el partido de Alberto Núñez Feijóo decidió ponerlo en cuestión antes del 28M por un puñado de casos sospechosos corrupción –mayoritariamente del PSOE, con detenciones incluidas, y de Coalición por Melilla, pero también del PP– en media docena de municipios y en una ciudad autónoma, y antes del 23J por la gestión por parte de Correos de los votos no presenciales.

Poco importa que Feijóo ganara varias elecciones con el mismo sistema sobre el que alguno de sus dirigentes ha tenido a bien sembrar dudas y que los ‘populares’ ganaran las elecciones del 28M. En la campaña del 23J han vuelto a comportarse con una actitud que recuerda al trumpismo. “Sánchez se va ir como llegó, con un intento de pucherazo”, dijo el pasado 26 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, ante Feijóo en el mitin de cierre de campaña del PP de las autonómicas y generales. Feijóo llegó a lanzar la sospecha contra Correos, una de las empresas públicas más grandes de España. “Le pido a los carteros que trabajen mañana, tarde y noche, y aunque no tengan los refuerzos suficientes que sepan que custodian algo sagrado”, dijo Núñez Feijóo, quien dirigió la compañía entre el año 2000 y 2003.

Eso sí, en el asunto de las alianzas con la extrema derecha Feijóo ha intentado ponerse de perfil, y en ocasiones marcar distancias con Vox, como en la constitución de la Mesa del Congreso, como si fuera un partido con el que no estuviera repartiéndose consejerías y concejalías simultáneamente.

Bulos, censura, datos retorcidos, teorías de la conspiración, acuerdos con la extrema derecha. Y esa foto con un narco que no la querría ningún candidato y que arruinaría la carrera política de cualquier líder de izquierda.

Banco Santander, elegido por The Banker como
“Banco más innovador del mundo”

Bienvenidos al banco del futuro

Gracias a Gravity, una plataforma digital única en el mundo y desarrollada en la nube internamente por el banco, que la está implantando en todo el mundo. Esta plataforma ayudará a ofrecer mejores productos y servicios, y una mejora significativa en la experiencia de cliente.

Queremos seguir innovando para conectar más y mejor con las necesidades de las personas.

 **Santander**

The Banker
INNOVATION IN
DIGITAL BANKING
AWARDS 2023

Winner
Global





Catherine Fieschi

“Los partidos de extrema derecha en Europa se están volviendo más hábiles”

Lleva 30 años estudiando la emergencia del populismo y dice que aunque el electorado español haya frenado, de momento, a la extrema derecha, Vox ha logrado la incorporación de sus ideas al debate público y que otros partidos estén dispuestos a asumirlas para ganar votos



PAULINE NIKS

Catherine Fieschi entró por primera vez en el despacho de Jean-Marie Le Pen en Bruselas en verano de 1996. Entonces él era eurodiputado y líder del Frente Nacional; ella, una estudiante que hacía su doctorado sobre un asunto considerado “de nicho”, el populismo y la extrema derecha.

“Era muy original, rayando en lo estrafalario”, cuenta Fieschi en su libro ‘Populocracy: The Tyranny of Authenticity and the Rise of Populism’ (‘Populocracia: la tiranía de la autenticidad y el ascenso del populismo’, inédito en España). Casi 30 años después, su campo de estudio ha llegado muy lejos desde aquella “esquina de los traviesos” del Parlamento Europeo que Le Pen compartía con el partido nacionalista flamenco ultra.

Fieschi es una de las grandes expertas en la extrema derecha en Europa y ha trazado una de las definiciones más completas del populismo: como otras voces académicas, señala la división entre “el pueblo” y “una élite indigna” y la simplificación de la realidad, pero también incide en lo que llama “autenticidad”, una política basada en el instinto que permite decir cualquier cosa y mentir abiertamente como parte de un juego para que el político parezca “uno más”.

Fieschi es ahora directora de política y estrategia pública de la Open Society, la fundación de George Soros para la promoción de la democracia y los derechos humanos. Antes fue directora de investigación del British Council, donde fundó un centro de estudios especializado en el funcionamiento de la democracia. También dirigió el ‘think-tank’ británico Demos y creó un instituto de estudios globales en la Universidad Queen Mary de Londres.

Cuando Fieschi escribió su libro sobre el populismo, Vox estaba emergiendo como fuerza política, pero España y Portugal eran consideradas la excepción en el ascenso de la extrema derecha. Ahora, cuando hablamos a finales de agosto, Fieschi es cauta sobre los resultados de las elecciones del 23 de julio. “Es cierto que la gente en España todavía se lo piensa dos veces antes de votar por un partido que es antidemocrático en algunos aspectos. Pero España también muestra un problema que es importante en toda Europa: la derecha mayoritaria y el centro-derecha están dispuestos a moverse mucho más hacia la derecha para atrapar votos”, explica. Esta es nuestra conversación, editada por longitud y comprensión.

Usted es cautelosa sobre la idea de que España ha frenado a la extrema derecha. ¿Por qué?

Sí. En los últimos 20 años, lo que vemos es un aumento de los partidos de extrema derecha, una incorporación de sus ideas aunque no estén en el gobierno. Incluso cuando no tienen ningún tipo de poder, sus ideas calan. De vez en cuando, hay un rechazo, como en España, pero solo sucede ocasional-

mente. Estos partidos están avanzando, como hemos visto recientemente en Francia, Italia y Finlandia. Cuando no sucede, es solo porque la derecha dominante toma en cuenta sus ideas, y es solo cuestión de tiempo antes de que estas ideas ganen nueva vigencia en nuestros sistemas políticos. Los votantes son cada vez más receptivos a mensajes muy críticos con los derechos humanos, el pensamiento progresista y la representación de las minorías, ya sean minorías migrantes o minorías de género. Lo que vemos es que los votantes no se están moviendo hacia la izquierda.

¿Son los partidos o los votantes? Si miramos las encuestas en España, hay consenso sobre el estado del bienestar, los derechos de los homosexuales, la igualdad o el cambio climático.

Cuando digo que los votantes se han movido a la derecha, debo matizar. Los votantes han cambiado y pueden querer cosas que parecen un poco contradictorias pero no necesariamente lo son. Por un lado, hay una demanda de protección, redistribución y preocupaciones sobre la desigualdad, que son generalmente las cosas que asociamos con la izquierda y que ahora ofrecen muchos partidos populistas de derecha. Marine Le Pen, por ejemplo, es muy hábil en este discurso y se concentra en los votantes de clase media baja que sienten que se están quedando atrás. Estos partidos pueden ofrecer una sensación de protección contra un mundo cambiante y, al mismo tiempo, luchar contra lo que se siente como un Estado intrusivo o utilizar la retórica del Brexit sobre recuperar el control. Ahora es muy difícil etiquetar a muchos votantes como de izquierda o de derecha porque son bastante de izquierda en términos de querer protección del Estado, pero bastante de derecha en términos de no querer un Estado intrusivo en lo social. Nos enfrentamos a votantes que son más difíciles de interpretar porque el mundo está cambiando rápidamente a su alrededor.

“Los votantes son cada vez más receptivos a mensajes muy críticos con los derechos humanos, el pensamiento progresista y la representación de las minorías”

¿Los partidos están polarizando a los votantes?

Sí, en parte es por la desaparición del centro. Pasa en España, pero también en Italia o Polonia, donde hay dos grandes bloques. Cada bloque necesita extenderse un poco para obtener otro 4-5% y para eso tiene que ofrecer un mensaje polarizador. Si estás en la izquierda, tienes que llegar al ex-

entrevista

CATHERINE FIESCHI

tremo izquierdo para conseguir algunos votos, y si estás en la derecha,

tienes que llegar al extremo derecho.

Los partidos están, en cierto sentido, obligados a ser más polarizadores, pero no es necesariamente culpa suya. Tiene mucho que ver con medios más polarizantes: no me refiero a los principales medios de comunicación, sino en particular a las redes sociales, donde la estridencia es tal que para hacerse notar lanzas mensajes mucho más radicales. Los ciudadanos se acostumbran a este tipo de mensaje radical o estridente y los partidos casi tienen que emularlo.

En su libro escribe sobre la falta de complejidad y de matices que parece recompensada, también para los periodistas.

Hay algo muy satisfactorio en la falta de sutileza, es decir, en poder decir algo en siete palabras en lugar de en 17. Siempre es más simple, más fácil de repetir. Lo vemos en la retórica de los partidos y, por supuesto, los partidos populistas son muy buenos en esto. No me refiero solo a los partidos populistas de derecha, también a los partidos populistas de izquierda. Aquí en Francia, un partido populista de izquierda muy poderoso y muy agresivo en redes es Francia Insumisa. Funciona en redes sociales porque no le importa decir algo que sea una caricatura o una verdad a medias. Esto pasa con los partidos populistas: el fin justifica los medios.

Su definición del populismo contiene la idea de “autenticidad”. ¿De dónde viene?

Me llamó la atención la pregunta de cómo Donald Trump o Nigel Farage pueden mentir de manera tan descarada y salirse con la suya. Lo que importa sobre este tipo de grandilocuencia y de mentiras es que la gente aprecia el hecho de que el líder no tenga miedo de mostrar que hará lo que sea en nombre de sus políticas. Es como una insignia de honor: está dispuesto a mentir, a decir las cosas más ridículas. El líder miente, casi te guiña un ojo cuando dice la mentira. Sus partidarios saben que está mintiendo. Él sabe que ellos saben que está mintiendo. Pero crea un vínculo muy poderoso porque envía el mensaje de que mentirá si es necesario, como cualquier ser humano común. Estamos en un sistema político de líderes que tratan de demostrar que tienen más integridad y más honestidad que los demás. En cambio, este otro tipo de líder te dice, “no soy mejor que tú, soy tan malo como tú”, y esto se percibe como una forma auténtica de hacer política. Además, los medios de comunicación contribuyen a la idea de que todo el mundo quiere conocer de verdad al político como ser humano. Aquí es donde el líder populista gana puntos y te dice, “soy una persona corriente, miento, hago trampa”. Funciona muy bien en sociedades de baja confianza

en los políticos. Es una forma efectiva de dar la impresión de que lo que ves es lo que obtienes, sin artificios. Es un arma increíblemente poderosa.

¿El populismo en Europa es sobre todo de los partidos de extrema derecha? Casi todos los ejemplos de su libro son de estos partidos.

También hay populismo de izquierdas, en Francia e Italia en particular. Es diferente del populismo de derechas porque no es nativista, pero también rechaza la complejidad y se centra en preservar el acervo, los derechos ganados con tanto esfuerzo por una población nacional. Es crítico con cualquier tipo de participación global, en realidad no cree en instituciones multilaterales y es bastante introspectivo. El Movimiento Cinco Estrellas miró a América Latina en busca de inspiración, un poco como hizo Podemos. Mélenchon y Francia Insumisa miraron a Chávez, lo cual fue bastante sorprendente. Hay un rechazo a la complejidad de la globalización. No están particularmente interesados en los inmigrantes. Sin ser abiertamente nativistas, son tradicionalistas. Y desconfían profundamente de cualquier tipo de gobierno tecnocrático. Son como los populistas de derecha en el rechazo de la complejidad y la defensa de las soluciones simples.

¿Los populistas centran más sus mensajes en las medidas contra la crisis climática?

Desde luego, los populistas de derecha se han estado organizando durante varios años con esto. Podemos verlo en el Parlamento Europeo todo el tiempo. También algo en la izquierda. Se denigran las políticas climáticas acusándolas de tomar medidas elitistas. Es el populismo que vemos emerger ahora, como el Partido de los Agricultores en Países Bajos, que no es de extrema derecha y se parece a populistas nórdicos que han salido de partidos agrarios. En Países Bajos los mensajes contra la agenda verde están en la política populista y están funcionando. Y vamos a ver mucho más de eso. Vox tiene negacionistas climáticos.

De hecho, Vox parece haberse centrado más en esto en las últimas campañas.

Participé en una gran investigación académica sobre esta cuestión en 2021. Dije entonces que el clima se convertirá en la nueva inmigración. Con la crisis de esta década y la pandemia, la migración se congeló y los extremistas se estaban quedando

“Cuando el líder miente, sus partidarios lo saben y no le castigan. Es como una insignia de honor: está dispuesto a decir las cosas más ridículas si hace falta: ‘Soy como tú’”



unrwa
españa

con la población refugiada
de Palestina

6 MILLONES DE PERSONAS TE RECORDARÁN

**HAZ QUE TU LEGADO SEA INOLVIDABLE
INCLUYE UNRWA EN TU TESTAMENTO**

Cuando no estés, seguirás viviendo en el recuerdo de todas las personas por las que has hecho algo bueno. Haciendo un testamento solidario a favor de UNRWA, podrás destinar lo que quieras al futuro de casi 6 millones de personas refugiadas de Palestina.

Sin perjudicar al resto de tus herederos, habrás conseguido florecer en la memoria de millones de corazones como un iris de Palestina, la flor que ves en este anuncio.

WWW.ELTESTAMENTOMASJUSTO.ES



do sin munición. El pacto verde en Europa es el arma populista perfecta

porque puedes representarlo como algo elitista: es complejo, es técnico, puedes decir que es una conspiración y que recae desproporcionadamente sobre los hombros de la gente común que necesita ir en coche al trabajo. Es decir, la gente que no puede trabajar desde casa y no vive en los centros de las ciudades donde hay mucho transporte público. Este era uno de los mensajes de los chalecos amarillos. Los activistas del Brexit en el Reino Unido quieren organizar un referéndum sobre el objetivo de cero emisiones. A medida que estas políticas sean más urgentes y tengan efectos, veremos más reacciones populistas contra ellas. Y son el recurso retórico perfecto.

En casi toda Europa en los últimos 30 años se han expandido los derechos y las libertades. ¿Están ahora en peligro?

En algunos lugares como Hungría y Polonia obviamente están en peligro. Es donde la Unión Europea tiene un papel muy importante que desempeñar y lo está intentando. Estos partidos pueden preocuparse por el derecho al aborto, pero les importa aún más el dinero. El dinero de la Unión Europea es un arma bastante básica, pero es un arma.

También podemos mirar a Italia. En política exterior, Giorgia Meloni hasta ahora ha hecho todo lo posible para no alienar a sus aliados europeos. Ha hecho lo que le dijo Mario Draghi que debía hacer si quería obtener el dinero del paquete de recuperación. Pero internamente Meloni saca constantemente a relucir los derechos religiosos o el derecho al aborto. Estos partidos se están volviendo más hábiles: están siendo cautos a nivel europeo, pero saben que, a cambio de ser un poco liberales hacia afuera, tienen que ser más conservadores a nivel nacional.

Lo está haciendo Meloni en Italia. La cuestión es cuánto tiempo puedes seguir haciéndolo hasta que la Unión Europea diga que hay que proteger los derechos de las personas transgénero o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

No creo que haya una reversión efectiva de los derechos todavía en estos países. Pero sí que hay una voluntad creciente por parte de los gobiernos de aplacar a sus partidarios nacionales con acciones en torno a estos derechos. Tienes que darle algo a tus seguidores si eres profundamente conservador, aunque no te estés comportando de forma conservadora en términos económicos y geopolíticos.

Hay una respuesta generacional, una reacción violenta contra ciertos derechos en varios países. Incluso en Francia, con la invención completa de que el país está en las garras del woke (algo así como pijiprogre). Es una retórica que usa la derecha, no solo la extrema derecha, porque sabe que funciona: el sentido de la desagregación cultural, el cuestio-

namiento de lo básico, el género, el país cristiano, el matrimonio, todas las instituciones que están en cierto modo en decadencia, pero que en su agonía están creando focos de simpatizantes receptivos a la retórica anti-derechos.

Pero, si es algo generacional, los partidos de este tipo tendrán problemas a medio plazo.

El problema es que cuando empiezas a ser realmente exitoso, cambias las instituciones. Hungría es el canario en la mina. Una vez que tomas el sistema judicial y los medios de comunicación, todo lo que tienes que hacer es inventar enemigos: Orban ha logrado controlar los medios y luego construir un mensaje sobre cómo el estilo de vida cristiano húngaro está amenazado. Una vez tienes las instituciones puedes crear una falsa realidad.

Puede ser generacional al principio, pero este es el peligro si pones en sus manos las palancas del poder.

En Polonia todavía hay verdadera oposición porque han preservado las instituciones. Si las instituciones desaparecen, la gente no tiene forma de comprobar qué es real y qué no lo es. Entonces puedes empezar a fabricar una realidad alternativa para asustar. Cuando estos partidos permanecen el tiempo suficiente en el poder acaban tomando las instituciones y luego no hay mucho que puedas hacer, especialmente si toman los medios.

¿Quién está reaccionando bien a estos retos?

Quienes están pensando en cómo involucrar a las personas de manera más efectiva en la toma de decisiones.

Lo que ha dado oxígeno al populismo es la política tecnocrática, una política que se siente demasiado técnica, aburrida, opaca y desconectada de la gente común. Esa brecha es enorme.

Ahora estamos en una situación en la que vamos a tener que pedirle a la gente que cambie su forma de vivir por la crisis climática. Y no va a ser suficiente pedirles a los ciudadanos que lo hagan: tienen que entender qué se les pide y por qué.

No vamos a abordar el cambio climático sin tecnócratas, pero necesitamos una capa de políticos que actúen como co-crea de transmisión y tener más deliberación y consulta pública. Es lento, pero a menos que lo hagamos la brecha seguirá creciendo y el populismo, también. Es muy importante seguir construyendo una experiencia compartida. No puedes tener a los expertos de un lado y todos los demás del otro. Tenemos que construir instituciones donde haya un diálogo y la gente tenga la oportunidad de entender.

"Hungría es un canario en la mina: una vez que tomas el sistema judicial y los medios de comunicación, todo lo que tienes que hacer es inventar a un enemigo"

POSITIVE MOTION

ES EL COMPROMISO
DE MOVERNOS
JUNTOS HACIA UN
MUNDO MÁS
SOSTENIBLE

Es ayudar a nuestros clientes en su descarbonización gracias a la producción de hidrógeno verde, biocombustibles de segunda generación y el impulso de la movilidad sostenible.

Es convertirnos en líderes de la transición energética.

Es reducir las emisiones de CO₂ de nuestras operaciones un 55% en 2030 y convertirnos en una compañía Net Positive que crea valor.

Descubre nuestro compromiso en [cepasa.com](https://www.cepasa.com)





PATRICIA BOLINCHES

El antiprogresismo que recorre América Latina

El primer lugar del libertario de extrema derecha Javier Milei en las elecciones primarias argentinas ha terminado de confirmar que América Latina vive – como Europa – su inconformismo de derechas o reaccionario. Desde su posición de outsider, Milei está construyendo una coalición de derecha radicalizada con un discurso contra la “casta política” que incorpora, de manera poco digerida, los tópicos disponibles en el supermercado de las “derechas alternativas” occidentales. “La casta tiene miedo...” es el lema más coreado en sus mitines y caravanas a lo largo y ancho de Argentina.

En su camino hacia la primera vuelta electoral del 22 de octubre, uno de los grandes momentos de la campaña

de Milei ha sido una entrevista estelar con el comentarista estadounidense – estrella del trumpismo radical – Tucker Carlson, donde el economista y presideciable argentino repitió que el cambio climático es un invento de los socialistas y volvió a rechazar el aborto legal (aprobado en el país a fines de 2020). Su acompañante en la fórmula presidencial, Victoria Villarruel, es una activista de la “memoria completa”, que promueve una revisión de la década de 1970 cuyo objetivo es diluir el terrorismo de Estado en la violencia generalizada; una forma de negacionismo “inteligente” de los crímenes de lesa humanidad.

Por estas posiciones, Javier Milei no es un libertario tradicional sino un paleolibertario, tal como lo definiera

el estadounidense Murray Rothbard, quien en los tempranos años 90 ya proclamaba la necesidad de construir un “populismo de derechas” como estrategia política; es decir, construir una alianza entre libertarios/anarcocapitalistas y reaccionarios.

Algo de esto expresa el clima de época actual, aunque como ocurre en Europa, y quizás más, la galaxia ultra latinoamericana es muy variopinta. En Chile, el aliado de Milei es José Antonio Kast, que a diferencia de este está lejos de ser un outsider, pero que comparte su antiprogresismo. Pero mientras que Milei es un libertario antiEstado (que no rechaza por ejemplo la homosexualidad), Kast es un conservador radical: recientemente fue elegido presidente de la Political Network for Values (PNfV) –una organización internacional “pro-vida”–, además reivindica con modales “british” la dictadura de Augusto Pinochet y hoy su partido tiene una influencia decisiva en el nuevo Consejo Constitucional que debe redactar una nueva Carta Magna.

En Lima, el alcalde Rafael López Aliaga es un ultraconservador que dice que se autoflagela para revivir la pasión de Cristo. Y en El Salvador, el por momentos inclasificable Nayib Bukele ha construido un régimen ultrarrepresivo con dos pilares: el encarcelamiento de masas –para acabar con el flagelo de las pandillas (maras)– y la legalización del Bitcoin para proyectar una nación libre y “cool”, que atrae a miles de “bitcoineros” libertarios estadounidenses.

De este modo, América Latina vive un escenario hasta cierto punto paradójico: mientras que en la ola de izquierdas de los primeros años 2000 los gobiernos proyectaban una cierta hegemonía ideológica y cultural, hoy



el escenario es muy diferente: el progresismo gobierna las principales economías de la región, pero las oposiciones de derechas radicalizadas amenazan a las derechas convencionales con el sorpasso, y proyectan una mayor influencia sobre la sociedad.

Los fenómenos políticos y los fenómenos sociales se alimentan parcialmente unos de otros pero corren por vías relativamente paralelas. Las sociedades latinoamericanas vienen experimentando cambios profundos en el terreno religioso, con el crecimiento del evangelismo pentecostal. Y si bien hemos visto a menudo la politización de esta identidad religiosa en clave conservadora, el panorama es muy complejo: hay evangélicos en todos los partidos de base popular, incluidos los de izquierdas, y como ha mostrado el antropólogo Pablo Semán, no se puede dar por hecho el voto evangélico. Brasil es uno de los casos donde una iglesia evangélica, la Universal del Reino de Dios, ha logrado construir un partido, el Republicano, además de un imperio mediático. Pero la Universal es la “menos evangélica” de las iglesias pentecostales, dada su heterodoxa liturgia y métodos de propaganda religiosa. Y como políticos, estos evangélicos no dejan de ser pragmáticos. Lo que podemos observar en estos tiempos son convergencias como nunca antes de católicos y evangélicos conservadores, con referentes políticos ambiguamente católicos-evangélicos como el propio Bolsonaro.

Las nuevas derechas son, además, antipapa Francisco. Milei le acusó de “representante del Maligno”. Y repitió junto a Carlson que es cómplice de todos los regímenes comunistas.

Estas derechas tienen sus intelectuales-influencers, a veces con gran llegada, como es el caso del argentino Agustín Laje, quien es regular-

mente invitado por los políticos conservadores de toda la región y, más recientemente de Estados Unidos. Con un máster en Filosofía en la Universidad de Navarra y buen polemista, Laje se ha “especializado” en la crítica a la supuesta “ideología de género”, y vende un discurso llave en mano para combatir al progresismo, sobre todo al feminismo y a las políticas de educación sexual integral. Sus best sellers, el último de ellos “Generación idiota. Una crítica al adolescentecentrismo”, le permiten proyectarse como intelectual legítimo (las redes sociales no permiten eso, más allá del número de seguidores), y organizar diversos eventos masivos en las ferias del libro regionales, donde se pasa horas firmando ejemplares, sobre todo para sus jóvenes seguidores.

De esta forma, en un contexto de fuerte militancia feminista, que está cambiando el rostro de América Latina, en la región aparecen al mismo tiempo fuerzas antiprogresistas con gran calado social y creciente incidencia institucional. No obstante, a diferencia de Europa, el eje izquierda/derecha funciona solo parcialmente para captar las tendencias en curso.

Los gobiernos de la “marea rosa” de los primeros años 2000 eran casi unánimemente contrarios a la legalización del aborto, aun si en su seno había fuertes tendencias progresistas. Fue el caso de Tabaré Vázquez en Uruguay, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia. A veces por ideología, y a veces por cálculo electoral, estas administraciones no avanzaron en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Recientemente, en un segundo momento, hubo cambios en algunos países, como Argentina, donde Cristi-

na Kirchner revirtió su posición y el aborto se aprobó durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero tanto el aborto como el matrimonio igualitario han avanzando de manera transversal –mediante bloques progresistas de centroizquierda y centroderecha–. La promulgación del matrimonio igualitario en Chile por el presidente Sebastián Piñera es ejemplo de ello. Al mismo tiempo, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y Nicolás Maduro en Venezuela no entran fácilmente en la categoría de progresistas desde el punto de vista cultural.

El progresismo regional carga, además, con otra “mochila”. Si en Europa, el iliberalismo –las nuevas formas de tensionamiento de la democracia– puede asociarse con claridad con la derecha, en América Latina, los regímenes autoritarios son “de izquierdas” (Cuba, Venezuela, Nicaragua), lo que le permite a las derechas radicalizadas, darle “materialidad” a sus eslóganes de Guerra Fría como “Comunismo o democracia”. En Centroamérica tienen, sin duda, más fuerza que en Sudamérica, ya que el sustrato conservador es más fuerte.

La región vive una suerte de interregno político, pero los cambios sociales parecen difíciles de revertir, y precisamente por ello varios de estos grupos se han venido radicalizando. América latina vive la resaca de la izquierda “populista”, que marcó el ciclo de los primeros años 2000, la crisis de la centroderecha tradicional, junto con la emergencia de nuevas izquierdas, que incorporan nuevas sensibilidades y nuevas derechas radicales que intentan hacerse un lugar conectándose con las derechas alternativas globales. La densidad de la sociedad civil en la región es, probablemente, la mejor garantía para frenar posibles retrocesos.



Quando gobierna la izquierda



Quando gobierna la derecha



EasyToys

LA REVOLUCIÓN DE LOS JUGUETES SEXUALES EN EUROPA LLEGA A ESPAÑA

La marca de juguetes sexuales líder en Europa, EasyToys, que cuenta con más de 14.000 productos en su colección y más de 30 marcas propias, se está convirtiendo en la plataforma de bienestar sexual favorita de los españoles.

Hace unos años, los juguetes sexuales solo se encontraban en los estantes de las tiendas pequeñas y escondidos, mientras que ahora se pueden pedir de manera **online, fácil y discreta**. Con el paso del tiempo el tabú ha ido desapareciendo y los juguetes sexuales se ven como una forma positiva y saludable de revitalizar la sexualidad y descubrir nuevos placeres. Sin embargo, la gran variedad de productos puede ser un poco abrumadora, por lo que hoy te presentamos la solución a tus problemas. **El Calendario de Adviento Erótico de EasyToys: tu elegido de esta temporada para regalar(te).**



Todos los productos de EasyToys cuidan el diseño, la funcionalidad y la experiencia del usuario con un **precio muy asequible** para todos los públicos. ¡Termina el año sabiendo qué es lo que te gusta y prueba nuevas experiencias!



“PRODUCTO MÁS VENDIDO”



Descubre más Aquí



JUSTiCiA

Radiografía de la oposición judicial, fiscal y policial

El ala más beligerante del caducado CGPJ trata de erigirse como un contrapoder mientras las corrientes conservadoras han buscado espacios en la Fiscalía y los sindicatos policiales para desgastar al Gobierno progresista



Elena Herrera

Periodista de elDiario.es
@elenaherrerad

Es el oscuro objeto de deseo del poder político. La instancia judicial más delicada, por la que pasan los casos de corrupción y la que tiene la última palabra sobre la mayoría de las causas penales que se juzgan en España. También la que sentenció a los encausados por el procés. Se trata de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la misma a la que se refirió el entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, cuando en 2018 se jactó de que su formación seguiría controlándola “desde atrás” con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La elección de Marchena, que sigue presidiendo la Sala, saltó por los aires con la filtración de aquel mensaje que Cosidó envió a sus 146 compañeros de la Cámara Alta. Pero esta anécdota y, sobre todo, la evolución de la composición de esa instancia judicial son un buen termómetro de cómo funcionan algunas cosas en la Justicia en España. La Sala de lo Penal ha pasado de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2023 sean 12 conservadores frente a cuatro progresistas.

Es una situación paradigmática de un lento proceso al que han contribuido, entre otros factores, los tres bloqueos a los que el PP ha sometido la renovación del órgano que decide los principales ascensos en la carrera judicial: el Consejo General del Poder Judicial. Es una estrategia que estrenó José María Aznar, entre 1995 y 1996; que siguió Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008; y que han exprimido al máximo, primero, Pablo Casado, y después, Alberto Núñez Feijóo. Todo con el objetivo de sostener artificialmente una mayoría de vocales afines —en contra de lo reflejado en las urnas— y mantener abierta una vía de oposición al Ejecutivo desde otro poder del Estado.

En todo caso, no es el único ámbito en el que las fuerzas conservadoras han tratado de inmiscuirse en los últimos años con ese mismo objetivo. Especialmente en la última legislatura, durante el Gobierno de coalición progresista, el eco ha llegado a la Fiscalía, con la cena secreta que mantuvo Feijóo en abril con los fiscales de la asociación conservadora como uno de sus exponentes. También ha salpicado a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han promovido protestas que van mucho más allá de la reivindicación de mejoras de sus condiciones de trabajo o retribuciones. Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil llegaron a decidir una de sus últimas manifestaciones en la sede del PP tras mantener una reunión con Feijóo.

Interinidad desde 2018

El judicial es el ámbito en el que más claro se ha visto esa influencia de las corrientes conservadoras. La clave de bóveda es la parálisis a la que el Partido Popular lleva sometiendo al CGPJ desde hace más de cuatro años y medio. La situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces se remonta a diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años que consagra la Constitución.

Desde entonces, la institución más importante del tercer poder del Estado ha seguido funcionando con una correlación de fuerzas de amplia mayoría conservadora heredada de la mayoría absoluta que Mariano Rajoy logró en 2011, hace más de una década. Gracias a este bloqueo, el PP ha logrado mantener una ventaja que perdió en las urnas hace años, al tiempo que se ha servido del órgano como una plataforma más de oposición.

Durante los dos primeros años de bloqueo, el órgano siguió tomando decisiones tan relevantes como nombrar jueces en los principales tribunales. Hasta que en marzo 2021 el PSOE y Unidas Podemos promovieron un cambio legal para impedir estas designaciones en funciones, el órgano había realizado 74 nombramientos en la cúpula judicial. Entre ellos, los de 21 plazas en el Supremo, consideradas especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.

“Situación crítica, casi de respiración asistida”

Con esa reforma, los partidos de la coalición pretendían forzar al PP a un acuerdo para evitar el atasco generado por la imposibilidad de cubrir plazas. Pero los conservadores se han seguido resistiendo a pesar de la amenaza de colapso que se cierne sobre el principal tribunal del país, el Supremo, que acumula 23 vacantes. Una situación que su actual presidente interino, Francisco Marín, calificó de “crítica, casi de respiración asistida” en su discurso durante la apertura judicial, el pasado 6 de septiembre.

Pero, entre tanto, en la contigua sede del CGPJ ha ganado protagonismo un grupo de vocales especialmente beligerantes y a los que diversas fuentes dentro del órgano atribuyen un “hilo directo” con el PP con la voluntad de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado.

Las fuentes consultadas sitúan en este grupo a cinco de los 11 jueces y juristas elegidos en su día a propuesta del PP, a los que atribuyen el liderazgo de una estrategia de choque institucional que se ha venido poniendo de manifiesto en sus movimientos dentro y fuera del órgano en los últimos meses. Este grupo de vocales lideró durante el otoño de 2022 el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista; buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición o llevó a Bruselas sus críticas al Ejecutivo por la limitación de hacer nombramientos con el mandato caducado.

Las citadas fuentes sostienen que estos mismos vocales también trataron de “instrumentalizar” el órgano para “des-

gastar” al Gobierno con las rebajas de condenas y excarcelaciones de cientos de delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la conocida como ley del ‘solo sí es sí’, uno de los asuntos más complejos que tuvo que abordar la coalición. Lo hicieron, primero, reuniéndose con representantes del Parlamento Europeo a espaldas del resto de vocales para criticar esa norma; y después, filtrando los datos sobre las revisiones de penas con cifras todavía provisionales pero que eran la munición perfecta contra el Ejecutivo con un tema extremadamente sensible.

Es en este escenario en el que se explican los esfuerzos que ha hecho el principal partido de la derecha para negarse a pactar una renovación que requiere el acuerdo de tres quintas partes de las Cámaras y que le haría perder esa mayoría. Una negativa camuflada con excusas cambiantes y crecientes, según el momento político en el que se desarrollaran las conversaciones: de los acuerdos parlamentarios con EH Bildu al veto a los dos candidatos propuestos por Podemos, los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés o la reforma que derogó el delito de sedición.

Y, sobre todo, el PP ha exigido como petición de partida un cambio legal para que los 12 vocales que pertenecen a la carrera judicial sean elegidos de forma directa por los miembros de la carrera judicial sin necesidad de un acuerdo parlamentario entre las grandes fuerzas políticas, que ahora votan sobre una preselección que hacen los propios jueces y magistrados. Es una exigencia que coincide con las reclamaciones de fondo de la Comisión Europea —que pide cambiar la norma que está vigente desde hace 38 años—, aunque Bruselas reclama que primero el órgano sea renovado. Esa posición del PP supone una enmienda a la totalidad de la actual fórmula de elección parlamentaria, que fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE y que el principal partido de la derecha no modificó en sus dos mayorías absolutas.

Pero la tentación es enorme, pues todo apunta a que este modelo permitiría a la derecha judicial copar el CGPJ. La fórmula que propone el PP es de elección directa, mediante “una única lista abierta” y con una circunscripción electoral para todo el territorio nacional. Es un formato similar al que rige para elegir a los miembros de las salas de gobierno del Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales autonómicos, unos órganos que cumplen principalmente tareas organizativas y administrativas, no jurisdiccionales.

Con este sistema, en las últimas elecciones, los miembros de las asociaciones conservadoras de jueces accedieron al 75% de los puestos aunque solo representan al 41% de los magistrados, mientras se laminó la presencia de miembros de la asociación progresista y de no asociados, que son más de la mitad de la carrera judicial.

El PP exige un cambio legal para que los vocales de la carrera judicial se elijan sin pasar por acuerdo parlamentario, lo que permitiría a la derecha judicial copar el CGPJ

Con el PP enrocado en esta posición, asociaciones como la progresista Juezas y Jueces para la Democracia vienen reclamando de forma insistente una dimisión en bloque de los vocales como vía para forzar la renovación. Por el momento, los únicos miembros del órgano que han dado ese paso han sido el expresidente Carlos Lesmes, que dimitió el pasado octubre, y la vocal progresista Concepción Sáez, que renunció hace casi medio año. La dimisión de esta última alentó un conato de dimisión de los vocales del minoritario sector progresista que finalmente quedó en nada.

En los últimos años, la asociación conservadora y mayoritaria de fiscales también ha aumentado su dominio en el Consejo Fiscal, que es el órgano de representación del Ministerio Público. Sus nueve cargos electos son los que resultan más votados por todos los miembros de la carrera en unas elecciones abiertas. Tras los últimos comicios, resultaron elegidos seis vocales de la Asociación de Fiscales, dos de la Unión Progresista de Fiscales y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. La influencia de este órgano en los nombramientos es limitada, pues aunque por ley sus miembros tienen que pronunciarse, la última palabra la tiene el fiscal general.

La reunión con los fiscales

El de los nombramientos discrecionales ha sido uno de los caballos de batalla de la Asociación de Fiscales, que ha llegado a recurrir alguno de ellos ante el Supremo. Es la misma asociación que el pasado abril invitó a una cena-coloquio en un hotel de Madrid al líder del PP. Una cita que no estaba agendada entre sus actividades. Según desveló El País, fiscales con puestos de nivel en el Supremo como Antonio Narvárez o Consuelo Madrigal aprovecharon ese encuentro para expresar su cercanía ideológica con Feijóo y criticar al Gobierno por la “falta de democracia en los procedimientos legislativos” o por sus alianzas “con los filoetarras de Bildu”.

La cita soliviantó al Ejecutivo, que calificó de “gravísimo” un encuentro en el que algunos fiscales hicieron comentarios que chocan con el Código Ético de la carrera fiscal, que recuerda que los miembros del Ministerio Público “deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación a su independencia e imparcialidad”.

Esta no es la única cita controvertida que Feijóo ha mantenido en los últimos meses. En diciembre del año pasado, el líder

del PP recibió en la sede Génova a sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil ante los que ensalzó la acogida que su trabajo y sus reivindicaciones tienen en la sociedad. Desde el partido justificaron que se trataba del habitual encuentro que mantienen los presidentes del PP cuando llegan al cargo con los representantes de las Fuerzas de Seguridad, pero algunos de los asistentes interpretaron las palabras de Feijóo como una invitación a protestar contra la reforma de la ‘ley mordaza’ que trataba de impulsar el Gobierno de coalición.

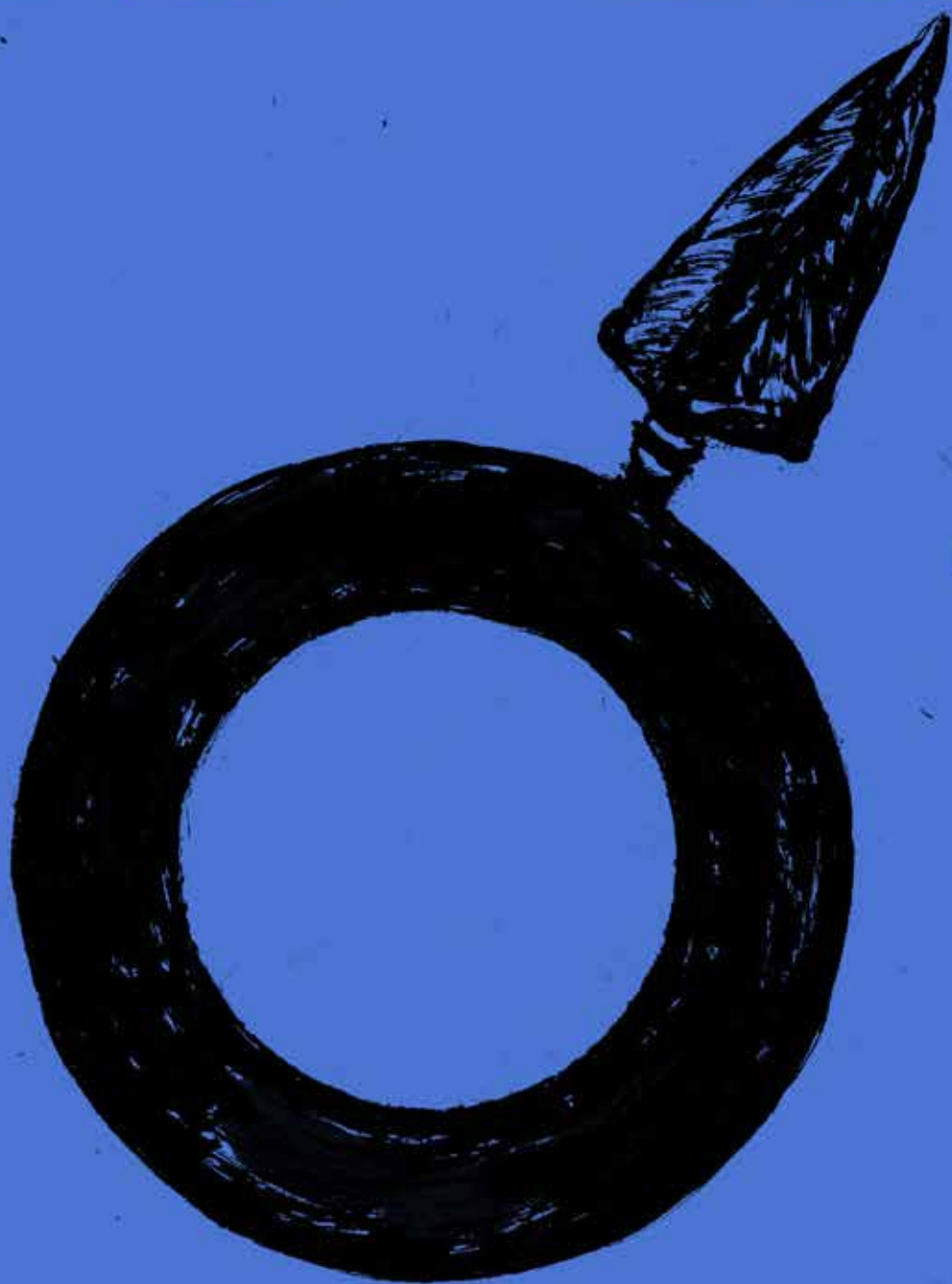
Se dio la coincidencia de que justo después de esa reunión, ya sin miembros del partido, los representantes sindicales debatieron en una sala de Génova sobre convocar otra gran manifestación. La publicación por elDiario.es de ese encuentro y la polémica que le sucedió terminó por desanimar a la mayoría de los presentes, pero Jupol, exponente de las posiciones más radicales en el seno de la Policía Nacional, siguió adelante con la convocatoria. Las últimas elecciones sindicales, el pasado junio, fueron un fracaso para ese sindicato, que redujo a la mitad sus apoyos y dejó de ser el mayoritario.

La hemeroteca, sin embargo, da cuenta de las potentes movilizaciones promovidas por una nueva fuerza de choque política que empezó a adquirir relevancia a partir de una primera manifestación en Barcelona el 20 de enero de 2018, apenas tres meses después del referéndum del 1-0. La protesta tenía una supuesta exigencia de subida salarial a pesar de que en la capital catalana no están ni las sedes del Ministerio del Interior ni de Hacienda, organismos de los que dependían la satisfacción de sus reivindicaciones.

Ese día la asociación policial se hizo visible más allá del ámbito de las Fuerzas de Seguridad y ganó protagonismo para lo que vendría después: la moción de censura y un Gobierno progresista. El objetivo de las siguientes protestas, donde fue habitual el apoyo presencial de dirigentes del PP y Vox, fue la ‘ley mordaza’. Una norma diseñada para atajar las protestas que sacudieron el país durante los recortes posteriores a la crisis de 2008 y que ha acabado sobreviviendo al Gobierno progresista por la incapacidad de los partidos que sustentaban al Ejecutivo y sus socios parlamentarios para llegar a un acuerdo para modificarla en sus aspectos más lesivos. “Los sindicatos policiales, la derecha y la extrema derecha están brindando”, dijo Enrique Santiago, negociador de Unidas Podemos tras aquellas frustradas conversaciones.

El incierto panorama político añade incertidumbre al comportamiento de estos actores ante las nuevas coyunturas que se abran. Por el momento, tras las elecciones del 23J, Feijóo tiene previsto mantener el bloqueo constitucional que ha impulsado el PP cada vez que no ha estado en la Moncloa.

Dossier
DERECHOS
EN PELIGRO



**VIOLENCIA
MACHISTA**

La negación no es solo un discurso

El negacionismo de la violencia de género y el neomachismo vertebran la acción política de la extrema derecha, pero no son solo palabras: cuando los agresores se ven legitimados, se pone en riesgo la vida de las mujeres



Ana Requena Aguilar

Redactora jefa de Género de elDiario.es
@RequenaAguilar

Era 25 de noviembre de 2019 cuando una mujer llamada Nadia Otmani se encaraba con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. El consistorio celebraba un acto institucional para conmemorar el día internacional contra la violencia de género, un acto que Vox intentó boicotear. Otmani se dirigió entonces a Ortega Smith: “Respeten a las muertas. Con la violencia de género no se hace política”, le gritó a la cara.

Hace años que Nadia Otmani va en silla de ruedas debido a las balas que la expareja de su hermana le disparó cuando ella intentaba defenderla de una agresión. “No me he podido aguantar. Están declarando la guerra a las mujeres”, aseguraba después del acto Otmani, presidenta de la asociación de mujeres Al Aman, en la que atienden también a huérfanos de la violencia machista.

El desprecio de Ortega Smith, que no fue capaz de mirar a la cara a la mujer que le interpelaba, es solo un episodio más de una lista que Vox va agrandando con el tiempo y que muestra hasta qué punto el negacionismo de la violencia de género y el neomachismo vertebran el discurso y la acción política de la extrema derecha. La irrupción de Vox en la política institucional ha roto el consenso conseguido alrededor de la violencia machista. Más allá del impacto en el discurso y en lo simbólico, sus posiciones políticas tienen consecuencias concretas. La extrema derecha se aparta de los minutos de silencio por las víctimas mortales de la violencia de género, pero también desarticula medidas que previenen esa violencia y que sirven para atender a quienes la sufren.

“Lo que se ha conseguido con el impulso feminista y el desarrollo de las políticas de igualdad es transformar la realidad y cuestionar el marco cultural androcéntrico. Ya no solo vemos las consecuencias sino que vemos las causas y su significado. Es un proceso de transformación activo e imparable, aunque hay resistencias”, cuenta el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente. En esa transformación ha sido fundamental la toma de conciencia alrededor de la violencia machista, incluida la violencia sexual, una causa que ha aglutinado buena parte del discurso feminista.

“Para quienes están en posiciones androcéntricas y especialmente para la extrema derecha la violencia de género supone una crítica directa a un modelo de sociedad, a esos valores y creencias que defienden. Por tanto, cuando niegan su existencia están intentando salvaguardar su modelo cultural de esa crítica que una gran parte de la sociedad comparte. El negacionismo es un afirmacionismo: si tú niegas lo que cuestiona tu modelo social y cultural lo que estás intentando hacer es reafirmarte, y de paso impedir que la sociedad tome conciencia de la construcción cultural de género”, explica Lorente.

Esa negación ayuda, por tanto, a reafirmar un modelo de sociedad y un tipo de masculinidad y a hacerlo pasar

por 'lo normal'. "Los agresores se ven reforzados y confirmados en esas posiciones, en esa identidad que entiende que la violencia es algo legítimo, un instrumento propio para castigar a las mujeres. Se está facilitando el victimismo de los hombres: si a ti te acusan de algo que no existe, y además sufres consecuencias por ello, crece la agresividad, la violencia y la ira dentro de esos hombres", prosigue el experto.

El discurso de Luis Rubiales ante la asamblea de la Federación Española de Fútbol fue un caso claro de victimismo que busca culpar al "falso feminismo" de un retroceso social que prácticamente juzga y condena a los hombres en su conjunto. Es una estrategia parecida a la que siguen algunos líderes de las derechas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado en varias ocasiones la criminalización de los hombres.

¿Refundar el machismo?

"De esta manera las medidas de igualdad se plantean como una especie de instrumento en contra de los valores y de las costumbres que han forjado nuestra sociedad, se presenta el feminismo como un ataque, no como justicia social o un avance en derechos humanos sino como una guerra cultural", añade Miguel Lorente. Del mismo modo que en 2008, en pleno estallido de la crisis económica, Nicolas Sarkozy propuso "refundar" el capitalismo, pareciera que algunas voces propusieran refundar el machismo, "mantener el orden y la estructura pero con otros argumentos", y hacer pasar ese orden por algo neutral, sin significado de género.

"La violencia no tiene género" o "el género es un concepto ideológico que no compartimos", repetía precisamente el fundador de Vox y candidato en las elecciones generales, Santiago Abascal, durante la última campaña. La propuesta de Vox al respecto es contundente: derogar la ley de violencia de género. De momento, el partido de extrema derecha fue el único que no suscribió la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista a finales de 2021. Ese pacto recoge más de 300 medidas y mejora también la financiación para que comunidades y ayuntamientos las pongan en marcha.

Por eso, la socióloga especializada en violencia de género Elena Casado subraya que, más allá de hablar de derechos amenazados, hay que hablar también de vidas concretas en riesgo. "Tenemos que evitar relatos descarnados y no olvidar que detrás de estas amenazas hay riesgos para personas, en este caso mujeres, que ya están en una situación vulnerable. Algunas de las medidas que toman marcan las condiciones materiales y por tanto las posibilidades de muchas mujeres, esto impacta directamente en sus vidas", ase-

gura. Los gobiernos de coalición de PP y Vox en autonomías y ayuntamientos ofrecen ya ejemplos de cómo el discurso se materializa en cambios que amenazan la prevención de la violencia de género pero también la atención a las mujeres y sus hijas e hijos.

En una de cada tres ciudades de más de 40.000 habitantes en las que el PP gobierna en coalición o con apoyo del partido de Santiago Abascal, el nuevo equipo de Gobierno ha eliminado la concejalía de Igualdad. En la lista hay dos capitales autonómicas, Valladolid y Toledo, y las ciudades de Burgos, Huelva, Talavera de la Reina, Orihuela, Molina de Segura y Ponferrada. Catorce ciudades sí mantienen la concejalía, pero lo hacen mezclando sus competencias con otras, en algunos casos tan dispares como Fiestas o Turismo, o con áreas como Mayores o Familia.

Son precisamente las concejalías de Igualdad las que se encargan de gestionar los recursos y la atención a mujeres que sufren violencia machista: casas de acogida, centros de urgencia, asistencia legal y psicológica... "Es preocupante porque precisamente los ayuntamientos, las concejalías de Igualdad, son la mano más cercana de las instituciones para las víctimas. Gestionan muchos recursos de atención que requieren de una dedicación imprescindible para salvar vidas. Si lo más cercano falla y se desentiende de la violencia machista, la sensación de inseguridad o los discursos negacionistas pueden ser fatales para las mujeres y sus hijos e hijas, y pueden llevar a las víctimas a no ver salida a su situación. Cuando hablamos de llegar a tiempo, las leyes son el marco, pero las concejalías de Igualdad son las que las aplican y garantizan que la prevención, detección y atención a las víctimas sean una prioridad", reflexionan desde el Ministerio de Igualdad.

Sin ayudas y sin salida

Más allá de lo que sucede con las concejalías especializadas, en ayuntamientos como el de Maracena, en Granada, el gobierno local, de PP y Vox, ha eliminado como criterio preferente para entrar en la bolsa de empleo ser víctima de violencia machista. En Castilla y León, con un ejecutivo de las derechas, la ley autonómica de violencia de género ha dejado de cumplirse en todos sus términos. La consejería de empleo, dirigida por Vox, ha eliminado las bonificaciones a la contratación de víctimas de la violencia machista y ha suprimido la contratación de agentes de igualdad en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Según explicaba la secretaria de Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacárregui, en un reportaje de elDiario.es, en 2021, antes de que Vox llegase al Gobierno, 2.405 víctimas de violencia de género tuvieron la oportu-

Miguel Lorente: “Se está facilitando el victimismo de los hombres: si a ti te acusan de algo que no existe, y además sufres consecuencias por ello, crece la agresividad, la violencia y la ira”

Teresa Pulido: “A muchas les cuesta identificar y asumir que están en una relación de violencia. Si encima te dicen que la violencia no tiene género, la confusión aumenta”

En una de cada tres ciudades donde gobierna el PP junto a VOX se ha eliminado la concejalía de Igualdad y las que la mantienen la mezclan con Fiestas o Turismo

nidad de participar, como grupo específico prioritario, en 5.714 acciones del Instituto de Empleo de Castilla y León con servicios que van de la orientación para el empleo a la formación o el autoempleo. “En 2022 estas oportunidades desaparecieron. También desaparecieron como colectivo específico en las bases y convocatorias de los programas de fomento de la contratación indefinida o en la conversión de contratos. Las cuantías totales de las ayudas a las empresas (1.500 euros contrato) ahora se reparten entre las mujeres víctimas de violencia de género y las víctimas de violencia intrafamiliar (las personas víctimas de violencia intrafamiliar es ejercida por cualquier miembro de la familia sobre otro miembro de la familia: abuelos o abuelas, hijos o hijas, sobrinos/sobrinas). Es absurdo”, decía.

En Ciudad Real, PP y Vox aprobaron eliminar la denominación “para víctimas de la violencia de género” de la casa de acogida que llevaba tres décadas funcionando. Sin embargo, después de la publicación de la información en elDiario.es y de las críticas recibidas, el PP rectificó y oficializó por decreto la denominación de “casa de acogida para víctimas de violencia de género”.

Teresa Pulido es trabajadora social del Programa Fortaleza de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que atiende a mujeres telefónicamente en todo

el país y presencialmente en varias comunidades y ciudades. Pulido asegura que han sufrido recortes y que eso ha afectado a la plantilla que puede atender a las mujeres en sus centros. Señala que el discurso negacionista de la violencia y el relato de las denuncias falsas, también alentado por la extrema derecha, tiene consecuencias en las mujeres.

“No es una guerra cultural, es la vida”

“A muchas les cuesta identificar y asumir que están en una relación de violencia, porque previamente a las agresiones físicas o incluso asesinatos que vemos en la televisión suele existir un maltrato psicológico, muchas veces continuado en el tiempo, que confunde y hace más difícil identificar la violencia. Si encima te dicen que la violencia no tiene género y te la equiparan con la intrafamiliar, por ejemplo, pues la confusión aumenta”, explica. La extrema derecha lanza con frecuencia bulos e inexactitudes, como el que habla de hombres asesinados por sus parejas o el de las denuncias falsas que, sin embargo, son apenas un 0,1% del total. “Por cada una que denuncia hay 99 que no lo hacen. Además, después de la denuncia todo suele ser complicado. Denunciar cuesta mucho por varios motivos, también porque vas a denunciar a una persona con la que has tenido una relación, o a la que has querido o con la que te has casado... Hay mucha inseguridad y obviamente este tipo de discursos solo hacen que esa inseguridad crezca”, asegura la trabajadora social, que reclama que los recursos específicos para la violencia machista se mantengan, puesto que es una violencia específica y estructural que debe estar ligada a sus causas –el machismo– y, por tanto, tener respuestas específicas.

Más allá de cómo evolucione la extrema derecha en España, la socióloga Elena Casado cree que hay un daño que ya está hecho: “Su ciclo está en retroceso, pero más allá del apoyo electoral que obtengan, que por supuesto es importante, el marco ha cambiado y algunas cuestiones que parecían impensables están ahora en debate”. No obstante, la experta también considera que el feminismo ha instalado una pedagogía que ha llegado para quedarse. Hechos como el beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jenni Hermoso y la reacción social que ha generado, apuntan a que el feminismo ha conseguido superar el eje izquierda y derecha. Algunos comportamientos son ya sencillamente intolerables. Casado insiste en que el discurso y la acción alrededor de la violencia machista es mucho más que retórica: “No es una guerra cultural, son las vidas cotidianas”.

MEDIO AMBIENTE



La imparable revolución de un planeta sano

Gobiernos PP-Vox han decidido eliminar carriles bicis y fomentar el uso intensivo del agua en zonas tensionadas por la sequía, pero el derecho humano a un medio ambiente limpio y sostenible, reconocido por la ONU en 2022, puede ayudar a combatir estas políticas



Raúl Rejón

Periodista en elDiario.es
@raulrejon

Hace algo más de un año, en julio de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobaba la declaración de un medio ambiente “limpio, saludable y sostenible” como un derecho humano universal. Culminaba un recorrido de 50 años, desde que el concepto apareciera en la Declaración de Estocolmo de 1972, hasta su reconocimiento universal.

Ciento sesenta y una delegaciones votaron a favor. Más allá de forzar cambios legales –o no– este paso ha implicado un cambio de perspectiva significativo. Los propios ciudadanos ya no deberán, en palabras de la misma ONU, “mendigar” por un aire, un agua o una naturaleza limpios. Podrán “exigir” ese derecho universal reconocido. Y van a tener que utilizar esa arma.

Aquel día de hace algo más de un año, el secretario general Antonio Guterres dijo que se trataba de una “resolución histórica”. Llegó a asegurar que iba a servir para acelerar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los países. Un año después de aquella resolución, en España –pero no solo– está ocurriendo lo que podría haber parecido impensable: pasos atrás nítidos, concretos y con efectos sobre la protección del medio ambiente.

Elche (Alicante). 23 de junio de 2023 por la tarde. Ya metidos en el periodo estival, un pelotón de ciclistas ciudadanos pedalea por la ciudad. Aunque al paso del grupo hay aficionados en las cunetas que aplauden y animan no es una etapa de la Vuelta ciclista a España. No hay maillot amarillo ni rosa ni rojo. No hay metas volantes ni premio especial de la montaña. Se trata en realidad de una protesta para exigir el derecho a respirar un aire un poco más limpio, como vaticinaba la propia ONU que habría que hacer. Una bicifestación.

“Volem, volem, volem las bicis al carrer” era uno de los lemas en la manifestación sobre ruedas –“queremos las bicis en la calle”–. La ruta, una protesta dirigida contra el recién estrenado equipo de Gobierno local. El nuevo Ayuntamiento no llevaba ni una semana de mandato.

La cuestión es que, en esa ciudad, el nuevo alcalde, Pablo Ruz (PP), ya había anunciado en su propio discurso de toma de posesión el desmontaje del carril bici de la urbe. Afirmaba que se iba a deshacer de un plumazo una de las patas por las que Elche había recibido un premio de Buenas Prácticas Locales en septiembre de 2022. Pero es que Ruz se había aliado con el partido ultraderechista Vox para poder acceder a la alcaldía en detrimento del PSOE, el partido más votado en las elecciones municipales ilicitanas de 28 de mayo de 2023. Y el carril bici, y con él la vía por la pueden moverse los ilicitanos en dos ruedas de manera más cómoda, tenía que desaparecer.

¿Por qué les sobra el carril bici? Supone una molestia para los coches. A cambio, el proyecto de Ruz y sus socios de ultraderecha es habilitar unas 1.500 plazas de aparcamiento para coches –de pago– en la zona. La ciudad del

palmeral sirve de ejemplo sobre cómo, en casi un instante político, lo avanzado da marcha atrás.

Con la sustitución de bicicletas por automóviles en las calles, lo que es científicamente inequívoco es que el aire que van a respirar los ciudadanos de Elche estará en peores condiciones. Y con un aire peor, habrá una peor salud. Unas 30.000 personas mueren al año por culpa de la contaminación de aire en España a pesar de que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales del ser humano”, sentencia la Organización Mundial de la Salud.

“No se trata de un capricho ecologista”, reflexiona la directora ejecutiva de SEO-Birdlife, Asunción Ruiz sobre el derecho a un medio ambiente cuidado. “Se trata de un derecho que garantiza otros muchos derechos fundamentales”. La SEO estuvo implicada en la campaña 1Planet1Right que perseguía el reconocimiento de este derecho universal sobre el que “no podemos dar ni un paso atrás en los avances conseguidos”.

La directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, ha explicado que la resolución a la que dio luz verde la Asamblea general de la ONU en 2022 no tiene un efecto legal directo pero, “transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza”. Ni la naturaleza “ni el aire limpio, ni el agua limpia o privarnos de un clima estable”. Y luego añadía: “Al menos, sin luchar por ello”.

“Libertad absoluta de circulación”

A la luz de lo que está ocurriendo en 2023, la apelación de Andersen a la lucha para defender el nuevo derecho ha resultado profética. Hay bastante que hacer por delante.

Elche no está sola en la oleada de ciudades que, a mediados de 2023, han decidido poner palos en las ruedas a medidas que buscan mejorar la calidad del aire. En Gijón, el Ayuntamiento optó al llegar al poder por permitir que los automóviles más contaminantes puedan viajar y estacionar y avanzó al tomar las riendas de la ciudad que su zona de bajas emisiones (ZBE), es decir, el área restringida para el tráfico sería la mínima expresión.

La alcaldesa de la ciudad asturiana desde junio de 2023 se llama Carmen Moriyón. Es líder de la formación Foro Asturias y llegó al bastón de mando gijonés aliándose con el PP y Vox. Moriyón defendió su plan echando mano de un supuesto conflicto con la libertad: “Los vehículos tendrán a partir de ahora absoluta libertad de circulación y aparcamiento por las calles y viales gijonenses”.

En Valladolid la primera decisión acordada por los nuevos responsables municipales en junio de este año fue derogar la ordenanza de movilidad. Así evaporaban la supresión de limitaciones a los coches en 21 calles, y desmantelaban carriles bus-taxi. También decidió dejar la ZBE en lo mínimo.

Mientras, en Castellón y Lorca quisieron retrasar la puesta en marcha de esas zonas de restricción, que son obligatorias para los municipios de más de 50.000 habitantes por mandato de la Ley de Cambio Climático. De hecho, debían haberse puesto en marcha el 1 de enero de 2023.

“Las leyes pueden ser potentes, pero tenemos fuerzas que van en sentido contrario”, analiza Luis Suárez de WWF. “Pueden buscar desde bloquear nuevos avances hasta no aplicar obligaciones como está ocurriendo, precisamente, con las ciudades aquí en España”. Suárez abunda en que, en un caso como el de las zonas de bajas emisiones, “hace falta mucha pedagogía como ocurrió en la ZBE de Madrid que parecía que iba a causar una hecatombe y ahora ya nadie quiere quitarla”.

En todo caso, ya sea a base de transformar carriles bici en vías automovilísticas y aparcamientos, o dilatar las medidas que desincentiven el uso del vehículo de motor particular, promover más coches implica más contaminación. Las principales fuentes de contaminación de aire son el consumo de energía (si proviene de fuentes fósiles) y los vehículos de combustión. En sus motores se queman carburantes derivados del petróleo que emiten CO₂, dióxido de nitrógeno y micropartículas. Los dos últimos son agentes nocivos para la salud de los humanos que los inhalan.

Asunción Ruiz defiende con vehemencia que “garantizar un medio ambiente sano es garantizar los recursos naturales que permiten la vida en la Tierra”. Y liga el derecho a disfrutar de unos ecosistemas sanos con los propios derechos sociales. “Si no atendemos a la precariedad ambiental se agravará la precariedad social. No podemos, por ejemplo, convertir a España en el desierto de Europa por arrinconar las políticas ambientales. Eso significaría perder todas las oportunidades que ese medio ambiente en buen estado ofrece para el empleo de calidad y el estado del bienestar”.

Porque si hay una excusa de primer orden que se utiliza para justificar el deterioro ambiental es la supuesta necesidad de desarrollar la economía. De producir. Un ejemplo: “Revisaremos las prohibiciones y limitaciones de la Red Natura para compatibilizar la conservación con el desarrollo de las zonas rurales”. La frase proviene del acuerdo de coalición entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura. Y dice que las normas que protegen los ecosistemas más

Los casos de litigios climáticos han pasado de 884 en 2017 a 2.180 hoy. Estos litigios son un combate judicial para reclamar el derecho a un medio ambiente sano ante la inacción de los gobiernos o agresiones de empresas como las petroleras

Asunción Ruiz: "Si no atendemos a la precariedad ambiental se agravará la precariedad social"

Los nuevos gestores del patrimonio natural de Extremadura consideran que las "limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales" son un obstáculo al desarrollo

valiosos de Europa y los incorpora a una red continental, la denominada Red Natura 2000, son un posible obstáculo económico.

Esta confrontación de derechos es la que combate, por ejemplo Luis Suárez: "Es un error ver el medio ambiente como un obstáculo para el desarrollo cuando es al revés, sin medio ambiente no hay desarrollo".

El ejemplo de Extremadura es más largo. Los nuevos gestores del patrimonio natural de esa comunidad consideran que "limitaciones, prohibiciones y obligaciones ambientales" hacen desaparecer actividades. También les molesta la acción contra el calentamiento global de la Tierra ya que han firmado "eliminar cualquier traba burocrática o legislativa climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños".

Si disponer de un medio ambiente en buenas condiciones es un derecho, cuidarlo es una acción necesaria y, sin embargo, "no se le está dando la importancia o el peso que debería", reflexiona el miembro de WWF. "Ya no se trata muchas veces del negacionismo que se ha instalado en el ambiente político sino de que se llega a decir que es una pérdida de tiempo".

Y mientras tanto se suceden compromisos como aumentar la superficie de regadío como han firmado los nuevos

gobiernos de coalición entre el PP y Vox en la misma Extremadura, en la Comunitat Valenciana o en Aragón. El regadío, desde luego es muy rentable. El 23% de toda la superficie de cultivos, que es lo que supone el regadío, produce el 65% de todas las cosechas. Las fincas con agua multiplican su valor por tres, por cinco, por 14... El problema es que se hace muchas veces a costa de los ecosistemas acuáticos. Y el uso intensivo del agua.

La manera en que ese uso intensivo ha depauperado los ecosistemas y socavado el derecho a un medio ambiente saludable tiene algunos nombres y apellidos muy conocidos. ¿Qué ha pasado en Doñana? ¿Cómo se ha llevado a las Tablas de Daimiel al borde de la desaparición?

En agosto de 2023 se ha secado por segunda vez consecutiva la última de las lagunas, en su momento, permanentes de Doñana. Santa Olalla se quedó sin agua por la funesta combinación de falta de lluvias y extracciones masivas de agua del acuífero del que vive Doñana. En las Tablas, el humedal no existe si no se represa un mínimo caudal en algunas zonas para que den apariencia de ecosistema acuático.

Derechos que se evaporan

En ambos casos –hay muchos más– se ha cercenado e incumplido la resolución de la ONU que hablaba de un medio ambiente "limpio, saludable y sostenible". Sí, efectivamente, ese medio es un derecho humano, se ha evaporado.

Inger Andersen comentaba que tener el respaldo de la Asamblea de la ONU hacía que, si no garantizar, al menos daba a los ciudadanos un arma para luchar por disponer de ecosistemas en buen estado. Que no es otra cosa que tierra, aire, agua y clima en buen estado. Cada vez más personas recurren a los tribunales para defender su derecho.

El ejemplo más claro lo conforman los litigios climáticos. Los casos en los juzgados se han duplicado desde 2017 al pasar de 884 a 2.180 en todo el mundo. Estos litigios son, en esencia, un combate judicial para reclamar ese derecho ante las inacciones de los gobiernos para atajar el cambio climático o ante las agresiones de empresas como una gran petrolera.

"Las leyes pueden ser sólidas, pero hace falta la voluntad de aplicarlas", dice Luis Suárez. Lo que toca ahora es "seguir persiguiendo la aplicación efectiva de este nuevo derecho humano universal para hacer de nuestro planeta un lugar donde la humanidad y la naturaleza puedan vivir realmente en paz y armonía. Cada vez que expoliamos nuestro medio ambiente, nos están desplumando nuestros derechos", remata Asunción Ruiz.

SANIDAD PÚBLICA



**Un succulento pastel
para la privada**

El gobierno del Botànic en Valencia paralizó y revirtió las privatizaciones que se habían demostrado dañinas tanto en lo económico como en lo asistencial. La Marea Blanca se prepara ahora para un nuevo envite de los que ven la Sanidad como su negocio



David Noriega

Periodista en elDiario.es

@David_Noriega

Las primeras sillas de las que se tiene registro datan de hace casi 6.000 años y fueron localizadas en Egipto. Por aquel entonces eran un símbolo de estatus y poder, pero con el avance de la civilización su uso se popularizó. Lo que hoy es un objeto común, que se encuentra en cualquier casa, puede llegar a ser también simbólico. Cuando Cristina de la Cámara impulsó uno de los primeros equipos de atención primaria, a mediados de la década de los años ochenta, lo primero que pidió fue un asiento para sus pacientes. “Antes se evitaba que se sentaran, porque así hablaban menos”, recuerda.

De la Cámara espera, también sentada, en un banco de madera en una de las calles que atraviesan el distrito madrileño de Carabanchel. Frente a ella, se erige una gran mole escalona-

da de ladrillo visto, que con los años ha ido mudando su estructura pero que ha sido testigo de los cambios del sistema sanitario español del último siglo. Esta doctora, ya jubilada, ha formado parte de muchos de ellos, siempre con su ancla en lo que ahora es el centro de salud General Ricardos, uno de los que se atrincheró contra la privatización sanitaria pretendida por el PP de Madrid que impulsó las Mareas Blancas.

“De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos desde la emergencia misma de la administración contemporánea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la Sanidad”. En un momento en el que los cambios que necesita el sistema se reclaman desde asociaciones de profesionales, foros, sindicatos y desde las propias calles, con un año de reivindicaciones que han dejado imágenes de bulevares abarrotados, el entrecomillado podría parecer actual. Es, sin embargo, el inicio de la ley General de Sanidad, que puso en 1986 los cimientos que vertebran la estructura actual de la salud en España. “Es un dato histórico fácilmente verificable que las respuestas públicas al reto que en cada momento ha supuesto la atención a los problemas de salud de la colectividad han ido siempre a la zaga de la evolución de las necesidades sin conseguir nunca alcanzarlas”, continuaba en su preámbulo.

“No se atendía a personas sino a mano de obra”

De la Cámara se licenció en 1975, el año que el dictador murió en su cama. En casa, Cristina había vivido desde niña lo que era la medicina. “Mi padre era médico e intervino en la organización del sistema de Seguro Obligatorio de Enfermedad en los años 40, un proyecto que venía esbozado desde la época de la República –truncada por el alzamiento militar– y que se impuso en varios países europeos de distintas ideologías”, explica. Aunque sí heredó la vocación por su profesión, no ocurrió lo mismo con la ideología que le venía de cuna: “Mi padre había luchado en el bando de Franco, pero en la universidad yo formé parte de la lucha antifranquista del movimiento estudiantil”.

Mejorar el sistema tras cuatro décadas de dictadura era inminente, sobre todo para cumplir con el mandato constitucional, que reconoce el derecho de la población a la protección de la salud, que fía a los poderes públicos. Durante el franquismo, “la atención sanitaria pública estaba muy restringida, inicialmente, a las poblaciones trabajadoras, con una perspectiva de reintegración laboral. No se atendía a las personas, se atendía a la mano de obra”, explica De la Cámara. Las generaciones de más edad recordarán todavía las iguales, que se pagaban a los médicos por la atención, o, años después, los ambulatorios donde los profesionales atendían durante dos horas al día a sus cupos, un sistema que convivió con el de atención primaria hasta bien entrados los años 90.

Esos ambulatorios, recuerda Cristina, fueron “un salto ade-

lante en cuanto a planificación”. “Era una consulta de batalla, donde un montón de médicos atendían durante dos horas al día.

Todavía se fumaba, las puertas estaban abiertas, no había historia clínica, ni registros y los pacientes estaban de pie”, explica la doctora, que consiguió una de esas plazas de dos horas en General Ricardos en la primera convocatoria para acceder por concurso en 1980. “Antes te la daban según llegabas”, indica. Un año después, la crisis por el drama del aceite de colza puso al país en alerta. El Ministerio de Sanidad de la UCD, con Jesús Sancho Rof al frente, impulsó las Unidades de síndrome tóxico en las zonas más afectadas, con médicos y médicas de varias especialidades y personal de enfermería, administrativos y de trabajo social. “Eran muy parecidas a lo que luego fueron los equipos de atención primaria”, recuerda De la Cámara, que había hecho el MIR de medicina interna, se fue a montar uno de estos grupos al ambulatorio de Los Pedroches, en Leganés.

En 1984, dos años después de la abrumadora victoria del Partido Socialista en las elecciones generales que llevaron a Felipe González a la Moncloa, el Gobierno publicó el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud, el fundamento de la atención primaria que definía los actuales centros y sus equipos, multidisciplinarios y con turnos de siete horas. “Otro compañero y yo empezamos a recoger firmas para que se hiciera un equipo de Primaria en nuestro centro. Se unieron 12 o 13 médicos y se inauguró en junio de 1987”, recuerda con orgullo sobre aquel grupo bautizado ‘San Isidro’.

Los profesionales sanitarios ‘reconvertidos’ convivían con los que permanecían con las condiciones del modelo antiguo y arrastraban su cupo de pacientes. “Mil o mil y pico”, aclara la doctora. Este número no ha cambiado mucho desde entonces. Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el 38,2% de los médicos y médicas de familia tiene asignadas más de 1.500 tarjetas, que la organización considera “el límite máximo para garantizar una adecuada atención sanitaria”. En cualquier caso, las cosas han cambiado mucho desde 1987. La esperanza de vida era de 76 años y el 12% de la población tenía más de 64. Hoy, ese porcentaje supera el 20% y, al nacer, esperamos vivir más de 83 años. Según aumenta la edad, se multiplican las patologías crónicas y las visitas al centro de salud. La Organización Médica Colegial publicó en mayo ‘Los retos del sistema nacional de salud en la próxima legislatura’, en el planteaba la necesidad de reorientar el sistema hacia la salud y aumentar el tiempo asistencial con esos pacientes. “El tiempo es una reivindicación constante”, reconoce De la Cámara.

En 2002, culminó la transferencia de las competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas. Para enton-

ces, el Gobierno conservador de José María Aznar ya había allanado el camino a sus intenciones neoliberales. Con un solo artículo, la ley 15/1997 permitió la entrada de las empresas privadas en la sanidad pública. Solo se opusieron a esa norma Izquierda Unida y el BNG. Y, con la ley de financiación autonómica de 2001, se reconocía el destino no finalista de los fondos que el Estado transfería a las comunidades, lo que daba a estas la capacidad de decidir en qué gastar o invertir el dinero que les llegaba.

Por aquellos años, comenzaron las principales campañas privatizadoras en dos comunidades dirigidas por el Partido Popular: Madrid y Valencia. La presidenta madrileña Esperanza Aguirre delegó en empresas privadas la construcción de siete hospitales. A cambio, estos se quedarían con la gestión no médica de los centros y con un canon de dinero público durante tres décadas. En la práctica, la medida hipotecó el futuro de los madrileños. El descontrol del gasto llegó hasta la Cámara de Cuentas y muchas de aquellas compañías acabaron salpicadas por las tramas Gürtel o Púnica. El plan no quedaba ahí. El 31 de octubre de 2012, el Gobierno de la Comunidad, ya con Ignacio González al frente, anunció la privatización de seis plantillas hospitalarias, 27 centros de salud y casi cualquier actividad no sanitaria de los hospitales. “Lo más responsable, por no decir lo único responsable, es ir a ese modelo”, afirmó el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

Lasquetty, ese viejo conocido

“Nos encerramos en los centros de salud y la población nos apoyó muchísimo. Los vecinos nos conocían y decían: ‘Si lo dice mi doctora...’”, recuerda Cristina. Los profesionales protagonizaron una reacción sin precedentes que, con el soporte ciudadano, logró doblarle el brazo a Fernández Lasquetty, que tuvo que dimitir. Isabel Díaz Ayuso lo rescató en sus primeros dos gobiernos como titular de Hacienda, desde donde frustró un acuerdo alcanzado entre el departamento de Sanidad y los sindicatos para desconvocar una huelga en diciembre de 2020. Dos años después, cuando volvieron las grandes manifestaciones en defensa de la sanidad pública a la capital, el Gobierno regional destinó casi 700 millones de euros más de lo previsto en concertos hospitalarios y duplicó el gasto en contratos con la privada, según datos de Comisiones Obreras.

En la Generalitat Valenciana, el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox ha rescatado viejas políticas. El president Carlos Mazón ha nombrado conseller de Sanidad a Marciano Gómez, considerado el artífice del modelo Alzira, en la época de Eduardo Zaplana. Este fue el primer caso en España de un

Con un solo artículo, la ley 15/1997, el Gobierno de Aznar permitió la entrada de las empresas privadas en la sanidad pública. Solo votaron en contra Izquierda Unida y el BNG

En Andalucía, los sindicatos llevan meses denunciando una "privatización silenciosa". Desde la Junta, el PP dio en marzo contratos a dedo a clínicas privadas utilizando los resortes de emergencia de la pandemia

El sobrecoste de un hospital de titularidad pública construido y gestionado por una empresa privada es entre siete y ocho veces superior

hospital público gestionado por una empresa privada. El modelo se extendió, ya a finales de los noventa por todo el departamento de salud de La Ribera y por las áreas de Dénia, Elche, Torrevieja y Manises. Sobre el supuesto ahorro que supone la gestión privada, la propia Consellería ha reconocido que las empresas concesionarias tienen pendiente de abonar desde hace años liquidaciones con la administración por más de 640 millones de euros.

Aunque el Govern nacido del Pacto del Botànic había revertido la gestión privada en Alzira y Torrevieja tras las concesiones de 15 años otorgadas por el PP, la extrema derecha ha reclamado, vía moción en varios municipios, que esta vuelva a manos privadas. Y, aunque todavía no hay una decisión firme sobre qué hacer con el resto, las palabras de Mazón durante la puesta de largo del Ejecutivo, dan algunas pistas. "Es el impulsor en la gestión sanitaria para la implantación de la colaboración público privada de la eficiencia en la salud pública y de la normativa que regula las guardias médicas, tanto en el ámbito de la atención primaria como de la hospitalaria vigentes en la actualidad", presentó a su conseller.

En un verano de discursos de investidura y pactos que el PP llama "de perdedores" cuando los conforman otros grupos políticos, pero que abrazan cuando les permiten tocar poder, lo de la colaboración público-privada se ha deslizado en va-

rias ocasiones. El nuevo presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, se comprometió a "mejorar la cobertura sanitaria impulsando decididamente la colaboración público-privada". En Extremadura, María Guardiola ha confiado la sanidad pública a responsables de seguros médicos, mientras los asegurados no paran de crecer en España. En la última década, estos han pasado de ser el 18,5% de la población, al 24,4%. Más de once millones y medio de personas tienen un seguro en todo el país, con Madrid, Catalunya y Baleares a la cabeza, según datos del sector. "Somos el mejor termómetro del funcionamiento de la sanidad pública", afirmaba el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, durante la presentación del informe 'Sanidad Privada, aportando valor 2023'. En él, se recogía que el aseguramiento privado ha aumentado a un ritmo del 4% anual desde 2017. Un crecimiento que se produce a la par que el aumento de las agendas de los y las profesionales de la pública y el aumento de las listas de espera.

En Andalucía, los sindicatos llevan meses denunciando una "privatización silenciosa", ejecutada por el Gobierno de Moreno Bonilla. Desde la Junta, el PP andaluz dio en marzo contratos a dedo a clínicas privadas de más de 226, utilizando los resortes de emergencia de la pandemia y, tras semanas de huelgas y a las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo, el Ejecutivo autonómico retiró la atención primaria de una orden que permitía concertar con la sanidad privada. Moreno había abierto la veda con este primer escalón asistencial y en Castilla y León, donde los 'populares' gobiernan con Vox, no tardaron en coger el guante. "Tenemos muy buena sanidad pública y no contemplamos el incremento de conciertos, pero no excluimos esa posibilidad", advertía el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, en marzo.

Si la teoría neoliberal asegura que la gestión privada de lo público es mejor y más barata, la realidad no sostiene tal afirmación. Un informe de Comisiones Obreras y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, difundido el pasado verano, mostraba que 15 años después del inicio del proceso de privatización de hospitales madrileños, no existía "ninguna evidencia de mejora". "Existen numerosos casos detectados de aportaciones extrapresupuestarias y/o irregulares de financiación pública hacia estos centros", indica el trabajo, que exige una auditoría por parte de la inspección sanitaria, en línea con lo señalado por la Cámara de Cuentas, sobre el descontrol y la falta de eficacia.

Pero, ¿de cuánto es ese sobrecoste? El informe lo deja claro: en el caso de un hospital de titularidad pública construido y gestionado por una empresa privada, es entre siete y ocho veces superior a uno de construcción y gestión pública. En el caso de un centro construido con dinero público y de gestión privada, se multiplica por once.

EDUCACIÓN



**El adoctrinamiento
como excusa para sabotear
a la escuela pública**

Aunque el llamado pin parental copa los titulares, las políticas reaccionarias buscan desarbolar el derecho a una educación integral y a la escuela pública, inclusiva, diversa, intercultural, interterritorial y participativa que se forjó en democracia



Daniel Sánchez Caballero

Periodista en elDiario.es

La primera vez que se puso negro sobre blanco fue en el programa electoral de Vox para los comicios andaluces de 2019. Era el primer punto sobre Educación: “Implantar el sistema de cheque escolar, el PIN Parental y la Autorización Expresa con objeto de que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y se precise su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales”.

En 46 palabras, el partido ultra adelantaba la batalla que venía en las aulas: control de los contenidos y lo que se enseña en clase. Había llegado a España el veto parental.

Tras varios años de batalla política para evitar su implantación, en mayo de 2023 el instituto Arquitecto Ventura Rodríguez, en Boadilla del Monte (uno de los municipios más ricos de Es-

paña), envió una carta a sus familias con motivo de una charla sobre diversidad y contra la LGTBIfobia. “Les recordamos que estos contenidos son curriculares y que, en la actual legislación, aparece la obligación de trabajarlos en el ámbito educativo. No obstante, en caso de que no quieran que sus hijos participen en esta actividad, podéis [sic] comunicárselo al tutor”, leyeron los padres. El instituto explicó después que realmente nadie lo había pedido. Tampoco aparecía en ninguna instrucción de la Comunidad de Madrid. Simplemente, el servicio de orientación del centro, responsable de la charla, decidió que correspondía pedir permiso. Años de discurso contra el “adoctrinamiento” y la “ideología en las aulas” calaron sin necesidad de legislar.

El veto parental, explican expertos en Educación, es la cara más visible de la batalla emprendida por la derecha más conservadora en las escuelas. Es un instrumento con mucha capacidad de hacer ruido y que atenta contra un derecho de las personas reconocido por la ONU, pero solo es un síntoma. La batalla va mucho más allá del veto a estas actividades complementarias.

Va contra el modelo, como explica Raimundo de los Reyes, quien fuera durante años representante de la principal asociación de directores de institutos públicos y hoy jubilado: “Se ha hecho bandera de estos temas puntuales, pasó lo mismo con la asignatura de Educación para la Ciudadanía”, recuerda. “Cogen estos temas que les pueden dar presencia, pero en el fondo se trata de otra cosa. Se trata de un modelo distinto de educación: si se da prioridad a lo público o no. Acaban consiguiendo modular la opinión pública para que la gente piense que sus hijos están mejor en la privada”. Va, en definitiva, contra la educación pública democrática, inclusiva, integradora, intercultural, interterritorial, diversa y participativa que, con sus luces y sus sombras, nos hemos dado en democracia.

La doble vía

El movimiento es doble. Por un lado se ataca el modelo integrador, desarrollado a lo largo de los años; por otro se baja al aula para entrar en los contenidos y evitar que la escuela trate ciertos temas bajo el argumento de que se está “adoctrinando”.

Además de ampliar la cobertura y los años obligatorios en el sistema, el gran cambio educativo en democracia fue abandonar la escuela “segregadora, memorística, con una nulidad pedagógica manifiesta, poco científica y cuya prioridad era la formación religiosa y la formación del ‘espíritu nacional’” por una en la que se trasciende la mera instrucción académica para formar ciudadanos, explica Aurora Ruiz, profesora jubilada, exdirectora general de Educación de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 y coordinadora del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Todo esto está ahora en cuestión. “El modelo de escuela pública como utopía hacia la que caminar es algo que se está destruyendo sistemáticamente”, sostiene Julio Rogero, histórico profesor y activista del Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela Abierta. “Por la privatización, la competitividad, la segregación creciente de los más débiles... Está en peligro la aceptación de la educación

como un derecho de todos, porque las propuestas de exclusión y segregación son cada vez más potentes". Este pensamiento está asentado entre los profesionales de la Educación, especialmente entre aquellos que tienen más perspectiva histórica y pelearon a partir de los años 80 por un modelo humanista integral y acogedor, cuando ven cómo la financiación de la escuela pública está en cifras de hace diez años mientras la que se destina a la privada concertada crece año tras año pese a no ganar alumnos.

"Existe un riesgo de que el concepto 'alumno como ciudadano', con derecho a que el Estado contribuya a su pleno desarrollo, se sustituya por el de 'cliente' de un centro privado, sea concertado o no", advierte Aurora Ruiz. El mercado, ese ente que ha puesto los ojos en la Educación como el último gran sector por explotar. Un mercado que ya decide qué se estudia y, sobre todo, qué no: la principal organización educativa internacional es la OCDE, un ente de carácter económico que ha colocado el examen de PISA como el referente. ¿Y qué mide PISA? Lengua, matemáticas y ciencias. Adiós, humanidades.

Directos a la segregación

"La educación tiene que satisfacer las necesidades del mercado –repite el catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña Jurjo Torres–. Pero, ¿de qué mercado? Todo tiene que ver con una sociedad cada vez más segregada. Tenemos tres redes educativas: la pública, la privada (concertada o no) y las redes de escuelas alternativas que se monta esta burguesía un poco ilustrada que dice querer educar a los niños en la libertad. ¿Dónde queda vivir juntos si vamos a instituciones diferentes?", lamenta.

Y en buena parte, instado o al menos permitido por ciertas capas sociales. "Hay toda una política explícita y explicitada durante mucho tiempo que se conoce como el 'efecto clase media'. Primero se desprestigia lo público de manera sistemática. En la pública están todos: los malos, los pobres, los marginados, y condicionan a mi hijo". Completada la pérdida de prestigio, "entonces llevo a mi hijo a sitios que le aseguren un mayor éxito, donde se mezcle con los suyos", explica Jesús Rogero. "Clientes", repiten varios de los profesionales. Los datos corroboran esta afirmación: los colegios concertados tienen un 92% de alumnado de nivel socioeconómico medio o acomodado, según el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. En los públicos ese mismo 92% corresponde a estudiantes de familias medias o humildes.

La pinza se completa cuando se baja a lo concreto, se entra al aula a cuestionar la práctica docente. "Si nos atenemos a la Constitución", reflexiona Ruiz, "el fin de la educación es 'el pleno desarrollo de la personalidad humana', que debe enmarcarse en

el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y no es un tema baladí: obliga a plantearse en el terreno de la educación qué clase de persona se pretende formar para qué clase de sociedad y qué modelo de escuela es la más apropiada", continúa.

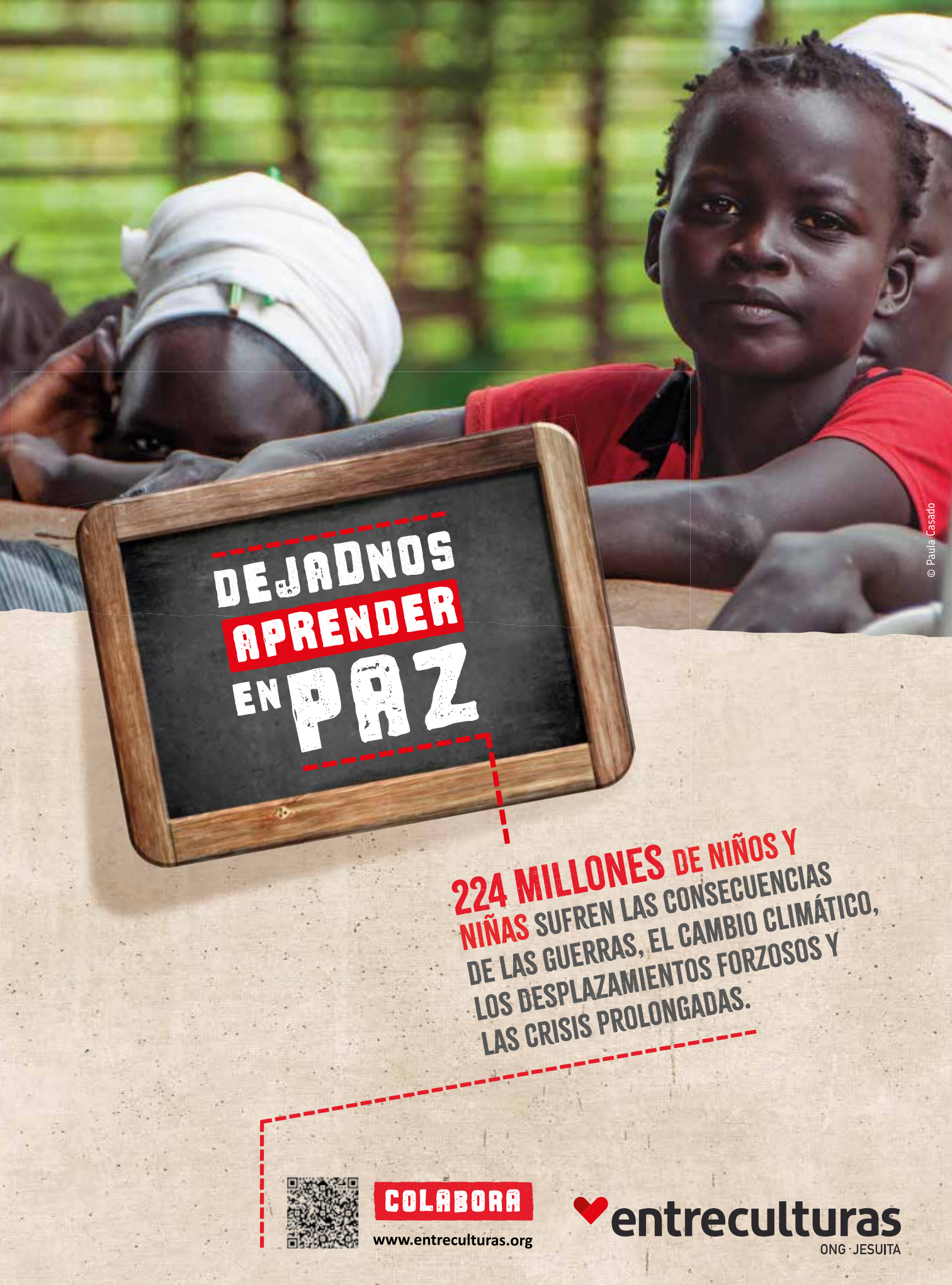
"Educar no es solo instruir", responde Francisco García, secretario general de Educación de CCOO. "Es hablar de igualdad de oportunidades, de igualdad entre hombres y mujeres, de la lucha contra la violencia de género, de temas de medioambiente y cambio climático, de respeto a la interculturalidad", concluye. Pero las políticas de Vox y el PP, tercia Carmina Ferrero, maestra jubilada que dirigió la Junta de Portavoces de Educación Infantil 0-6, "van claramente dirigidas a la adquisición de conocimientos, pero nada de valores. Nada de formar a la ciudadanía responsable, nada de democracia en la escuela".

Es en este contexto donde entrar elementos como la educación afectivo-sexual que Vox y el PP quieren suprimir, cuando el objetivo de estas formaciones, que costó introducir en las aulas un par de décadas de democracia, es educar en igualdad y en el respeto al diferente.

En opinión del catedrático Torres. "Si democracia y educación están interconectadas hay que prestar atención a las prácticas del aula –reflexiona, porque si estás en una democracia necesitas una ciudadanía educada, capaz de colaborar, informarse, rebatir, ser crítica... ¿Hasta qué punto se trabaja esto en las aulas?", se pregunta. Y es en este punto donde se concretan los discursos reaccionarios, asegura. "Los contenidos, lo que se enseña en las aulas, está muy vigilado. La derecha y extrema derecha se preocupan mucho por lo que se hace en clase. Ellos son conscientes –todo el mundo lo es, pero ellos lo tienen más en el foco de que la escuela es un sitio donde se distribuyen conocimientos, se aprende a valorarlos, a legitimarlos y se jerarquizan. Pero la discusión sobre esos conocimientos no existe".

O se pelea por evitarlos, como sucede con el veto parental, aunque suponga llevarse por delante un derecho del alumnado. Desde las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo, Vox ha conseguido introducir el veto parental en sus acuerdos con el PP para gobernar en comunidades como la Valenciana, en Murcia, Aragón o Extremadura. Entre los dos partidos han instalado palabras como "adoctrinar" como parte del debate educativo para referirse a la educación afectivo-sexual o en igualdad (objetivos principales del veto).

El resultado de años de este doble discurso público muy agresivo en torno a cuestiones que tocan las creencias más básicas de las familias ("están adoctrinando a tu hijo") cristaliza en casos como el del IES Arquitecto Ventura Rodríguez de Boadilla del Monte. El centro decide preguntarle a las familias y la mitad de los padres y madres de la clase deciden que sus hijos o hijas se salten la charla sobre igualdad. Gol de Vox.



© Paula Casado

DEJADNOS
APRENDER
EN PAZ

224 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS SUFREN LAS CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS, EL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS Y LAS CRISIS PROLONGADAS.



COLABORA

www.entreculturas.org

 **entreculturas**
ONG · JESUITA

Dossier
DERECHOS
EN PELIGRO



MEMORIA

Cuarenta y cinco años buscando memoria democrática

La impunidad del franquismo permanece. No se ha modificado ni derogado la Ley de Amnistía del 77 y la aplicación de la nueva ley de Memoria, que supone avances, está amenazada en las comunidades donde gobiernan las derechas



Olga Rodríguez

Periodista

@olgarodriguezfr

En la década de los setenta el temor a la perpetuación de la dictadura franquista, las amenazas de la extrema derecha española y las experiencias golpistas latinoamericanas, iniciadas con el derrocamiento del Gobierno democrático de Salvador Allende en Chile en 1973, marcaron la senda de España en su búsqueda de modelo de transición. La posibilidad de conquistar verdad, justicia y reparación para las víctimas de los crímenes del franquismo –cientos de miles de personas asesinadas, desaparecidas, ejecutadas, torturadas, represaliadas o exiliadas– fue apartada en aras de lo que se llamó la política de reconciliación nacional.

Como relata la catedrática Paloma Aguilar en su libro “Políticas de memoria y memorias de la política” (Alianza, 2008), la correlación de fuerzas en la transición estaba marcada por el temor a la reacción de la derecha, con partidos de la izquierda que habían sufrido años de clandestinidad. En ese escenario de tensión e incertidumbre, con una fuerte represión policial contra huelguistas y manifestantes, la izquierda defendió una ley de amnistía para los presos políticos y así lo expuso en sus propuestas ante el Congreso en julio y septiembre de 1977.

Fue UCD el partido que introdujo en el borrador de dicha ley dos cláusulas que aseguraban amnistía para los crímenes de la dictadura. No dio tiempo al debate –ni social ni mediático– sobre esos dos puntos mencionados porque no fueron incorporados hasta el 2 de octubre y porque en ese escenario de debilidad, con el control por las élites franquistas del Ejército, la Policía y buena parte de la justicia, no hubo voces políticas con representación parlamentaria dispuestas a solicitar –ni a imaginar– el fin de esa impunidad. La ley fue promulgada el día 15 de ese mismo mes, con el apoyo de PSOE, PCE, Minorías Vasca y Catalana y Grupo Mixto, que la defendieron públicamente en el hemiciclo.

Ya en 1965, el entonces Secretario General del PCE en el exilio, Santiago Carrillo, había anticipado en su libro “Después de Franco, ¿qué?” (U. de Granada, 2008) que apoyaría una ley de amnistía para “los dos campos”, argumentando que “hay que acabar con la discriminación entre ‘vencedores’ y ‘vencidos’ (...)”.

En 1977, en su defensa de la Ley de Amnistía en el Congreso, Marcelino Camacho se refirió a la política de reconciliación como pieza capital, escogida por el Partido Comunista Español ya desde 1956: “[Ya entonces planteamos] ¿cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”.

El franquismo fue el régimen fascista más duradero del siglo XX en Europa y los efectos de ello dejaron amplia huella en una sociedad que salía de la dictadura anestesiada. Así lo expresaba en una conferencia hace dos años el abogado impulsor del caso Pinochet, Joan Garcés: “La opinión pública española salió de la dictadura traumatizada y eso explica que solo a partir del año 2000 se empiecen a plantear en España peticiones de justicia ante los tribunales”.

Con la Ley de Amnistía y la apuesta por la desmemoria, quedó pendiente la deuda con las víctimas del franquismo y con la necesidad de asentar una cultura democrática y de derechos

humanos. El tiempo transcurrió, España se integró en la Unión Europea, el país fue evolucionando, hubo legislaturas con capacidad y fuerza para haber empujado más, pero no se hizo. Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas Fabián Salvioli, “ahora la forma de resolver es diferente y no se pueden mirar las cosas como se miraban hace 45 años, porque eso sí es quedarse en el pasado”. Cuando terminó la dictadura no se abordó con la envergadura necesaria un proceso de educación en cultura democrática que era preciso para contrarrestar el adoctrinamiento franquista inoculado durante cuatro décadas. De ese modo, se perpetuó el desprecio a las víctimas del franquismo, el miedo a mencionar a los verdugos, el olvido y el silencio.

A falta de iniciativas desde las instituciones, algunos sectores de la población impulsaron durante la transición exhumaciones sin métodos científicos. Se abrieron fosas de forma rudimentaria en varias zonas del país, sin más herramientas que palas y las propias manos de familiares de las víctimas. En Navarra y La Rioja algunos sacerdotes acompañaron a varias familias y pidieron perdón por el papel de la Iglesia. Fue un proceso en silencio, sin apenas atención mediática.

El intento del golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 frenó las exhumaciones y sirvió para llamar nuevamente a un cierre de filas en torno a la desmemoria. Los crímenes y la represión franquista no formaron parte del debate público. Tampoco la lucha antifranquista ni el republicanismo.

Como explicó la escritora Almudena Grandes, “España es la única democracia de Europa que no se funda sobre su propia tradición democrática y que no reivindica su propia tradición antifascista. No empieza su andadura con una ruptura con la dictadura. En un acto de soberbia autocomplaciente e insólita, se funda a sí misma en el aire”.

Hubo que esperar al año 2000 para que se produjera la primera exhumación con métodos científicos. El impulsor fue Emilio Silva, nieto de un asesinado y desaparecido en el Bierzo. El hallazgo de restos de varios cuerpos en aquella fosa, entre ellos los de su abuelo, disparó las solicitudes de otras familias de desaparecidos. “A medida que en esos años íbamos recogiendo historias y hallando fosas fuimos tomando conciencia de la dimensión de los crímenes del franquismo y de la importancia de enmarcarlos en la defensa de los derechos humanos”, relata Silva.

Con el trabajo de personas voluntarias se abrieron decenas de fosas, hasta la aprobación en 2007 de la primera Ley de Memoria en democracia, que supuso avances pero insuficientes. La Ley estableció un mecanismo de subvenciones para impulsar las exhumaciones, que en la práctica supuso la externalización de las mismas sin la asunción de responsabilidad o tarea por parte de las instituciones, algo criticado por relatores de Naciones Unidas.

Otro intento de recuperación de memoria democrática fue el del juez Baltasar Garzón de investigar en la Audiencia Nacional los crímenes del franquismo. En 2008, Garzón elaboró un auto judicial –primero y único en España– en el que cifró en 114.266 los desaparecidos entre 1936 y 1951. Pero la Fiscalía General del Estado argumentó que la Audiencia Nacional no era competente para tramitar este tipo de delitos –del mismo modo se pronunciaría la Sala de lo Penal de dicho órgano– y finalmente el magistrado tuvo que inhibirse en favor de los jueces territoriales.

“No escuchar es otra forma de muerte”

Desde entonces asociaciones y familiares han seguido presentando denuncias, sin éxito, en juzgados españoles. Ante la falta de colaboración de la justicia española, el 14 de abril de 2010 se impulsó una querrela ante los tribunales argentinos que sigue abierta, con cientos de casos, toma de declaraciones a testigos y familiares y una escucha jurídica negada en España.

Dice la abogada Ana Messuti, una de las impulsoras de dicha querrela, que “el no escuchar es otra forma de muerte”. “Ascensión Mendieta [hija de un desaparecido] no era experta en derecho. Pero en su certeza de querer ser escuchada hay un sentimiento del derecho, una conciencia jurídica. Los querellantes nos han enseñado eso”.

Durante los últimos 15 años, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha exigido de forma reiterada a España que implemente políticas públicas de memoria y garantice el derecho a la tutela judicial efectiva a las víctimas y a sus familiares. También el Consejo Europeo ha reprendido a nuestro país por su actitud laxa. “Pero la respuesta del Estado español, a día de hoy, es claramente insuficiente”, señala a elDiario.es Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querrela Argentina (CEAQUA).

En 2019 el Gobierno ordenó la exhumación de Franco, a la que asistieron una ministra y otras autoridades, así como familiares del dictador. El acto fue retransmitido en directo durante más de dos horas por la televisión pública. Ninguna de las víctimas del franquismo desaparecidas en las cunetas de este país ha recibido una ceremonia de exhumación con tales honores y atención mediática. Los restos de Franco fueron trasladados al cementerio de Mingorrubio, “donde permanecen en un panteón de propiedad pública sufragado con nuestros impuestos”, lamenta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Con la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática se han conseguido mejoras. Se establece el conocimiento de la historia y la lucha de los valores y libertades democráticas, así como la exposición de la represión franquista en los libros de texto. Además, el nuevo currículo de Historia empleará el término golpe de Estado para referirse al golpe de Estado de 1936.

En Extremadura y en Aragón, PP y Vox se proponen derogar la Ley de Memoria y sustituirla por lo que llaman una norma que “sirva a la reconciliación y la concordia real”

Jacinto Lara: “Se necesita la aprobación de una ley específica que aborde el robo de bebés y la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales. Además de la implicación de la Fiscalía para que impulse acciones penales”

La ley anula las sentencias de los tribunales franquistas, sanciona los elementos y actos públicos contrarios a la memoria democrática, contempla el establecimiento de lugares de memoria y la revisión o supresión de reconocimientos y honores incompatibles con los valores democráticos. También propone la creación de un banco de ADN a nivel estatal e involucra a comunidades autónomas y ayuntamientos para las exhumaciones, a los que asigna la tarea de solicitar las subvenciones para concederlas a través de concursos públicos. El riesgo de este modelo es que no todos los gobiernos municipales tienen voluntad de fomentar exhumaciones en su territorio y que no todas las empresas adjudicatarias gozan de formación en derechos humanos o de experiencia directa en memoria histórica.

La nueva ley no garantiza justicia para las víctimas, ni establece –como solicita Naciones Unidas– la creación de una comisión de la verdad que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. Tampoco contempla una reparación total para las víctimas, ya que “deja abierta la posibilidad de que no haya espacio para las indemnizaciones económicas”, según ha indicado el relator de la ONU Fabián Salvioli.

“Se necesita también la aprobación de una ley específica que aborde toda la problemática del robo de bebés y la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales. Y, entre otras cuestiones, es necesario la implicación de la Fiscalía en su conjunto para impulsar y apoyar el ejercicio de acciones penales”, señala el abogado Jacinto Lara.

La impunidad del franquismo permanece. No se ha modificado ni derogado la Ley de Amnistía de 1977, “ni se ha aprobado una modificación del Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva internacional y la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura franquista y la transición”, como solicitan abogados especializados en derechos humanos. Esa demanda

también ha sido planteada por Amnistía Internacional, que pide para estos crímenes “la obligación de investigar con independencia de la muerte de los presuntos responsables”.

Las víctimas del franquismo y sus familias han tenido que convivir con sus agresores y con los asesinos de sus seres queridos sin que estos hayan sido señalados. De hecho, a menudo han sido ellas las estigmatizadas por reivindicar verdad y reparación. En toda una carambola de contradicción conceptual, se sigue apostando por la impunidad del franquismo como si nuestra democracia dependiera de ella para sostenerse.

Sucedáneos de justicia

Ante tal anomalía el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, considera que “si en España gobernase la derecha, las víctimas de la dictadura no perderían su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque ninguna de las legislaciones de la memoria se lo han garantizado. Lo que ha ocurrido en los últimos años es resultado de la falta de voluntad de los poderes del Estado para terminar con la impunidad, y por eso las políticas de memoria han sido siempre sucedáneos de la justicia”.

En palabras del jurista Matías Bailone, impulsor de la querrela argentina, “en España no han sido reconocidas las víctimas del franquismo, han sido negadas política y sistemáticamente”.

“Son varias generaciones las que han pasado, pero no hay que desesperar. Nada es inmutable. En Alemania son los nietos de la generación que sostuvo el régimen nazi los que pidieron explicaciones y justicia; aquí también son los nietos. Las circunstancias han requerido el paso del tiempo para poder expresar y pedir justicia”, señalaba recientemente el abogado Joan Garcés.

A la lentitud de los avances en estas décadas se une la amenaza de las derechas dispuestas a deshacer parte de lo conseguido. Prueba de ello son los pactos entre PP y Vox en comunidades autónomas como Aragón, donde han anunciado que derogarán la Ley de Memoria regional, o la retirada por parte del Ayuntamiento de Madrid de las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo en el cementerio de la Alameda. También en Extremadura, PP y Vox se proponen derogar la Ley de Memoria y sustituirla por una norma que “sirva a la reconciliación y a la concordia real”.

Fue precisamente en nombre de la reconciliación nacional como hace cuarenta y seis años se asentó la impunidad del franquismo. Ahora algunos derechos vuelven a ser cuestionados y corren el riesgo de ser suprimidos. Pero la defensa de los avances conseguidos hasta hoy no debe hacernos olvidar todo lo que queda aún para consolidar una cultura de derechos humanos con memoria democrática.



IDIOMAS HISTÓRICOS

La España de las lenguas menguantes

Mientras las lenguas cooficiales entran en el Congreso, se da la paradoja de que los gobiernos autonómicos de las derechas revierten políticas de normalización lingüística



Pau Rodríguez

Periodista de elDiario.es

@paurodra

El uso de lenguas cooficiales como el catalán y sobre todo el gallego, revitalizados tras el franquismo, está en serio declive. Los gobiernos regionales de PP y Vox amenazan con debilitarlas todavía más al mismo tiempo que se logra un avance: que se puedan hablar en el Congreso

Durante su infancia, la poeta y editora Antía Otero solía hablar en gallego con sus amigos y vecinos en su pueblo, A Estrada, en la provincia de Pontevedra. Era la lengua de uso en la calle, en la escuela y hasta en los dibujos animados que veía por las mañanas. Son Goku y Doraemon hablaban gallego en los 80 y 90. Pero aquella programación infantil ya no existe en Galicia. “Y en el patio del colegio, la mayoría habla castellano”, añade. Lo comprueba con sus hijos y con los talleres que imparte en institutos de Secundaria. “Me encuentro traduciendo constantemente palabras básicas”, constata.

Desde un comercio gallego a las calles de Palma, y desde un colegio de València al móvil de un adolescente catalán, las lenguas minorizadas están en retroceso en España. No su conocimiento, fortalecido en las últimas décadas, ni su presencia en las instituciones públicas; pero sí su uso. Salvo en Euskadi, donde el euskera, que partía de una situación más desfavorable, sigue ganando hablantes poco a poco, en el resto de territorios con lengua cooficial hace años que empezaron a saltar algunas alarmas.

Se podría resumir con una frase hecha catalana que, curiosamente, no tiene traducción: “A cada bugada es perd un llençol”. En cada colada se pierde una sábana y en cada encuesta, cae el número de quienes priorizan estas lenguas en sus quehaceres cotidianos. El temor ahora es que ese declive se acelere en regiones como el País Valencià o Balears, donde los gobiernos de PP y Vox quieren laminar la protección del catalán (o valenciano, según la denominación de cada territorio).

Una realidad que, paradójicamente, coincide con uno de los avances institucionales más notables de la historia reciente para estas lenguas: la posibilidad de utilizarlas en el Congreso de los Diputados, a raíz de un acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas de ERC y Junts.

La diferencia entre tener estatuto y no tenerlo

Casi medio siglo después del fin de la dictadura franquista, una etapa en la que las lenguas minorizadas estuvieron recluidas a la fuerza en el ámbito privado, echar la vista atrás supone, en primer lugar, reconocer el punto de partida de las lenguas que no eran el castellano. “La situación era muy delicada para todas ellas, aunque a la vez tenían una base social relevante, especialmente el gallego y el catalán”, sostiene Fernando Ramallo, profesor de Lingüística de la Universidade de Vigo.

La democracia dio paso en España a las primeras leyes y Estatutos que reconocían las lenguas llamadas cooficiales, y que sentaron las bases de la política lingüística en sus territorios. De forma muy resumida, aquellas normas supusieron la introducción de estas lenguas en la escuela, en los medios de comunicación y en la Administración pública.

Pero el impulso, matiza de entrada Ramallo, solamente fue para las lenguas con reconocimiento en Estatutos, caso del catalán/valenciano en Catalunya, Balears y Comunitat Valenciana; el euskera en Euskadi y Navarra, y el gallego en Galicia. No lograron la misma cobertura otras lenguas existentes, y a menudo olvidadas en la foto de la España plurilingüe, como el asturleonés o el aragonés.

Cuatro décadas después, el conocimiento de algunas lenguas cooficiales ha subido, gracias en buena medida a la escuela. Pero su uso habitual dejó de hacerlo y va a la baja. Por ejemplo, según las últimas encuestas, ha aumentado el número de personas que saben leer y escribir en valenciano en las últimas tres décadas. Pero a la vez, si se compara entre estudios de 1992 y 2021, quienes hablan habitualmente valenciano en su entorno de amis-

tades ha caído del 39% al 23%. El gallego lo entiende más del 95% de la población, pero es la primera lengua solo para el 19% de los jóvenes, un porcentaje inferior al de hace diez años (25%) y desde luego a años luz del de los mayores de 65 años, que está en el 66%.

“Si tú comparas los usos del gallego hace 40 años con los de hoy, la pérdida es evidente, no hay ninguna discusión”, constata Ramallo. En su caso, señala como uno de los puntos de inflexión el decreto de plurilingüismo aprobado en 2010 por el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que redujo la presencia del gallego en la enseñanza.

La única lengua que avanza paso a paso es el euskera. Al menos, entre los menores de 35 años: ha pasado en 30 años de ser primera lengua del 17% de jóvenes a rozar el 25%. “Gracias al sistema educativo, a una apuesta muy importante por la transmisión dentro de las familias y a unas políticas progresivas, hoy la sociedad vasca entiende que el plurilingüismo suma”, reflexiona Miren Dobaran, viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno vasco.

Los factores que explican el retroceso de la mayoría de lenguas minorizadas, según los lingüistas consultados, dependen de cada territorio. Pero identifican la falta de ambición de algunas administraciones a la hora de favorecerlas, las sentencias “restrictivas” del Tribunal Constitucional o, para el caso del catalán, el cambio demográfico que han supuesto las distintas olas migratorias, tanto españolas como extranjeras, de las últimas décadas, que han llegado con el castellano como lengua de uso habitual.

¿El ‘techo’ de la promoción de las lenguas?

En el primer caso, lo constata incluso el Consejo de Europa, que periódicamente advierte a España de que incumple la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, suscrita en 2001. Entre otras razones, porque no garantiza la escolarización en gallego y valenciano, por ejemplo, y porque orilla las lenguas cooficiales en la justicia.

Victòria Crespí, jueza de la Audiencia Provincial de Palma, lo sabe bien, puesto que es una de las dos únicas magistradas que usan el catalán en sus autos y sentencias. “Cuando empecé [en 2014] era algo tan novedoso que me convertí en una especie de buzón al que escribían todos los que tenían problemas lingüísticos”, apunta. Y al mismo tiempo reivindica que en muy contadas ocasiones le piden traducción al castellano. “Al final en Mallorca la mayoría entiende el catalán, solo tengo que cambiar puntualmente para abogados que son de fuera”.

Favorecer el gallego, euskera o catalán, señalan tanto Ramallo como Flors Mas, fue un compromiso político que hace

40 años llegó a aglutinar a fuerzas como el PP. Pero la derecha fue apartándose de ese consenso durante la década de los 90, a medida que los gobiernos autonómicos sacaban adelante medidas de protección que, según su visión, chocaban con la posibilidad de hacer vida al 100% en castellano. Nada lo ilustra mejor, según el lingüista Flors Mas, que dos portadas del diario ABC con Jordi Pujol. En 1984 fue elegido Español del Año por el rotativo monárquico; pero una década después, en 1994, el titular para el president fue otro: Igual que Franco pero al revés: persecución del castellano en Catalunya.

Entre medias, lo que ocurrió fue que Jordi Pujol consolidó el modelo de inmersión lingüística en las escuelas, de uso del catalán –y no el castellano– como idioma por defecto de la docencia. Un modelo que ha garantizado el conocimiento por igual de ambos idiomas en Catalunya, pero que la Justicia considera que vulnera la Constitución, al entender que no se puede excluir el castellano de un ámbito como la educación.

Para el lingüista Ramallo, modelos como la inmersión son necesarios si se quiere preservar la vitalidad de una lengua que está en inferioridad de condiciones respecto a la mayoritaria. Y lo defiende con una afirmación que puede parecer paradójica: “Si queremos un bilingüismo real, lo que hace falta es favorecer el monolingüismo de las lenguas minoritarias en algunos ámbitos como el educativo. De hecho, para sobrevivir, estas lenguas tienen que ser necesarias, no solo opcionales”.

Esta es una idea que siempre ha causado una fuerte controversia en España, llegando a inferir algunos políticos de derechas que el castellano está amenazado en algunas regiones. “El castellano está en todas partes y es ridículo decir que está en peligro de no ser conocido”, responde Dobaran desde Euskadi.

Aun así, en Balears y Comunitat Valenciana, los respectivos gobiernos de derechas, de PP con Vox, se preparan para desmantelar políticas lingüísticas consolidadas o impulsadas recientemente. Entre ellas, el requisito de conocimiento del valenciano o catalán para acceder a la función pública y el desmontaje de la inmersión en Balears, algo que ya intentó el PP en 2013 y que sublevó a la comunidad educativa.

En apenas dos meses de legislatura, el Gobierno balear ya ha aprobado eliminar el catalán como requisito para los profesionales de la sanidad pública. En la Comunitat Valenciana algunas consejerías han empezado a emplear el valenciano sin seguir las normas que dicta la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), hasta el punto que el propio presidente popular Carlos Mazón se ha visto obligado a defender la “autoridad científica” de este organismo.

Sobre el requisito lingüístico, Alexandra Usó, presidenta de la entidad de Escola Valenciana, lo resume con una afirmación. “Si no puedo ir al médico y que este me atienda en valenciano,

El uso entre los jóvenes de la lengua cooficial solo ha crecido en Euskadi; mientras que el catalán y el gallego, aunque consolidados en lo institucional, pierden terreno en la calle

entonces uno de mis derechos se está vulnerando”, advierte.

Profesora de instituto desde hace tres décadas, Usó teme que el nuevo gobierno potencie más el castellano que el catalán dentro del actual modelo plurilingüe escolar. Y lamenta también la anunciada clausura de la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana o el fin de las subvenciones públicas a entidades como la suya. “Tienen muy claro su objetivo, que es cerrar entidades que promueven la cultura y la lengua valenciana”, advierte.

Librar la batalla en internet

Al otro lado de la península, y por casos de censura como este, la poeta Antía Otero describe el actual momento como de “retroceso de derechos lingüísticos”. Desde su editorial Apiario, fundada en 2014, viven la apuesta por el gallego como algo natural –es su lengua materna–, pero a la vez como una batalla. “Cada lector que ganamos para el gallego es una celebración”, reivindica sobre una lengua en la que muy pocos –quizás Manuel Rivas o Leticia Costas– pueden decir a la vez que se dedican a escribir y que se ganan con ello la vida.

Otero vive con pesar la pérdida de transmisión del gallego de generación a generación, también por lo que supone para la literatura. “Al perder hablantes, cuando alguien se plantea un proyecto literario, lo que sucede obviamente es que sabe que cada vez sus lectores potenciales son menos”, lamenta. Lo que provoca esto, añade, es que algunos acaben optando por el castellano pese a ser gallegoparlantes.

“La lengua pasa a un marco ornamental, pintoresco”, concluye. Es el retorno progresivo del idioma de un uso mayoritario y público al privado y del hogar.

También padece una tendencia a la baja, aunque goce de mejor salud, el catalán en Catalunya (con el matiz de que el alcance del catalán es de al menos 10 millones de hablantes, tanto como el sueco y el doble que el finlandés). La Generalitat catalana se ha embarcado en distintos planes de fomento de su uso, entre los que destaca la reclamación al Gobierno de que fije para las plataformas como Netflix un mínimo de contenidos en lenguas cooficiales. Al final, pactó obligarlas a destinar parte de sus beneficios, el 0,5%, a películas y series que sean en estos idiomas.

Terrenos como el audiovisual, internet o las redes sociales, con una amplísima penetración de lenguas globales como el

inglés o el castellano, son hoy uno de los frentes que más obsesionan a quienes defienden el uso de catalán, gallego y euskera. Por la inmensidad del reto, pero al mismo tiempo por las posibilidades que ofrece. De ello pueden dar cuenta los nuevos youtubers, streamers y tiktokers que se promocionan desde La Fera, una iniciativa social que hace las funciones de aceleradora de proyectos de creación de contenido en catalán en las redes.

Bet Molina, periodista de 22 años, es una de ellas. Tiktokker centrada en la literatura catalana, tiene a día de hoy 10.000 seguidores. Otras, como Berta Aroca, superan los 200.000. Molina compagina su actividad en esta red social con un empleo más estable, como conductora de un podcast en Viasona, también en catalán, y se gana la vida con ello. “A veces pensamos que en este mundo si quieres ganar seguidores tienes que usar el castellano, pero lo cierto es que en catalán puedes llegar a un público determinado, existe un ‘target’ real”, afirma.

El catalán tiene un circuito propio en las redes, que ayuda a fidelizar, y que está lejos de ser marginal. El podcast con más suscriptores de España dentro de la plataforma de micromecenazgo Patreon es uno en catalán de humor y fútbol, La Sotana, con más de 2.600 financiadores particulares. Ganar la partida en internet, según Molina y también los lingüistas consultados, es una parte fundamental de la batalla. “A veces los castellanohablantes ven el catalán como algo escolar, encorsetado, que no tiene un formato coloquial para las redes. Y es evidente que no es así”, reivindica esta joven tiktokker.

La comparación con Francia, país “lingüicida”

Comparado con su entorno, el trato hacia las lenguas minorizadas de España se vuelve algo relativo. La comparación con Francia, un Estado que Flors Mas califica de “lingüicida” hacia sus idiomas regionales, da pie a la complacencia. Pero un viaje a Bélgica, Suiza o Finlandia, añade este lingüista, permite comprobar a la vez que el Estado “nunca ha perseguido la igualdad real” entre las lenguas ni “hacer de la diferencia una señal de identidad”.

Ejemplos de ello solían ser, hasta ahora, iniciativas como introducir la enseñanza de lenguas cooficiales como asignaturas optativas... O su uso en el Congreso o en las instituciones europeas. Una conquista para los defensores del plurilingüismo que hasta ahora parecía una quimera, pero que la aritmética parlamentaria para la investidura de Sánchez de pronto ha hecho posible. Pasos como este, señalan los lingüistas consultados, deberían servir para algo que consideran necesario: que no son solo quienes viven en los territorios con lenguas cooficiales los que deben hacerse responsables de su futuro.

Dossier
DERECHOS
EN PELIGRO



**LIBERTAD
SEXUAL**

El aborto: un derecho 'al filo de la navaja'

Dos sentencias del Tribunal Constitucional lo han reforzado jurídicamente, pero en las autonomías donde gobiernan las derechas se ejerce el obstruccionismo y hasta el acoso contra las que quieren interrumpir su embarazo



Lucía M. Quiroga

Periodista

@Luciamquiroga

Casi cuarenta años después de despenalizarse en España, el aborto sigue siendo un derecho en cuestión, cuyo debate se abre periódicamente con distintas intensidades. Esta conquista histórica del feminismo, lejos de consolidarse, se ha visto amenazada constantemente por las trabas burocráticas que han complicado o impedido el acceso al aborto a miles de mujeres, que a día de hoy se ven obligadas a cambiar de centro o de comunidad autónoma para poder interrumpir embarazos no deseados. En los últimos años, una ofensiva ideológica de derecha y de extrema derecha pone en duda este derecho en el debate público y ha puesto en marcha estrategias restrictivas en aquellas comunidades autónomas en las que gobiernan los conservadores.

En 1985, una ley orgánica, la llamada ley de supuestos, despenalizó el aborto en tres casos: si había riesgo grave para la mujer, si el embarazo era fruto de una violación o si había malformaciones en el feto. Hubo que esperar hasta el año 2010, durante el gobierno de Zapatero, con Bibiana Aído en el Ministerio de Igualdad, para que se aprobase la llamada ley de plazos. Esta ley orgánica despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas, sin necesidad de justificarlo en ninguno de los supuestos anteriores.

La ley contó en su momento con fuerte oposición de la derecha: el PP presentó un recurso en el Tribunal Constitucional, que fue desestimado en 2023. También fue rechazada por la Iglesia y por los grupos antiabortistas. En 2012, durante el gobierno de Rajoy, hubo un intento de derogación que terminó con la carrera de su principal impulsor, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Su pretensión era volver a la ley de supuestos y, sobre todo, impedir a las menores de 16 y 17 años abortar sin el consentimiento paterno. Esto último sí lo consiguieron, a través de una modificación parcial de la ley.

La reforma más reciente es de este mismo año: en febrero de 2023 se aprobó una nueva Ley, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, que amplía derechos y elimina trabas: suprime de nuevo el permiso paterno para menores y los días de reflexión –antes de esta reforma, se obligaba a las mujeres a esperar tres días obligatoriamente antes de poder abortar, tras entregarles información con alternativas a la interrupción del embarazo–. Además, obliga a las administraciones sanitarias a realizar un registro de objetores de conciencia y regula también, por primera vez, la salud menstrual.

El Partido Popular, junto a los grupos antiabortistas y a la Iglesia, han rechazado tradicionalmente este derecho, pero sin un consenso interno suficiente como para abordar estrategias más restrictivas. Sin embargo, la irrupción de la extrema derecha en el panorama político español ha supuesto un paso más en la ofensiva contra el derecho al aborto. Y es que Vox pretende prohibir el acceso a este derecho, justificándolo en una defensa de la vida y de la familia tradicional. En su programa electoral para las últimas elecciones generales, el PP insistió en la que ha sido su línea roja en los últimos años: "Introduciremos en la legislación el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a

la realización del aborto en las jóvenes menores de edad”. Esa era su única propuesta sobre el aborto. El programa electoral de Vox, sin embargo, proponía una larga lista de medidas concretas con un único objetivo final: la derogación total. “Eliminaremos el falso ‘derecho al aborto’ y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para la manutención, educación y cuidado de los hijos”, decían en sus propuestas.

Aplicación desigual

Justa Montero, feminista histórica, experta en género y políticas de igualdad, echa la vista atrás para recordar que estas ofensivas conservadoras no son nuevas. “Los intentos para limitar el derecho al aborto tienen una larga historia; es algo que forma parte de su ADN, porque están en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, su cuerpo y su vida. Si echamos una mirada retrospectiva, vemos cómo Alianza Popular en su momento y luego el Partido Popular han recurrido al Constitucional cualquier cambio, por pequeño que fuese, que supusiese regular el derecho al aborto”, recuerda Montero. Para ella, la llegada de Vox agrava esta oposición.

Por su parte, Ruth Rubio, catedrática de Derecho Constitucional, advierte que en este caso hay que distinguir entre las posiciones de los partidos de derecha: “Al PP le interesa mantener un perfil bajo, mientras que Vox sí que ataca directamente los derechos reproductivos de las mujeres. Por eso la pregunta interesante es hasta qué punto estaría dispuesto un PP que tuviera que gobernar con Vox a transar en sus ya débiles convicciones acerca de la autonomía reproductiva de las mujeres. ¿Pagaría el precio político por hacerlo? Yo creo que sí, que una vez que pacten con Vox no tendrían escrúpulos en sacrificar a las mujeres y a las minorías sexuales para gobernar”, afirma la catedrática. Para ella, el derecho al aborto nunca ha llegado a consolidarse porque “se ha movido en una zona gris”: “Es un derecho con minúscula, que no está explicitado en la Constitución y que tiene una base jurídica débil. Esto ha permitido que algunas comunidades autónomas, en función de su signo político, hayan atendido esta prestación de forma desigual porque no está interiorizado como un derecho fundamental”, añade Rubio.

Al tratarse de una legislación de nivel estatal, pero cuya aplicación depende de las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en sanidad, su aplicación ha sido muy desigual. Las restricciones para el acceso al aborto son una realidad en aquellas comunidades en las que la derecha gobierna, con o sin la extrema derecha. Ahí están los ejemplos de Castilla y León, donde Vox propuso a principios de este año hacer escuchar

los “latidos fetales” o realizar ecografías a las mujeres que quieran abortar; o de Murcia, donde el Tribunal Constitucional ha dado la razón a una mujer que pasó un ‘calvario’ para poder interrumpir su embarazo. Además, el aborto sigue sin ser una prestación generalizada en la Sanidad Pública: la mayor parte de las intervenciones se derivan a la sanidad privada. Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, de 2021, revelan que solamente el 15% del total de abortos se realizan en centros públicos.

Jose Antonio Bosch es asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y jurista experto en legislación sobre este tema. Sostiene que la amenaza del derecho al aborto “no es ya una especulación, sino un hecho”. Y lo explica así: “En aquellas comunidades autónomas donde ha ido ascendiendo la derecha y la ultraderecha ya han puesto en práctica políticas restrictivas, como por ejemplo en Castilla y León. Y sucede lo mismo también a nivel internacional, como en Polonia o Estados Unidos”. Bosch afirma tajante: “Los derechos se ganan y se pierden, y con el aborto estamos en pleno retroceso”.

La ofensiva conservadora no es un caso único en España: responde a un movimiento internacional bien orquestado, financiado y anclado en las estrategias antigénero. Distintos informes han demostrado que existen vínculos internacionales entre los partidos y organizaciones de derecha y extrema derecha que ponen en cuestión los derechos de las mujeres. Por ejemplo, el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos destaca en su último informe que países como Francia, Italia, Alemania, España y Polonia es donde radican las fundaciones antigénero más importantes. Apunta a una “estrategia cuidadosamente orquestada” contra el avance de derechos y señala que su financiación se ha cuadruplicado en diez años.

También el informe CALALA, coordinado en 2021 por Nuria Alabao y Diana Granados, evidencia que existe una estrategia coordinada a nivel internacional para hacer retroceder las apuestas democráticas en Europa y América Latina, y señala los nexos entre organizaciones. “Las agrupaciones ultraderechistas del ámbito civil lideran las movilizaciones y la construcción de discursos, y son el impulso de los gobiernos ultraconservadores. Estas organizaciones se movilizan contra el derecho al aborto con argumentos y estrategias similares en ambos continentes, que les llevan a apoyar opciones políticas determinadas, algunas de marcado acento autoritario”, denuncia el informe.

Volviendo a nuestro país, además de la última reforma legislativa, dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional –tras su recién estrenada mayoría progresista– han reforzado el derecho al aborto. En primer lugar, la que en mayo de 2023 desestimó el recurso presentado en 2010 por el Partido Popular y declaró constitucional la ley de plazos aprobada hace 13 años, en lo que muchos expertos coinciden en que es, de facto, un blindaje del

Obligar a escuchar “latidos fetales”, realizar ecografías a las mujeres que quieran abortar u obligarlas a desplazarse a otras comunidades autónomas son algunas de las estrategias usadas en Murcia o Castilla y León

La ofensiva conservadora responde a un movimiento internacional bien orquestado, y anclado en las estrategias antigénero cuya financiación se ha cuadruplicado en diez años

derecho al aborto. Y en segundo lugar, otra sentencia del mismo tribunal, a la que se ha hecho referencia anteriormente. En julio de este mismo año el Constitucional reconoció que obligar a viajar a una mujer a otra comunidad autónoma para abortar vulnera sus derechos fundamentales. Fue el caso de Antonia, una ciudadana murciana que en 2014 pasó un “calvario” para poder interrumpir su embarazo y acabó teniendo que viajar a Madrid a una clínica rodeada de antiabortistas que la increparon.

“Libre, seguro y en la Sanidad Pública”

El recurso de Antonia lo llevaron desde Women’s Link, una organización internacional que lucha por los derechos de las mujeres. Gema Fernández es abogada y portavoz de esta asociación, y cree que la sentencia que ganaron, junto con el resto de avances, hacen que el aborto esté “más asentado que nunca”. “Es un derecho que puede estar amenazado en el plano discursivo, de las guerras culturales, porque hay mucha reacción. Pero a nivel jurídico está más asentado que nunca, después de las sentencias del Constitucional, que hacen una interpretación interesante y garantista del derecho al aborto”, explica. La ONG Women’s Link trabaja en diferentes países de Europa, África y América Latina, donde están constatando que los discursos antiabortistas comparten argumentos jurídicos y mensajes comunicativos, “porque estos grupos tienen conexiones entre ellos”, denuncia Fernández.

Ante este panorama, numerosos actores se han organizado para defender el aborto como un derecho fundamental. Como ya ocurrió en 2014 con la oposición masiva a Gallardón a través del llamado Tren de la Libertad, el movimiento feminista sigue defendiendo firmemente un derecho que consideran fundamental. Una de las más activas es la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Catalunya, cuya presidenta, Silvia Aldavert, reconocía en un reportaje reciente en este medio que el discurso

antiabortista está bien organizado a nivel global. Entienden los derechos sexuales y reproductivos como “derechos humanos”, y piden garantizar el aborto desde la Sanidad Pública. Para ello han puesto en marcha diferentes iniciativas de sensibilización, así como servicios de acompañamiento a mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid han organizado en los últimos años movilizaciones para garantizar lo que ellas llaman “un verdadero derecho al aborto: libre, seguro y en la Sanidad Pública”. Cuenta Yolanda Iglesias, activista de esta comisión, que el derecho al aborto es “irrenunciable” para el movimiento feminista. “Es una demanda imprescindible para nosotras: desde los feminismos centramos nuestro discurso en el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, su cuerpo, su sexualidad y su maternidad, desplazando así el discurso antielección que apela a lo emocional sobre el derecho abstracto a la vida del embrión”, asegura. Para ellas, mantener la tensión en las calles es un deber básico.

Justa Montero, que trabaja mano a mano con estos movimientos, denuncia los obstáculos que impiden el acceso efectivo al aborto: “Está claro históricamente y a nivel internacional que las medidas que limitan y obstaculizan el derecho al aborto no evitan los embarazos no deseados, sino que aumentan el riesgo para la vida y la salud de las mujeres, para su seguridad jurídica y la de los y las profesionales que los practican”, asegura. Y, aunque reconoce que la reciente sentencia del Constitucional sobre la ley de plazos es un paso adelante, cree que hay que seguir avanzando para garantizar este derecho en la práctica: “En primer lugar, exigiendo a todos los gobiernos autonómicos y administraciones públicas que apliquen ya la nueva ley, y que sea efectiva su normalización como prestación sanitaria pública, además de incluir educación afectivo sexual en el sistema educativo”.

El informe CALALA dedica un apartado a las estrategias que puedan proteger el derecho al aborto de la ofensiva conservadora: “Articularse a nivel internacional para hacer incidencia entre los movimientos feministas; apoyar públicamente y acompañar a las agredidas; contrarrestar, incluso adelantarse, a los ataques en redes y medios y no abandonar las calles”, explicitan.

Desde Women’s Link lanzan un mensaje optimista, como resume la abogada Gema Fernández: “Este tipo de grupos anti derechos nos hacen parecer que tienen mucha fuerza e influencia. Y hay que estar alerta, pero si lo pensamos bien, está habiendo tantísimos avances jurídicos, que lo conectan con derechos fundamentales y humanos, que es muy complicado penalizar el derecho al aborto. Eso sería incompatible con los derechos de las mujeres. Por eso decimos que no nos quedemos solo con esa idea de que está en riesgo, cuando realmente ha habido un gran número de avances”.



Vox apunta a los que viven en los márgenes

La idea de que las naciones pertenecen a un “grupo nativo” que ha de protegerse de “los de fuera” es uno de los ejes de la ultraderecha. Sus acciones, directas o simbólicas, aumentan el racismo, los delitos de odio y la vulnerabilidad de los migrantes



Gabriela Sánchez

Periodista de elDiario.es

@Gabriela_Schz

Aunque Abdetawab vivió durante seis años en situación de exclusión, nunca se dejó caer del todo. El joven marroquí sobrevivió en parques, en una casa abandonada, en los lugares habilitados en las ferias con las que ha recorrido toda España y hasta en una tetería donde trabajaba sin contrato a cambio de techo y comida.

El joven llegó a las costas españolas como menor extranjero no acompañado, uno de esos chavales a los que Vox llama MENAS, los niños migrantes convertidos en uno de los principales focos del discurso del odio de la extrema derecha. Nada fue fácil para Abderrman, ni para la mayoría de adolescentes que migran solos a suelo español, pero el aumento del poder de la extrema derecha despierta el temor de que otros jóvenes como él, así como cualquier persona en situación irregular, afronten aún más riesgos de los que ya encaran en la actualidad.

Persecución de las personas sin papeles a través de la colaboración de los ayuntamientos con los cuerpos policiales, retirada de ayudas que fomenten la inclusión de los migrantes en situación irregular, obstaculización del empadronamiento, criminalización a la población extranjera a través del altavoz de decenas de ejecutivos autonómicos y municipales... Las propuestas electorales lanzadas durante las últimas campañas y los acuerdos alcanzados por la formación de Santiago Abascal y el Partido Popular para gobernar en distintas comunidades y municipios tras los comicios del 28M dan pistas de los derechos que la extrema derecha apuesta por arrebatar a las personas migrantes, a las que las trabas legislativas ya suelen empujar a graves situaciones de vulnerabilidad.

“La entrada de gobierno de partidos de extrema derecha implica la toma de decisiones en contra de las personas migrantes el 100% de las veces”, zanja Guillermo Fernández Vázquez, profesor en Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro ‘Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional’ (Ed. Lengua de Trapo, 2013). A veces, las medidas aplicadas se caracterizan por un corte simbólico y otras alcanzan una aplicación más real. “Pero el corazón ideológico de estos partidos es lo que denominan ‘el nativismo’. En base a ese pensamiento, las naciones pertenecen a un grupo nativo y, por tanto, ese grupo nativo debe protegerse de posibles entradas de individuos exógenos”, continúa el especialista.

“Por eso utilizan tanto la metáfora de las casas. Igual que las casas, para ellos las naciones tienen propietarios y otros que no lo son. No significa que no pueda haber huéspedes pero, en general, creen que lo primero que hay que hacer es atajar la inmigración, particularmente la procedente de África, aquella con poco poder adquisitivo o de religión musulmana”. Y cuando alcanzan más poder, el primer riesgo tiene que ver con la normalización de ese discurso racista, islamófobo y xenófobo entre la opinión pública.

Franco Delle Done, experto en extrema derecha y política alemana, advierte que generalmente las medidas de estos partidos con efectos de mayor alcance no suelen ser las más sorprendentes en un primer impacto, sino aquellas reformas más pequeñas,

aparentemente más sutiles y administrativas, que acaban calando en la sociedad. También en inmigración.

“Cuando este tipo de formaciones llegan al poder y pueden tomar decisiones en las políticas públicas, las mayores reformas no vienen de aquellas propuestas que generan un gran shock de cambio, como podría ser la ‘expulsión de todos los migrantes en situación irregular’, que suelen generar mucho debate pero no acaban siendo posibles de conseguir”, apunta Delee Done a este medio. En cambio, continúa, aquellas “micro reformas” que no llaman tanto la atención, como podrían ser pequeños cambios administrativos o un discurso de odio constante “van generando un cambio y, poco a poco, acaban levantando barreras en la vida de las personas afectadas, como un aumento de la discriminación o la falta de financiación para programas de inclusión”.

Realidad, legislación y “deseo”

Varios de los pactos de gobierno firmados en los últimos meses, como los de la Comunitat Valenciana, Illes Balears o el Ayuntamiento de Elche, entre otros, hablan de perseguir a los migrantes en situación irregular. “Dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal”, sostienen los textos. Este punto, apenas concretado hasta el momento, alerta a los expertos en migraciones ante la posibilidad de que la extrema derecha pretenda que determinados servicios municipales o autonómicos envíen datos a la policía con la intención de advertir de personas que se encuentran en situación irregular en España cuando hacen uso de sus derechos como ciudadanos residentes en determinadas regiones.

Aunque más desarrollada, una exigencia similar también fue incluida en 2019 en el documento de exigencias de Vox para apoyar la investidura del entonces candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, en la que pactaba que la Junta colaborase “con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados” a través de medios “personales o documentales”. Ya entonces su propuesta chocaba con la realidad: la legislación en materia de protección de datos prohíbe la cesión masiva de datos entre administraciones cuando la finalidad es diferente al objetivo para el cual se recogieron. En ese caso, el partido de extrema derecha defendía el trasvase de la información sobre la situación administrativa de los pacientes incluida en su historial médico, algo prohibido por la actual normativa.

A pesar de las garantías legales, algunas ONG han mostrado preocupación ante el compromiso de denunciar desde instituciones públicas ajenas al ámbito policial el estatus administrativo de los vecinos de un municipio. “Recoger en los acuerdos específicamente la persecución de la inmigración irregular para poner en

conocimiento los casos que se detecten ya evidencia que no hay una apuesta por el hecho de que estas personas accedan a una red de derechos, sino que potencian una sociedad excluyente y que estas personas sean perseguidas por su condición”, indica Natalia Slepoy, responsable del área de incidencia política en Red Acoge. “Medidas como esta dificultarían a las personas sin papeles llevar con tranquilidad la vida cotidiana, si existe el riesgo de que los servicios municipales avisen a la policía”, sostiene Javier de Lucas, catedrático de filosofía de derecho en la Universidad de Valencia y experto en migraciones.

Los recientes pactos de PP-Vox también se ensañan con las ONG que ayudan a las personas migrantes en situación irregular, a las que la extrema derecha acusa de “colaborar con las mafias de tráfico de personas”. Reducir los fondos autonómicos a estas asociaciones suele impactar directamente en personas con nombres y apellidos, extranjeras o no, cuya inclusión en la sociedad depende del apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro, ya sea para asesoría legal para tratar de arreglar sus papeles, ayudas a la alimentación o formaciones de idiomas o determinados oficios.

El programa electoral de Vox para las elecciones del 23J alumbra hasta donde llega su mirada en materia migratoria, aunque su cumplimiento únicamente sería posible en caso de lograr mayor influencia en el Gobierno central dado que se trata de políticas de responsabilidad estatal. El documento incluye las acciones que llevaría a cabo en caso de contar con competencias para ello. Además de incidir en acabar con los fondos destinados a recibir a los migrantes sin papeles -claves para evitar que estas personas deambulen por las calles en un país que no conocen con el consiguiente riesgo de exclusión-, la formación de Santiago Abascal apuesta por buscar la manera de impedir el empadronamiento de quienes residen irregularmente en España.

Obstaculizar el empadronamiento, que depende del ámbito municipal, es una de esas medidas pequeñas a las que se refería Delle Done. Políticas discretas, silenciosas, pero con capacidad para generar consecuencias graves en quienes las sufren: “Para las personas en situación irregular, el empadronamiento es la puerta de entrada de otros derechos: la sanidad, la educación, la certificación del tiempo de permanencia en España para empezar a contar su tiempo de residencia para poder conseguir los papeles en un futuro... Es un tema vital”, sostiene la portavoz de Red Acoge.

Gonzalo Fanjul, director de investigación de la Fundación porCausa, ve “difícil” que los ayuntamientos impidan el empadronamiento de forma sistemática a las personas sin papeles. “Significaría que una parte importante de su población quedaría fuera del radar de las instituciones”, sostiene el experto en migraciones, aunque concluye con un matiz: “Aunque casi nada de la política migratoria responde a criterios racionales. Sería una medida administrativa con consecuencias muy serias”.

A nivel estatal, la formación de extrema derecha apuesta por

Gonzalo Fanjul: “Los gobiernos europeos, incluido el español, han cruzado tantas veces la línea roja que ni te acuerdas de dónde estaba. Y tiene que ver con el empuje narrativo de la ultraderecha, que ve la inmigración como problema y nunca como solución”.

Las derechas acusan a las ONG que ayudan a migrantes en situación irregular de “colaborar con mafias de tráfico de personas”

acabar con una de las pocas vías existentes para que las personas que viven sin papeles durante años en España puedan conseguir una tarjeta de residencia si demuestran su arraigo en el país y presentan una oferta de contrato de trabajo, una competencia únicamente estatal. “Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal”, proponía el programa de Vox para las últimas elecciones generales. Esta propuesta supondría, recuerdan los expertos, abocar a la clandestinidad indefinida a aquellos cientos de miles de personas sin papeles que no pueden ser expulsadas.

“Todo lo que sea reducir las escasas vías de integración que existen actualmente en España y evitar el contacto de los migrantes con las instituciones aumenta su vulnerabilidad”, advierte Fanjul. “Es poco probable pero, si llegasen a lograr cumplir su palabra, tendría consecuencias muy graves”, añade.

Son niños, no MENAS

Los especialistas coinciden en señalar el colectivo que más les preocupa: los menores migrantes que llegan a España de forma irregular sin la compañía de un adulto, constante objetivo de criminalización, una de las principales banderas de Vox para expandir el odio. Aunque en los acuerdos de gobierno municipales y autonómicos no incluyen menciones específicas hacia ellos, los especialistas consultados se mantienen pendientes de los movimientos que puedan producirse en este sentido en los municipios y comunidades con presencia de la formación de Abascal.

A pesar de que el partido de extrema derecha apuesta por la repatriación de estos chavales y el cierre de los centros de acogida destinados a los adolescentes extranjeros, son propuestas prácticamente imposibles de aplicar. La expulsión forzosa de menores migrantes solos, además de ser una competencia estatal, choca con la legalidad si no cumple con una serie de exigentes

requisitos que demuestren el bien superior del menor, como evidencia la investigación abierta sobre el retorno de más de 50 adolescentes a Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta de 2021. El operativo, desarrollado sin las garantías exigidas, ha dejado en el banquillo a la exvicepresidenta ceutí y a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, procesadas por un posible delito de prevaricación.

No son esas grandes medidas las que más alertan a las organizaciones que atienden a los menores, ante la improbabilidad de su materialización, sino posibles actuaciones administrativas, más sutiles, que deriven en un aumento de la exclusión de estos chavales vulnerables, cuya tutela y acogida es responsabilidad autonómica. “A nivel autonómico, tienen la posibilidad de rebajar las garantías y condiciones de acogida de los menores. En algunas regiones, estos chavales, tan criminalizados por la extrema derecha, ahora están en manos de comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. El problema es que acaben más jóvenes en la calle, que les empujen a pasar el trance de no tener otra opción que ganarse la vida delinquiendo, cuando la situación ya es muy complicada para ellos”, advierte Javier de Lucas. “Es ahí donde más se puede degradar sus circunstancias, a través de recortes de financiación y de las políticas de servicios”, añade.

Más allá de su capacidad real de meter mano en las políticas que afectan a las personas migrantes, hay otros riesgos ligados al mayor poder de la extrema derecha: su altavoz. “El verdadero peligro de la ultraderecha no es tanto su capacidad de gobernar y tomar medidas que afecten de forma directa a los migrantes, sino la capacidad de contagiar a quienes sí la tienen. Ya se está dando en Europa, lo vemos en las políticas migratorias cada vez más restrictivas, y ya pasa en España”, considera Fanjul. “La lógica es la misma: inmigración como problema que hay que resolver, nunca como una solución. Los gobiernos europeos, incluido el actual español, han cruzado tanto la línea roja que ni te acuerdas de dónde estaba la línea roja. Y tiene que ver con el empuje narrativo de la ultraderecha en Europa. Ese es el riesgo. Vox llegará al poder y no hará nada muy diferente. Lo que sí podría hacer es aplicar los abusos que ya vemos en nuestras fronteras de forma estructural y normalizarlos sin vuelta atrás”.

Desde el año pasado, Ibrahim trabaja en Madrid como camarero en un restaurante Estrella Michelin. El joven regularizó su situación tras la reforma del reglamento de extranjería impulsada durante la última legislatura, centrada en facilitar el acceso al mercado laboral de los menores extranjeros no acompañados. Sin este cambio normativo, el joven no habría conseguido el permiso de trabajo, su primer impulso para salir de la exclusión, la vía para empezar a cotizar y salir adelante de manera independiente. Sin esa norma, Ibrahim, y tantos otros, podrían seguir en los márgenes en los que la extrema derecha se empeña en mantenerlos.



Desteñir el arcoíris para volver al blanco y negro

La extrema derecha ha puesto en la diana los derechos LGTBI en una ofensiva que se reproduce a nivel global y que legitima un ambiente de hostilidad para el colectivo



Marta Borraz

Periodista de elDiario.es

@martaborraz

Teresa Guerra y Ana Belén Ávila volvían de pasear a los perros por el pueblo en el que viven, como hacen cada día. Eran las once de la noche y al llegar a casa se encontraron con un sobre metido por debajo de la puerta. Firmada por “un vecino”, la carta que había dentro cuestionaba al matrimonio por haber colgado la bandera arcoíris en su balcón en lugar de la de España y proclamaba abruptos como que “la unión de hombre y mujer es lo natural” o que “nos están imponiendo una falsa ideología hasta en los colegios”. El texto lo denominaba “ideología del Orgullo” y afirmaba que “destruye a la familia y la sociedad”.

El incidente se produjo tan solo un par de semanas después de la celebración de la reivindicación LGTBI por excelencia, el Orgullo, que conmemora el levantamiento que tuvo lugar el 28 de junio de 1969 en el bar neoyorkino de Stonewall Inn contra la persecución al colectivo. Como es costumbre, justo en esos días fue cuando Teresa y Ana, que llevan cinco años viviendo en Villanueva de Perales (Madrid), colgaron la bandera arcoíris en casa, pero decidieron dejarla más tiempo como respuesta al rechazo del Ayuntamiento a colocarla en su fachada.

Este año, la fecha más emblemática para la comunidad LGTBI llegaba marcada por las elecciones autonómicas y municipales celebradas un mes antes y en plena negociación de los pactos de gobierno, varios de ellos finalmente suscritos por el Partido Popular y Vox. Que las alianzas se sellaran a las puer-

tas del Orgullo y que estas le dieran a la extrema derecha un poder sin precedentes en democracia tuvo entre sus primeros efectos una cascada de vetos a la bandera arcoíris en edificios instituciones donde sí ondeaba antes.

Es la punta del iceberg de una ofensiva que pone los derechos del colectivo LGTBI en la diana: “Los símbolos pueden parecer solo eso, símbolos, pero en realidad la bandera no es solo un trozo de tela. Ponerla es un reconocimiento a nuestras vidas, es dar una sensación de apertura y de seguridad. Y quitarla es hacer lo contrario, es volver a intentar darnos la espalda e invisibilizarnos”, afirma la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil.

El empeño de Vox en quitar la insignia se extendió con la aquiescencia de los populares, pero la cruzada contra los símbolos LGTBI no se ha quedado ahí y los ejemplos se han sucedido: en el municipio cántabro de Bezana, las derechas llegaron a censurar la película infantil ‘Buzz Lightyear’ porque en ella aparece el beso entre dos mujeres; en Galapagar (Madrid), la nueva coalición del PP y Vox ha eliminado los bancos LGTBI del pueblo y en Calvià (Mallorca), ha sustituido los pasos de peatones arcoíris por los clásicos en blanco y negro. Toda una declaración de intenciones.

Volver al armario

La situación de la comunidad LGTBI antes de la irrupción de Vox estaba lejos de ser la ideal. El rechazo, la discriminación y el miedo seguían marcando las vidas de las personas LGTBI, algo que atestiguan los datos de la última macroencuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), realizada en 2019: en nuestro país hasta un tercio de las personas LGTB no va a algunos lugares por miedo y la mitad de quienes tienen pareja evita darse la mano en público.

Pero paralelamente España ha experimentado una transformación hasta ser considerado uno de los lugares con mayor aceptación social al colectivo LGTBI: de la dura represión que el franquismo ejerció sobre los homosexuales, a los que persiguió, encerró y vejó, a convertirse en 2005 en el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Según un estudio de Ipsos, el 78% de la población apoya las bodas entre personas del mismo sexo y el grado de visibilidad del colectivo (un 14% de los ciudadanos se define como no heterosexual) supera la media mundial (9%).

Sin embargo, hay quienes quieren desteñir la España colorida y de la diversidad que en las últimas décadas ha ido abriéndose camino. “Vivo una vida normalizada, en mi entorno y con mi mujer...pero me costó 41 años salir del armario y ahora siento que me quieren volver a encerrar”, coincide Teresa Guerra haciendo referencia a un “escenario político” que a su juicio “está legitimando” y haciendo escalar discursos que antes no ocupaban tanto espacio: “Homófobos ha habido siempre, pero cuando las instituciones dejan de apoyarnos parece que se crecen y no se esconden”.

Y es que la misiva que recibieron ella y su mujer reproduce la narrativa que suele enarbolar la extrema derecha sobre los derechos LGTBI, cuya conquista equipara con una supuesta “ideologización” y “adoctrinamiento” de la sociedad, especialmente en las aulas, auspiciada por los “chiringuitos LGTBI”, como llama a las organizaciones sociales a las que quiere vetar en las ayudas públicas. “Hay un ataque a nuestros derechos evidente que no solo se da en España. Aquí estamos empezando a ver retrocesos, pero es internacional”, mantiene Sangil.

Ecos de una ofensiva global

El sociólogo de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), David Paternotte, lleva años estudiando a los grupos que a nivel internacional buscan tumbar los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Vox y organizaciones como One of Us, presidido por el exministro popular Jaime Mayor Oreja, o HazteOír, que han ido marcando el paso de la agenda ultracatólica, forman parte de esa constelación de actores antiderechos, que “comparten espacios, estrategias e ideas” y ahora miran hacia países como Hungría, Italia, Polonia o Estados Unidos, donde el retroceso es indiscutible.

“Los ataques a la bandera se han visto en varios países. De momento, en España no hay una regresión legislativa en sí misma que sí han llevado a cabo estas fuerzas en otros lugares, pero se ha anunciado en varias comunidades”.

De hecho, en Aragón o Baleares PP y Vox ya han pactado reformar o derogar las leyes trans o LGTBI autonómicas aprobadas en los últimos años mientras que en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, del PP, también ha anunciado que modificará la norma. A ello se suma el veto parental, una de las medidas estrella de la ultraderecha destinada a impedir charlas LGTBI en los colegios, que los populares también han ‘comprado’ en algunas autonomías.

Además, la promulgación de leyes “de protección de la familia” y la sustitución en muchos ayuntamientos de las concejalías de igualdad por concejalías de familia marca también las prioridades de la ultraderecha. “A nivel internacional se ve esa afirmación de la familia en singular, tradicional y heteronormativa, que es un constructo que no incluye a las personas homosexuales”, afirma Paternotte.

Las declaraciones que miembros de Vox han hecho en estos últimos años apuntan en esa misma dirección. El líder de la formación, Santiago Abascal, ha llegado a afirmar que el matrimonio es “la unión entre un hombre y una mujer” y que debería “tener preferencia” sobre la adopción de parejas homosexuales mientras que la exdiputada en la Asamblea de Madrid, Gábor Joya, declaró en 2014 que “preferiría” que si su

hijo fuera homosexual “no adoptara” para hacer prevalecer “el derecho de un niño a tener padre y madre”.

Aún así, la extrema derecha sabe del coste social de las manifestaciones directamente LGTBIfóbicas y es consciente de los consensos sociales, por lo que adaptan sus estrategias. “Recurren a las insinuaciones, los guiños o las provocaciones, pero todos sabemos que cuando hablan de perversión, corrupción de menores o chiringuitos no se están refiriendo a personas heterosexuales”, dice Nacho Esteban, autor de ‘Por rojos y maricones’ (Egales, 2023), que analiza las políticas LGTBI del último siglo.

Quizá por eso mismo, porque “es algo aceptado por partes muy amplias de la sociedad española”, la derogación del matrimonio igualitario no aparece entre las medidas propuestas por Vox en el programa con el que se presentó a las elecciones del pasado 23 de julio. Sí se compromete a acabar con toda la arquitectura legislativa de igualdad de género, incluidas normas de la época de José Luis Rodríguez Zapatero como el aborto o la ley contra la violencia de género, pero no el matrimonio.

La posibilidad de que las alianzas del PP y Vox se replicaran a nivel estatal tras las elecciones generales del 23 de julio puso en guardia a las organizaciones, que llamaron la atención sobre los riesgos de un posible gobierno estatal con la ultraderecha dentro. Entre sus propuestas, ni una sola medida en favor de las personas LGTBI, pero sí varias en sentido contrario: Vox prometía “cerrar” los colectivos LGTBI, derogar la llamada Ley Trans, que incluye derechos para toda la comunidad, o sacar de la sanidad pública los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo.

Las urnas no dieron a los conservadores los resultados que esperaban, pero los efectos de la retórica y las políticas son palpables. “Al final tratan de introducir en la agenda política y mediática asuntos que van en la línea de que las personas LGTBI somos de alguna manera peligrosas con el objetivo de generar una opinión pública desfavorable y poder aprobar legislación en su contra”, señala Esteban.

Para Paternotte, lo más reseñable es que se ha creado “un contexto mucho más hostil” que puede “llegar a legitimar la violencia verbal e incluso física” contra el colectivo. “Más gente se permite hacer según qué reflexiones sobre su dignidad” que se complementa –prosigue el experto– con “una violencia institucional, pública y política que acaba generando malestar, ansiedad o miedo. Especialmente la población joven que todavía está en busca de su identidad puede tenerlo más difícil”.

Alicia García-Raboso fue una de las primeras personas en hacer uso de la nueva Ley Trans para cambiarse el nombre y el sexo legal en base al derecho a la autodeterminación de

Vox y organizaciones como One of Us, presidida por el exministro Jaime Mayor Oreja, o Hazteoír, han ido marcando el paso de la agenda ultracatólica y comparten espacios, estrategias e ideas que miran hacia EEUU y países como Hungría y Polonia

David Paternotte: “Las personas trans se han construido como un chivo expiatorio, como símbolo de la diversidad LGTBI”

género. Duda de que desde las comunidades en las que gobiernan las derechas puedan torpedear la norma, pero sí cree que “habrá un montón de políticas, protocolos y reglamentos” que hay que desarrollar y que al depender de las autonomías, “los dejarán pasar” hasta convertir las leyes “en papel mojado”.

A pesar de que la ofensiva antiderechos es global, en cada país se manifiesta acorde a sus particularidades. Y en España, si algo marca esta ola reaccionaria son los ataques a las personas trans, coinciden las voces expertas consultadas.

Ambas formaciones siguen utilizando el término “disforia de género”, que la Organización Mundial de la Salud descartó en 2018 al dejar de considerar la transexualidad un trastorno. Y ambas han recurrido al Tribunal Constitucional la Ley Trans, que reclaman derogar bajo el pretexto de que “es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir”, frivolisó Alberto Núñez-Feijóo. Vox, por su parte, la asocia directamente al “fomento de la transexualidad” y ha llegado a vincular ser trans con situaciones como el bullying, la anorexia o incluso “problemas emocionales” en la adolescencia.

“Las personas trans se han construido como un chivo expiatorio, como símbolo de la diversidad LGTBI”, opina Paternotte, que cree que es una elección “consciente y estratégica”. Por un lado “porque a nivel legislativo es un tema más nuevo, que piensan que es más frágil y más fácil de dismantelar” y por otro “porque escogen los asuntos que van a dividir” socialmente, dice en referencia a la profunda brecha que desató la Ley Trans en el Gobierno de coalición, en el seno del PSOE y en el movimiento feminista.

García-Raboso lamenta cómo “el ambiente social y político se ha recrudecido” en los últimos años para las personas como ella, quienes “han estado sometidas a un nivel de violencia que se ha elevado considerablemente” a través de

discursos particularmente agresivos como tratar a las mujeres trans como si fueran hombres o vincularlas con agresiones sexuales. Aún así, esta mujer de 42 años que empezó su transición pública el año en que estalló la pandemia, en 2020, cree que quienes lo hacen “son un pequeño grupo, aunque muy ruidoso”.

Lo trans es un ejemplo paradigmático de cómo ambas derechas comparten posiciones en algunas de las batallas ideológicas que ambos dan. Ya antes de la emergencia de Vox los populares se opusieron al matrimonio entre parejas del mismo sexo con argumentos similares y “nunca han apoyado una ley nacional favorable a los derechos LGTBI”, suscribe Esteban, que explica cómo cuando estos avances “dejan de ser controvertidos para la sociedad” el PP ha acabado asumiéndolos.

Ahora, sin embargo, el momento es distinto y el partido se está viendo arrastrado por la emergencia de Vox, con quien suscribe pactos anti-LGTBI sin disimular. Es algo que se da en otros países que han vivido un proceso similar –sostiene Paternotte– porque “las derechas más clásicas tienen miedo a perder votos y acaban adoptando el discurso de la ultraderecha”, sobre todo en temas en los que estas formaciones tienen una posición conservadora pero “en los que no querían meterse debido al consenso social”.

“Ellos la quitan, yo la pongo”

Aún así, la comunidad LGTBI celebra “el mensaje” que las urnas mandaron el pasado 23 de julio al paralizar, de momento, un posible gobierno del PP y Vox, como reconoce Uge Sangil, de la Federación Estatal LGTBI+, que cree que el colectivo “es valiente” y “ha demostrado que los derechos hay que conquistarlos y defenderlos”.

Un “rayo de esperanza” lo denomina García-Raboso, quien piensa que, pese a todo, las personas que no siguen la norma heterosexual “cada día nos visibilizamos más” y “somos parte de las familias y el entorno de un montón de gente que acaba viendo que no somos el demonio”.

Alicia García-Raboso destaca como ejemplo la movilización ciudadana que desató la decisión de eliminar las banderas arcoíris durante el Orgullo con cientos de mensajes en redes sociales de personas publicando una imagen de la insignia junto a la frase “ellos la quitan, yo la pongo”.

Banderas LGTBI fue lo que también colgaron en las ventanas algunos vecinos del pueblo de Teresa y Ana Belén en señal de solidaridad tras enterarse de la carta que habían recibido cuestionándolas: “Recibimos el apoyo de algunos vecinos, incluso gente mayor que nos conoce de cruzarnos al pasear se paró a decírnoslo. Con eso nos quedamos”.



CULTURA

La ofensa, ese motor de la censura

¿A quién daña un pezón con una gota de leche? La ofensa, a veces presunta, casi siempre preventiva, desencadena una represión ideológica que se disfraza con eufemismos como “ajuste presupuestario” o “protección al menor”



Elena Cabrera

Redactora jefa de Cultura de elDiario.es

@elenac @mastodon.world

El principal sinónimo de censura es el miedo. La censura es el instrumento que se otorga el poder a sí mismo para contrarrestar el temor que siente ante diferentes amenazas. Amenazas como la contradicción, la inclusión, la insurrección o la ruptura de tabúes.

Mientras que el poder es agresivo y contundente con sus métodos, los creadores y la ciudadanía están en una posición de indefensión. El Estado les ofrece leyes garantistas, un aparato judicial, el Defensor del Pueblo y la oposición política como herramientas de respuesta. Pero en un momento como este, donde la censura no se llama a sí misma censura sino “ajuste presupuestario” o “reorientación de la programación”, las únicas estrategias de defensa –nunca en la misma proporción que la ofensa– son las noticias en los medios de comunicación, las cartas y los manifiestos, que se atreven a realizar la traducción inversa de esos eufemismos a una idea –la censura– que más que una palabra es una pedrada.

Cuando Instagram –cuya empresa matriz ocupa el número 31 en ingresos en Estados Unidos, he aquí el poder económico, con mayor alcance que el político– borró en 2021 el pezón lactante del póster que anunciaba la película de Almodóvar ‘Madres paralelas’, lo hizo porque lo consideró ofensivo y lo calificó como pornografía. O cuando Twitter bloqueó la cuenta del activista por los derechos de los animales Aitor Garmendia en 2019, lo que resultaba ofensivo fue su serie ‘Matadero’, donde aparecían ovejas aterrorizadas, conejos observando la muerte de sus semejantes o un ternero inconsciente tras haber sido disparado en la cabeza. Finalmente, fueron eliminadas por el propietario de la plataforma porque las calificó de “escenas sangrientas gratuitas”. “Las prohibiciones establecidas por los monopolios o cuasimonopolios pueden ser en la práctica tan completas como las aplicadas por organismos defensores respaldados por la fuerza de la ley”, atina el Nobel J. M. Coetzee en ‘Contra la censura. Ensayos sobre la pasión por silenciar’ (Debolsillo, 2007).

Recordemos también lo sucedido en 2018, cuando ARCO retiró una obra de Santiago Sierra en la que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart eran llamados “presos políticos”. Ifema se justificó diciendo que lo había hecho “para evitar polémicas”. “Nosotros no censuramos a nadie”, dijo el entonces ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo (PP) a pesar de que el recinto ferial es un consorcio con participación pública. Y cómo interpretar que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid permitiera al artista urbano Sam3 replicar ‘El origen del mundo’ –un cuadro de Courbet colgado en las paredes del Museo de Orsay de París que representa el pubis de una mujer– en una valla situada en un descampado y que, al día siguiente, amaneciera con una tela tapando la entrepierna... Debido “a la proximidad de un colegio”, el propio Ayuntamiento reubicó la obra. Unos años antes, en 2014, 60.000 ejemplares de la revista El Jueves con un chiste sobre la abdicación del rey en portada fueron presuntamente destruidos por la propia editorial, lo que llevó al abandono de dibujantes como Manel Fontdevila y Bernardo Vergara, que desde entonces publican sus viñetas de humor político en elDiario.es.

Y así podríamos seguir hacia atrás enumerando muchos casos, que se nos van olvidando, en los que la ofensa, a veces presunta, casi siempre preventiva, desencadena la censura. Desde finales del siglo XVIII, los artistas se mueven en un constante pulso al poder cuya brújula señala la exploración de los límites, o según Coetzee los puntos débiles, del ordenamiento social: desde las leyes a los valores, de los derechos a los sentimientos. Ofender al poder es uno de los principales objetivos del artista del XIX y del XX. “El gesto punitivo de censurar tiene su origen en la reacción de ofenderse”, confirma Coetzee. “La fortaleza de estar ofendido, como estado mental, radica en no dudar de uno mismo; su debilidad radica en no poder permitirse dudar de sí mismo”, nos dice el escritor sudafricano. Y efectivamente, rara vez hemos visto duda o arrepentimiento en las palabras del censor ofendido.

¿Fue ‘Orlando’ en 1928 demasiado lejos?

Por eso, entre otros muchos motivos de la delirante historia en relación a ‘Orlando’, de Virginia Woolf, nos sorprendieron los cambios de opinión del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) durante el episodio de cancelación de este verano. La censura estatal, gracias a su poder, se erige en mediador entre la sociedad y lo que aparentan ser “las fuerzas de la subversión o la corrupción moral” y los consistorios donde gobernaba la izquierda y han pasado, tras el 28 de mayo, a manos del PP, en algunos casos junto a Vox, se han tomado esta misión muy en serio.

Valdemorillo es uno de esos gobiernos en los que ha entrado Vox de la mano del Partido Popular. Como suele ser habitual, la estrategia del PP consiste en ceder a ese partido la Consejería de Cultura y alguna vicealcaldía o vicepresidencia. Así ha sucedido en Castilla y León, Comunitat Valenciana y Burgos. El PP desdeña la cultura pero para el partido de Abascal es muy importante como capital político, pues les hace diferenciales y les permite crecer, ya que en otros ámbitos, como la economía, no tienen nada que aportar. La guerra cultural sobre el terreno de valores como la patria o la familia le sale a la ultraderecha barata, rápida y efectiva, incluso si pierde las batallas. En ‘Orlando’, la escritora Virginia Woolf puso en jaque al patriarcado, cuestionó los roles de género y atendió a la sexualidad femenina y al lesbianismo. No está nada mal para 1928. Pero hay a quien le parece mal casi un siglo después.

En los años 40, ‘Orlando’ sufrió una doble censura. Primero la de la traducción de Jorge Luis Borges, que según los expertos sabotó gran parte de su contenido crítico. Y después la de la censura española, que impidió que ese libro en concreto de la autora llegara a las librerías, aunque no hiciera lo mismo con ‘La señora Dalloway’, por ejemplo. Cuando el Ayuntamiento de Valdemorillo recibe el informe de la programación cultural apala-

brada por el equipo anterior, repara en que la compañía de teatro Defondo representará dos obras teatrales en la Casa de la Cultura. Una es para el público juvenil y familiar, y la otra es ‘Orlando’. “Se está ajustando el presupuesto”, indicó el portavoz de Vox a este periódico. Adivinen cuál de las dos obras se cayó del cartel por “motivos presupuestarios”. El director de la compañía afirmó que le habían comunicado telefónicamente que ‘Orlando’ no les gustaba. Y en ese resquicio de debilidad, de duda sobre sí mismo que decía Coetzee, en un desenlace rocambolesco el consistorio quiso demostrar que la polémica no tenía sentido alguno, por lo que ofreció a Defondo que representara la obra, con la condición de que lo hiciera gratis y que toda la recaudación fuera para las arcas municipales. Y con esta propuesta, que lógicamente no fue aceptada, pretendió el Ayuntamiento zanjar cualquier duda de ánimo censor en su política cultural.

La historia reciente de la censura en España se inicia en la dictadura de Primo de Rivera, donde la obsesión está más en la prensa que en los libros. A partir de ahí, se instala una censura previa que atraviesa también la Segunda República, a pesar de las garantías que se dio el Estado con su Constitución de 1931. La Ley de Orden Público de 1933 permitía a la Autoridad civil suspender las publicaciones que “preparen, exciten o auxilien la comisión de los delitos contra el orden público” en el caso de que se decretara el estado de alarma. Pero la verdadera represión llega tras el golpe de Estado de 1936 y de inmediato, en el territorio controlado por el bando sublevado comienza a funcionar la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, que se crea en enero de 1937 y cuatro meses después se le otorga plenas competencias en materia de censura libraria. Todos los expedientes que creó, y desde fecha tan temprana, los conocemos bien hoy pues se activó un fondo documental que está preservado en el Archivo General de la Administración. Por ello, sabemos que el primer libro censurado por el franquismo fue ‘Páginas de gloria de la marina nacional: diario de un voluntario’, de Francisco Vallés Collantes, cuyo expediente se abrió el 16 de junio de 1937. Tuvo el visto bueno y fue publicado al año siguiente. Como explica el archivero Daniel Gozalbo, la primera oficina de censura se instaló en 1937 en Salamanca, de ahí se llevó a Burgos y, tras la derrota republicana, a Madrid. “A partir de ese momento, la maquinaria burocrática, ubicada en instituciones de diverso nombre, no cesará en la producción de expedientes hasta su extinción definitiva en 1983”, explica.

La censura se extiende a la prensa, los libros, el teatro, la música y las películas. Allá donde haya expresión, no hay libertad. Por poner un ejemplo, los expedientes de censura cinematográfica del franquismo ocupan 1.396 cajas en el Archivo General de la Administración. Lo único bueno que podemos decir de la censura del franquismo es que no se escondía. Sin ningún rubor, existía una Junta Superior de Censura Cinematográfica, por lo

En los nuevos gobiernos de coalición entre PP y VOX la censura se ha transformado en injerencia ('Voces de la lengua' en La Rioja) o se ha disimulado bajo la excusa del control presupuestario ('Orlando')

Durante el Franquismo el censor debía contestar a tres preguntas: ¿Ataca al Dogma o a la Moral? ¿Agradece a las instituciones del Régimen? ¿Tiene valor literario o documental?

que la prohibición tenía despachos, cargos, responsables, hojas con membrete, procedimientos. Incluso cuando admitía, juzgaba, como en el famoso informe previo a la publicación del primer premio Nadal, Nada de Carmen Laforet, en 1945, sobre la cual el censor nos dice: "Novela insulsa, sin estilo ni valor literario alguno. Se reduce a describir cómo pasó un año en Barcelona en casa de sus tíos una chica universitaria, sin peripecias de relieve. Creo que no hay inconveniente en su autorización". Para cada libro, además de esta crítica literaria al vuelo, el censor –o "lector", lo llamaban– debía contestar tres preguntas (las mayúsculas son suyas): "¿Ataca al Dogma o a la Moral? ¿A las instituciones del Régimen? ¿Tiene valor literario o documental?". En democracia, en cambio, la censura actúa de manera sibilina, se viste con diferentes disfraces y se hace otro tipo de preguntas.

El rotulador de (tachar) del consejero

La censura se ha transformado en injerencia (en unos casos) y se ha disimulado bajo control presupuestario (en otros). Ignacio García es una de las voces que con mayor claridad y contundencia ha denunciado la primera de ellas, tras la afectación que ha sufrido su proyecto cultural Voces de la Lengua, encargado por el Gobierno de La Rioja cuando lo presidía PSOE y Podemos y modificado por el PP en cuanto ha ganado las elecciones autonómicas. Lo único que ha tenido que hacer el Gobierno, que es de quien depende el órgano de contratación de los artistas de la programación diseñada por García, es tachar con un rotulador qué contratos no se van a realizar. Como no se habían firmado todavía, supuestamente no hay incumplimiento. Pero el programador había diseñado un concepto, cuyos derechos vendió al Gobierno riojano, en el que se establecía un diálogo de la lengua española desde el valle en el que se registró por primera vez literatura en castellano –en el margen de una página en latín– con

el español del resto del país y con Latinoamérica. La forma que tomó este diálogo es una selección de voces donde las sonoridades de nuestra lengua se hacían particulares, especiales o diferentes. El rotulador del nuevo presidente tachó todas las actuaciones que no fueran de artistas riojanos. El proyecto se desmoronaba. "Vivimos hoy en día en un mecanismo en el que en lugar de dar más tiempo y espacio a la diversidad, se quiere acabar con ella y arrinconar a los márgenes y al ostracismo todo lo que no es el pensamiento único que algunos quieren imponer", explica García a elDiario.es.

Lo que los liberales llaman "neoinquisición"

Desde el liberalismo, hay autores como el economista Axel Kaiser que han acuñado el término "neoinquisición" como explicación para lo que denominan "una práctica cultural propia del siglo XXI cuyo objetivo es la destrucción de la reputación personal", y que este autor y otros equiparan con la censura, a la que también llaman "corrección política" o "cultura de la cancelación". Esta corriente atribuye a los medios de comunicación y a los usuarios de las redes la capacidad de "sancionar" a un individuo "que desafía o ignora una corriente identitaria".

Ante este trazo grueso, conviene leer a Gisèle Sapiro. En su libro '¿Se puede separar la obra del autor?' (Clave Intelectual, 2021) la académica francesa, discípula de Bourdieu, afirma que la moral de cada época determina sus formas de censura y analiza diversos casos actuales, admitiendo lo difícil que es entrar a este debate debido al "estilo panfletario que privilegia el ruido y la mala fe" que encontramos en redes y columnas –lo que entendemos por opinión pública, pero terriblemente sesgada según donde miremos–, ante los argumentos razonados, que aparentemente están crisis, como afirma José Antonio Marina.

Los tres componentes del "escándalo" son, para Sapiro, la violación de las normas, las revelaciones y la indignación. La pensadora nos advierte de que si queremos evaluar la moralidad del autor y la de la obra, debemos hacerlo primero respecto a la naturaleza de los actos; qué dice la ley sobre ellos y qué la opinión pública. Después, debemos evaluar si esos actos están presentes en la obra y de qué manera. Y, por último, tendremos en cuenta la consagración del autor y cómo su trayectoria incide en la repercusión de la polémica. Estas tres preguntas son más complejas que aquellas tres que se hacía el censor de la Delegación Nacional de Propaganda pero permiten una cirugía más fina sobre la herida de la ofensa.

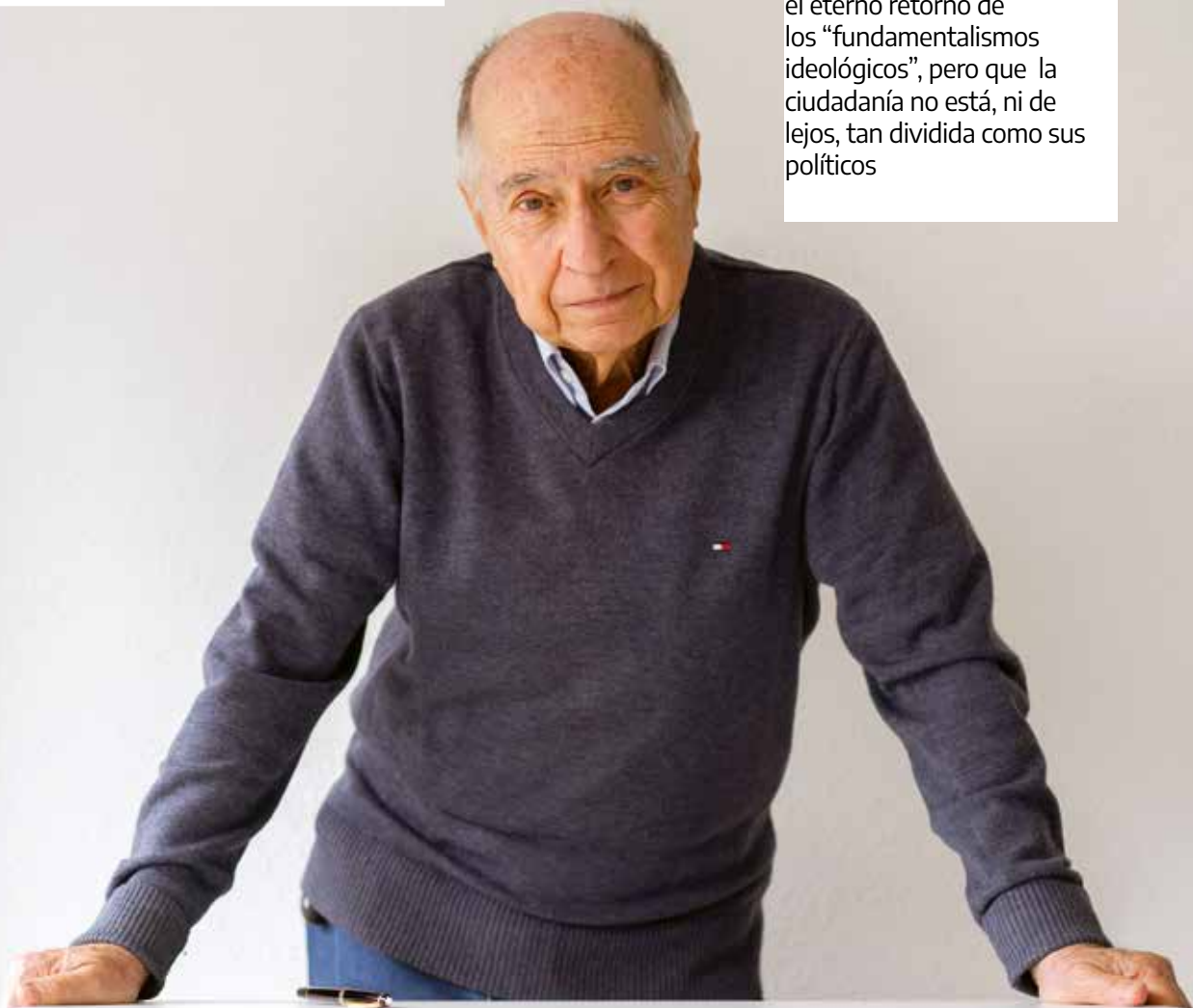
La censura sigue viva, agazapada y escondida bajo otras denominaciones. Según Coetzee, está esperando "con ilusión" que llegue "el día en el que los escritores se censurarán a sí mismos y el censor podrá retirarse".



José Juan Toharia

“Vox está en la línea de la desaparición”

Desde la mítica Cuadernos para el Diálogo durante el franquismo y como experto en demoscopia y catedrático de Sociología después, Juan José Toharia ha acumulado a sus 80 años una cantidad de información y experiencia que le permite radiografiar a la sociedad española desde el sosiego. ¿Su diagnóstico? Que está perplejo ante el eterno retorno de los “fundamentalismos ideológicos”, pero que la ciudadanía no está, ni de lejos, tan dividida como sus políticos



Acumula casi 50 años de datos. Mucho antes que Google o que las redes sociales, él sabía lo que pensábamos y lo que probablemente íbamos a votar. José Juan Toharia, catedrático jubilado de Sociología de la Universidad Autónoma, primer director de la escuela de Periodismo de El País y cofundador de la mítica Cuadernos para el Diálogo en pleno franquismo (1963), sigue a sus lúcidos 80 años, tomando el pulso político a una España convulsa que él intenta mirar con serenidad.

¿Para qué sirve la sociología?

Para que la sociedad funcione mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a separar percepciones, emociones o prejuicios de la realidad. Entonces, cuanto mejor conocemos la realidad, mejor podemos gestionarla. La sociología sirve para eso.

¿Y la demoscopia?

La demoscopia es una rama de la sociología que está muy mal entendida y mal utilizada. Me explico, la demoscopia mide estados de ánimo, no es un instrumento de predicción de comportamiento, sino de medición de sensaciones, de creencias, de orientaciones a partir de las cuales el sociólogo que se dedica a esto trata de entender el comportamiento más probable, lo que encajaría mejor con el estado de ánimo. Pero es una descripción, nunca es una predicción y el error es tomarlo como un instrumento predictivo. Las encuestas nunca permiten predecir el comportamiento. Lo que permiten es una foto fija del estado de un momento. Es como un fotograma en una película o como una radiografía que te da una imagen que hay que saber interpretar. Luces y sombras. Pero si se quiere saber la evolución, hay que hacer claramente un seguimiento continuado.

¿Y esa herramienta demoscópica puede ser empleada como artefacto de manipulación política?

Sí, es utilizada. Y con rotundo fracaso, generalmente, porque si supiéramos cómo manipular la opinión, lo aprenderíamos a hacer todos. No es posible utilizarla con éxito por dos razones. Primero, porque el valor de un sondeo es puramente temporal. Es un instante, es un momento. Pueden producirse cambios. Ha sucedido en las últimas elecciones. Una variación pequeña ha sido suficiente para convertir lo que parecía una victoria clara en una victoria muy ajustada. Por otro lado, dadas las particularidades de nuestro sistema político, es muy complicado estimar razonablemente el resultado de unas elecciones con encuestas, porque habría que hacer una en cada provincia, porque en España son 52 elecciones si contamos a Ceuta y Melilla y cada elección reparte un número distinto de escaños. Habría que hacer como mínimo 1200 entrevistas en cada provincia para tener un margen de error de más menos 3%, que es un margen

importante estadísticamente, porque a veces las diferencias entre partidos son de un punto. Por lo tanto, como instrumento de manipulación es imposible.

Por sus manos han pasado los datos demoscópicos que retratan a la sociedad española desde al menos la Transición. ¿Cómo está España?

Como testigo, como superviviente de estos 40 años de democracia, mi primera sensación es de perplejidad. Azorín escribió que en Castilla vivir es ver volver. La idea no es original, pero sí muy gráfica. Ahora estoy viendo volver cosas que había vivido antes y estoy perplejo. Por ejemplo, he vuelto a ver resucitar los fundamentalismos ideológicos. Cuando a principios de los 60 fundamos Cuadernos para el Diálogo, desde el régimen franquista unos nos toleraban, otros nos multaban y en ocasiones nos procesaban. Todos nos decían que cómo podíamos tratar por igual a la verdad y al error, que eso era equidistancia y que eso era entreguismo. Y de pronto ahora me encuentro que en los dos extremos del arco ideológico hay voces que pretenden tener la verdad absoluta o casi absoluta y condenan irremisiblemente a quien no la comparte como equidistante, como tibia, es decir, como vendido. Se lo he oído decir no a todos, pero sí a algunos de Podemos y desde luego a algunos de Vox. Después de 40 años hemos vuelto a eso.

¿Cómo es entonces la sociedad española?

En su conjunto no es así. Si por algo destaca la sociedad española actual es porque el 80% de todos, es decir, sin diferencias por edad, ni por sexo, ni por ideología, añora la etapa de la Transición, lo cual es llamativo porque la etapa de la Transición la vivimos una generación, los demás no la han vivido, así que se la han debido contar.

¿Pero eso no es producto de una nostalgia engañosa?

Sí, puede ser, pero los encuestados asocian la Transición con una época en la que se defendían las ideas, pero se llegaba a acuerdos en temas esenciales. Es decir, en la retina de nuestra sociedad está fija la imagen de Dolores Ibárruri, Pasionaria, presidiendo la primera sesión del primer Parlamento democrático después del franquismo por ser la diputada de más edad. Unas semanas antes de eso, Manuel Fraga, que era ministro del Interior, había dicho que no habría policía bastante para protegerla si venía a España. Y no solo vino, se presentó a las elecciones y ganó un escaño y no pasó nada. Cuando uno lee las transcripciones de las discusiones constitucionales es asombroso el respeto con el que Fraga Iribarne discute con Santiago Carrillo; el respeto con el que Santiago Carrillo discute con Oscar Alzaga y el respeto con el que Tierno Galván discute con todo el mundo. Es decir, son discusiones, nada de insultos, nada de descalificaciones.

entrevista

JOSÉ JUAN TOHARIA

¿Había más capacidad de diálogo?

Sí, el mensaje de dialoguemos en vez

de pelearnos había calado en la sociedad. Lo que la gente dice añorar de esa época es ese recuerdo, probablemente sobreembellecido, que les hemos ido dejando de la Transición como una época de grandes pactos. Por ejemplo, el Pacto de la Moncloa o el cambio de posición sobre la OTAN. Felipe González primero no es atlantista, luego se da cuenta de que no era una buena idea, porque integrarnos suponía la posibilidad de democratizar definitivamente al ejército español, mezclándolo con ejércitos de otros países. Se ha equivocado y hace lo que debe hacer un dirigente demócrata, que es convocar un referéndum para justificar su cambio de postura. Y lo ganó, después de una campaña muy complicada. No nos olvidemos que Franco murió en su cama y cuando lo hizo todo el mundo temía qué iba a hacer el ejército. En ese momento nos sabíamos todos los nombres de los capitanes generales porque eran fundamentales. Hoy nadie sabe quiénes son, afortunadamente.

Ha pronunciado la palabra referéndum, que hoy parece incendiaria, pero está en nuestra Constitución.

El referéndum no es la solución más democrática, porque obliga a planteamientos muy simplistas, sí o no, blanco o negro, cuando la realidad siempre es gris. Pero sí es una herramienta democrática. Aunque es mucho más democrática una elección pluripartidista donde los planteamientos, los programas, en principio al menos, son mucho más matizados.

¿Y si sirve para solucionar un problema como el que tenemos ahora en España?

No soy constitucionalista, pero como sociólogo político puedo decirte que por supuesto que es posible, pero siempre en los términos que dice la Constitución. Un referéndum no entre catalanes, entre todos los españoles porque afecta a todos. Y ese es un primer punto que los independentistas catalanes no aceptan.

¿Y desde los datos de la demoscópica cómo está la situación en Catalunya?

El núcleo duro del independentismo sigue siendo del 30%, un dato que ya constató Juan Linz en sus estudios de los años 80. Es verdad que en algunos momentos o circunstancias en los que se genera un clima más emocional o de más tensión hay un 15 o 16% de personas que se suman, pero nunca, en ningún sondeo serio, hecho desde fuera o desde dentro por el CEO [el equivalente al CIS a nivel nacional] ha habido más de un cuarenta y tantos por cien a favor de la independencia.

Y lo que sí sabemos es que el debate no es si se puede plantear o no la independencia, que es legítimo, la realidad es que Europa no lo va a admitir. Ya han dicho que si hay una segregación de un país, la cosa segregada queda fuera de la Unión Eu-

ropea y lo que es peor, fuera de la OTAN. Porque el problema catalán, o el vasco o eventualmente el gallego puede abrir la puerta a otros. En Francia tienen un problema con Córcega y con parte de Bretaña; en Italia, con el norte; en Alemania, con Baviera... Europa quiere evitar la descomposición. Por lo tanto, más allá de que tengan derecho o no, pienso que es un error.

¿Y en España? ¿No estamos ahora atravesando un momento de gran división?

En la sociedad, no. Los votantes del PSOE y los votantes del PP, en el 70% en un caso y el 80 en el otro, son partidarios de que PP y PSOE se hablen. Lo que se ha conseguido en la situación actual es que Podemos por un lado y Vox por el otro, han tironeado del partido superior más grande en cada ámbito y han conseguido que estén de espaldas. El PP solo puede hablar con Vox y el PSOE solo puede hablar con su izquierda, incluyendo en su izquierda, y esto es una peculiaridad española, a partidos de derechas como Junts o el PNV.

¿Y qué piensan los votantes de esa falta de diálogo entre bloques?

Nuestro datos [los de Metros-copia] dicen que el 80% de votantes del PSOE y del PP piensan que es una muestra de responsabilidad política que ambos partidos hablen. Por lo tanto, cada vez que un político del PP o del PSOE dice que no lo pueden hacer porque sus votantes no lo comprenderían, no dice la verdad.

“El referéndum no es la solución más democrática, porque obliga a planteamientos simplistas, pero en los términos que dice la Constitución por supuesto que es posible”

Pero la realidad nos lleva a un Partido Popular cada vez más cerca de una extrema derecha muy intolerante, que pone en entredicho muchos derechos conquistados que no se ponían ya en cuestión. ¿Esto no es un peligro para la democracia?

Es un peligro en el sentido de que por ese camino el PP no va a ninguna parte y lo sabe. El problema es que el PP no tiene más potencial aliado que Vox, una vez que los partidos nacionalistas de derechas se han aliado hasta ahora con el gobierno.

Hablemos de Vox y de su nostalgia del franquismo.

Es una nostalgia que no comparte nadie, la prueba es que es un partido que ha perdido votos en estas elecciones. En las próximas, si las hay, perderá más, porque la sociedad española no comulga con eso. Además, gran parte del voto de Vox es un voto reactivo frente a un Podemos que ya no existe, porque Yolanda Díaz está muy lejos de ser el tipo de líder y de hacer los planteamientos que hacía Pablo Iglesias.

idealista

**ahorra una pasta,
busca tu hipoteca
en idealista**





OLMO CALVO

entrevista

JOSÉ JUAN TOHARIA

¿No le augura mucho futuro a Vox?

No, creo que Vox

está en la línea de la desaparición.

¿Tenemos un problema con los políticos?

Tenemos un problema. Una gran parte de la sociedad está harta de los políticos. Cuando les preguntas cuáles son los problemas de España, el primero que te dicen son los políticos, el 80%. Es una cifra rotunda, incluso mayor que la de votantes. Y cuando hablan de los políticos se refieren a la política nacional, son parte más del problema que de la solución. Es decir, tenemos una sociedad sensata, el país con menos delincuencia de Europa. España es un país pacífico. No conozco peleas por motivos ideológicos. En Cataluña sí, con motivo del independentismo. Durante un tiempo se congelaron o se enfriaron relaciones interpersonales por ese motivo.

La extrema derecha habla todo tiempo de inseguridad, siembra el miedo...

Claro, porque el que no está en el poder intenta siempre echar la culpa al gobierno de todo. Pero es una tontería, una falacia.

En estas últimas elecciones ha habido cientos de miles de votos que se quedan sin representación. ¿Hay que replantearse el sistema, cambiar la ley electoral para hacerla más representativa y por lo tanto más democrática?

Tiene razón, pero no hay ningún sistema electoral indiscutible. En el Reino Unido, en cada distrito el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todo y en Estados Unidos la mitad se queda

sin representación. El sistema electoral ideal no existe, que puede ser mejorado, sin duda. Es cierto que en las provincias con cuatro escaños, con tres, no digamos con dos, a lo mejor la mitad de los votos no sirven para nada y es un despilfarro. En el caso de España, la Constitución permite aumentar el número de diputados hasta los 400. Esos 50 de más podrían repartirse con el voto total nacional para mejorar la representatividad.

Cambiar las circunscripciones y en vez de ir a la provincia, ir a la Comunidad Autónoma, ¿podría mejorar la representatividad?

Probablemente, habría que verlo, pero eso requiere un cambio en la Constitución.

Más allá de la calidad de la democracia, parece que la política está perdiendo la batalla frente a la economía. La globalización, las entidades supranacionales, los bancos centrales, tienen un enorme poder y eso afecta a la capacidad de decisión de los ciudadanos.

Es cierto y es un problema que habrá que afrontar. Primero porque los estados cada vez tienen menos capacidad de reacción. Por eso en todo el mundo hay una tendencia a la agrupación. La UE es el ejemplo más conseguido, pero ya empieza a hablarse en América Latina. Luego está la gran potencia china, que ha inventado un capitalismo 'sui generis'. Montesquieu decía que el comercio era la mejor garantía de la paz. Lo ha demostrado la experiencia. Pero claro, hay límites, porque cuando el comercio no tiene fronteras, empezamos a tener problemas con el dinero. Hablando con fiscales anticorrupción me decían que lo que tarda un narcotraficante en trasladar su dinero de un sitio a otro son segundos y lo que tarda un fiscal en seguirle la pista son meses.

CLARINS

Luminosidad al instante

Cada vez son más las personas que están preocupadas por la falta de luminosidad y las marcas de cansancio. El estrés, las noches demasiado cortas, las partículas de contaminación, la acumulación de células muertas, de impurezas y de toxinas en la superficie de la piel contribuyen diariamente a apagar el tono y la textura de la piel.



Nuevo Cure Eclat Beauté Eclair con vitamina C pura

Para solucionar esta situación, los Laboratorios Clarins combinan sus más recientes descubrimientos vegetales y científicos para ayudar a optimizar la renovación celular y potenciar la luminosidad. En 2022, la gama Instant Beauty reunió tres productos complementarios para aportar resplandor a la piel del rostro: la

nueva fórmula de Baume Beauté Eclair, Peeling Beauté Eclair y Roller Resculptant Eclair para utilizar juntos o por separado.

Hoy, los Laboratorios Clarins van más lejos aún en su búsqueda de la luminosidad y desarrollan una solución experta que completa este trío; se trata de Cure Eclat Beauté Eclair.

Esta innovación Clarins nos revela otra faceta de la luminosidad: se presenta en forma de una ampolla para el rostro **ultraconcentrada en vitamina C pura** y enriquece la gama Instant Beauty para potenciar sus beneficios; de este modo, los signos de fatiga se atenúan, la piel está más luminosa, alisada y menos apagada.





#DA EL PASO

**Da el paso en las
elecciones sindicales
con un sindicato
independiente.**

COMO TÚ



Relato



EL RUBENCIO



Jose Antonio Pérez Ledo

Escritor y columnista en elDiario.es/ @mimesacojea

Visita nocturna

Borja no se había visto en una semejante en sus treinta y ocho años de vida. Incluso fue a esconderse a casa, lo cual no debe tomarse por cobardía sino por mera prudencia. Sabía cómo se las gastaba esa mujer y no quería exponerse a sus arrebatos temperamentales.

Hasta ese momento, la trayectoria de Borja como concejal de Cultura había sido intachable. Ciertamente solo llevaba siete meses en el cargo, pero, en el ejercicio de la política, eso es una eternidad. Lo colocó el alcalde en persona, del PP. Tenía que repartir el pastel con Vox, que se había llevado el 21% de los votos en los últimos comicios.

Lo que nadie se esperaba es que Borja, conocido en el pueblo por una indolencia rayana en el coma, se lo tomase tan en serio. En poco más de medio año había duplicado el presupuesto de la feria taurina, retirado de la biblioteca medio centenar de libros conflictivos y escogido personalmente las películas para el cine de verano descartando cualquier posible amenaza doctrinaria hollywoodiense. Todo le iba a pedir de boca. Pero entonces llegaron ellas. Las de Claro de Luna.

Eran seis, las seis del pueblo. El grupo de teatro local comandado por Mamen, la peluquera. Se pasaban el



año haciendo Dios sabe qué en un local municipal y, a mediados de julio, anunciaban a bombo y platillo el resultado de tanto misterio. En cuanto Borja recibió la petición de espacio (Aula de Cultura, viernes 14) supo que no podía aceptarlo. La obra representada sería El Público, la mayor astracanada del escritor Federico García Lorca.

No se atrevió a comunicarles la negativa en persona, así que mandó a Puri, la administrativa multitarea a tiempo parcial del consistorio. Borja, convencido de que Mamen iría a pedirle explicaciones, se largó del ayuntamiento alegando lumbalgia. Eso había pasado a las once de la mañana, y desde entonces llevaba encerrado en su casa, convencido de que, en cualquier momento, Mamen picaría el telefonillo. Menuda era.

A las 22.00, y tras todo un día de tensión insoportable, Borja resolvió que, o bien Puri había transmitido mal el mensaje, o bien Claro de Luna se preparaba para un contrataque. Pero ¿qué podían hacerle? ¡Él era el concejal de Cultura, un representante electo!

Con esa autoconfianza jurídico-administrativa logró conciliar el sueño, que durmió a pierna suelta hasta que algo lo sobresaltó a las 4.16 de la madrugada. Un ruido. Qué no se le pasó por la cabeza. De todo. Ladrones. Okupas. Mamen.

Mamen seguro. Pero, ¿cómo se las habría apañado para colarse en su casa?

Salió de puntillas del dormitorio blandiendo su ejemplar de “La rebelión de Atlas”, de Ayn Rand, a modo de arma. Tercera vez que intentaba

Nadie se esperaba que Borja, conocido por una indolencia rayana en el coma, se tomase tan en serio lo de concejal de cultura. En medio año había duplicado el presupuesto de la feria taurina y retirado de la biblioteca 50 libros conflictivos

leerlo, tercera que desistía antes de la página 100.

En la cocina descubrió a un tipo moreno y no muy alto trasteando en los armarios. Un okupa, sin duda. Uno elegante, porque llevaba camisa blanca y pantalones de pinza.

—¡Manos arriba! —exclamó Borja enarbolando amenazadoramente la biblia del objetivismo.

El invasor se giró como si tal cosa.

—Vaya dieta me llevas, Borja.

¡Qué confianzas tan impropias para un asaltante nocturno! ¡Hasta lo había llamado por su nombre! Y el caso es que a Borja aquella cara de pan le resultaba vagamente familiar.

—¿Nos conocemos?

—Personalmente, no —dijo el saltador retomando su inspección de los armarios—. Me llamo Federico. Poeta y dramaturgo.

¡De eso le sonaba! Aquel maleante

tenía el rostro de Lorca, solo que, como es obvio, no podía serlo. Era un truco. Una sofisticada artimaña urdida por Mamen y sus adláteres comunistas.

—¿Cómo lo habéis hecho? —preguntó Borja hacia el plafón de luz, como si diese por hecho que allí habrían colocado el micrófono.

—¿Qué haces?

—¡Voy a llamar a la policía! —gritó Borja, esta vez a la campana extractora.

—Acabarás despertando a los vecinos.

—¿Eres actor? ¿Te han contratado para esto? Colarse en una casa es delito. Y más en la de un funcionario público.

Sin mirarlo, el presunto Lorca señaló su propia espalda con el pulgar. Tenía allí cuatro agujeritos.

—Dale, mete el dedo.

—¿En cuál?

—El que quieras.

Lo hizo con lógico escepticismo y, para su sorpresa, el dedo penetró en la carne hasta el nudillo. Borja, de natural aprensivo, sintió que el estómago se le ponía del revés.

—No puede ser...

—¡Por fin! —exclamó el poeta al descubrir, en el último armario que le quedaba por inspeccionar, una botella de Ribera de Duero—. Va, siéntate.

Borja, todavía macilento, lo miró mientras servía dos vasos.

—Los fantasmas no existen —farfulló el concejal casi seguro para sí mismo.

—Bebe. Te sentará bien.

Obedeció, calzándose el vaso entero por ver si así despejaba la men-

te y daba con el mecanismo del engaño. No funcionó. Al contrario. El fantasma le parecía ahora todavía más fantasmal. Hasta le dio la sensación de que resplandecía un poco por la zona de las orejas.

—Mira, Borja, yo no soy una persona rencorosa. Al contrario, me tengo más bien por indulgente. Pero debo decirte, y espero que no te lo vayas a tomar a mal, que eres un desagradecido.

—¿Yo? ¿Por qué?

—Ya sabes por qué.

—Lo de Mamen —Lorca asintió—.

Yo a esa no le debo nada.

—A ella igual no. Pero a mí sí.

—¿A ti? ¿Pero qué dices? ¡Si tú representas todo lo que odio de este país!

Lorca se repantigó en la silla, un codo sobre el respaldo.

—Es increíble.

—¿El qué?

—Esto en lo que te has convertido. Esta personita tan... triste.

Borja se puso en pie de un salto. A él ningún exponente del 27 lo trataba así en su propia casa.

—¡Cuidado con lo que dices! ¡Yo no soy un triste!

—Eres triste, Borja. Muy triste, tristísimo. Y no siempre has sido así. De joven eras...

—¿Qué sabrás tú cómo era yo de joven?! —interrumpió el edil cada vez más exaltado.

—Pues, mira, se da la circunstancia de que lo sé. Tú leías poesía, Borja. Incluso me leíste a mí.

—A ti, perdona que te diga, no te he leído yo en la vida.

—El niño la mira mira...

—El niño la está mirando.

¿La merluza podía provocar aquello...? ¿Qué hacían esas frases en su cabeza? "¿Yo era ...comunista?", le pregunta al espectro. "No, Borja. Tú siempre has sido de derechas. Lo que pasa es que por entonces eras sensible a la belleza"

Borja se llevó las manos a la boca, porque de ese órgano habían salido las palabras, aunque no tenía la menor idea de cómo ni por qué. Su voluntad no había sido. Pero eran esas palabras las que habían de decirse, no albergaba ninguna duda. Esas y no otras.

—¿Qué acaba de pasar?

—Me leíste, Borja. El romancero, el cante jondo, los sonetos y las canciones. Y siguen ahí dentro, en alguna parte.

Borja sintió que el mareo se intensificaba. ¿Estaba siendo víctima de alguna clase de manipulación psicológica? ¿Lo habían hipnotizado? ¿Lo habían drogado? ¡La cena! ¿Qué había cenado? Merluza. ¿La merluza podía provocar aquello? Dicen que el pescado tiene mucho mercurio. ¿Es el mercurio psicotrópico?

—Nos leíste a todos. A Emilio, a

Miguel, a Luis, a Jorge... ¡Haz memoria, hombre!

Una orden innecesaria porque, cosa increíble, algo había empezado a recordar ya. Pero eran evocaciones inconexas. Palabras. Versos. "Alimentando lluvias, caracolas". "De una vez paraíso". "Dejé por ti todo lo que era mío". ¿Qué hacían esas frases en su cabeza? ¿Cómo habían llegado ahí?

—Tú las metiste —le respondió el espectro que, o bien interpretaba los silencios con suma pericia, o bien tenía la facultad de estar leyéndole los pensamientos.

—¿Yo era... comunista?

—No, Borja. Tú siempre has sido de derechas. Lo que pasa es que, por entonces, eras sensible a la belleza.

Ante sus ojos pasó parte de su vida, una parte pequeña pero crucial para el caso que nos ocupa. Aquellos libritos negros de Cátedra que su tío Vicente le regalaba cuando volvía de sus viajes. Los lomos cuarteados, las esquinas maltrechas. Se recordó a sí mismo recitándole a Carmela, cómo le gustaba Carmela y cuánto le recitó. ¿Qué habría sido de ella?

—Se fue a estudiar acupuntura a Olmedo y se casó allí con un ferretero de nombre Jose Miguel. El centro de acupuntura fue una ruina y ahora están los dos en la ferretería. Tiene dos hijas, la pequeña con hidrocefalia.

—Era guapísima.

—Lo sigue siendo.

—Le recitaba Pedro Salinas.

—Sí, Pedro te gustaba mucho.

Borja se llevó las manos a la cabeza. Sentía el cerebro en llamas, como si alguien le estuviese traspasando sus recuerdos, que se mezclaban con

Relato

los propios, y a las neuronas no les diese para tanta conexión sináptica.

—¿Cómo es posible que lo hubiese olvidado?

—Supresión —respondió Lorca tras apurar su vaso—. La mente borra todo lo que pone en cuestión la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es parecido a la represión. La diferencia es que la supresión busca un acomodamiento positivo de la psique, por eso no se somatiza.

—Eres todo un experto.

—Leí mucho a Freud.

A Borja, enfrentado a ese otro Borja que iba emergiendo por las esquinas de su subconsciente, le temblaban las manos, los labios, todo. Se dijo: «cerré mi puerta al mundo», e inmediatamente cayó en que eso, maldita sea, era de Emilio Prados.

—¿Y qué se supone que tengo que hacer ahora?

—Esa decisión, como tú comprenderás, no me corresponde a mí. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer.

Borja se percató de que su interlocutor empezaba a volverse poco a poco traslúcido.

—¿Me da tiempo a pedirte un autógrafo?

—No seas mitómano.

Fue lo último que dijo Lorca antes de desvanecerse por completo.

A las 9 en punto de la mañana Mamen empezó a calentar las planchas y las tenacillas. Era sábado, había boda en el pueblo y, por tanto, mucho pelo rizado que alisar y mucho liso que ondular. Todo el mundo ansía aquello de lo que carece, le gustaba decir a Mamen, quien, además de peluquera y directora de escena, era un poco filósofa.

A las 9 en punto de la mañana Mamen empezó a calentar las planchas. Había boda en el pueblo y, por tanto, mucho pelo rizado que alisar y mucho liso que ondular. Todo el mundo ansía lo que carece, le gustaba decir a Mamen, quien, además de peluquera y directora de escena, era un poco filósofa

La campanilla a su espalda anunció el primer cliente. No lo era. Era Borja. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro cubierto de eczemas. Mamen, azorada pero siempre bravía, lo apuntó con el secador y apretó el gatillo sin dudarle.

El edil obvió el aire caliente y procedió con la explicación que llevaba preparada. Todo había sido un desafortunado error. No suyo, cuidado. De Puri, la administrativa. Qué desastre de mujer, no se entera de nada. Claro de Luna dispondría del Aula de Cultura, faltaría más. Y no solo eso. El ayuntamiento publicitaría el estreno en su newsletter y él personalmente se encargaría de imprimir los carteles.

No hubo posibilidad de réplica porque, en lo que Mamen apagaba el

secador, Borja ya estaba en la calle, corriendo como alma que lleva el diablo. Un barrendero que pasaba por allí en ese momento testificaría más tarde que le oyó gritar: “¡Ni recuerdos ni presagios: sólo presente, cantando!”.

Montó en el Ibiza y condujo veinte minutos dirección Olmedo, donde se pasó otros quince pateando el pueblo hasta dar con lo que buscaba. «FERRETERÍA JOSEMI». Carmela, junto a la caja registradora, ordenaba unas llaves allen según su tamaño. Era cierto: seguía siendo guapísima.

Cuando Borja entró en el local, ella levantó la cabeza, pero no dio muestras de reconocerlo.

—Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte...?

Fue todo lo que pudo decir antes de que Borja esquivase el mostrador de un brinco al grito de “¡Quítate ya los trajes, las señas, los retratos!” y la besara apasionadamente en la boca.

Una hora después, los medios se hacían eco de la detención de un concejal de Vox. Los escabrosos detalles fueron saliendo a la luz poco a poco. Que la mujer fue su novia de juventud. Que el tal Borja era un adalid de la guerra cultural, censor de libros y de películas, un fanático con fama de no haber dado un palo al agua hasta que el extremismo se cruzó en su vida.

Solo la peluquera del pueblo, una tal Mamen, lo defendió a su manera. Dijo de él que no acababa de ser mal tipo. Pero eso a veces no es suficiente, añadió la mujer, quien, como ya hemos señalado, tenía afición por la filosofía.

En **elDiario.es** tenemos muy claro que, sin independencia económica, no hay independencia editorial.

Este septiembre, celebramos nuestro undécimo aniversario. Y más de una década después, seguimos siendo un medio rentable, sin créditos, sin deuda y que mantiene su libertad gracias a los socios y socias que nos apoyáis.

Cada año explicamos nuestras últimas cuentas. Es una de las obligaciones que recoge nuestro Estatuto: forma parte de nuestro compromiso con la transparencia”.

Ignacio Escolar,
director de elDiario.es



Porque no tenemos nada que esconder. **Hacemos públicas nuestras cuentas de 2022**

Puedes verlas al detalle en eldiario.es/cuentas





Nuestros hijos merecen un futuro mejor



PATRICIA BOLINCHES

La humanidad ha avanzado más gracias a las preguntas que a las respuestas. Como sociedad e individualmente. “Profundas dudas, profunda sabiduría”, reza el proverbio chino. En teoría se aprende cumpliendo años y es con el tiempo que a base de acertar con las preguntas se atesoran las convicciones necesarias para no retroceder.

Pero a veces, vivir en tiempos turbulentos, en acertada definición de Zygmunt Bauman, deja demasiadas preguntas sin respuestas o lo que es peor, con explicaciones equivocadas. Reclamamos a la política soluciones definitivas cuando su mirada es cada vez más a corto plazo. Igual es la única manera que tiene de sobrevivir, puesto que si algún día tuvo el poder, ya hace tiempo que no es así y en el mejor de los casos solo puede aspirar a poner límites a una doctrina económica que contribuye a mayores desigualdades. El capital siempre se resiste a su

democratización pero hay que intentarlo.

La pregunta que inquietaba a Bauman al final de su vida y que probablemente nadie está en disposición de responder es cómo renovamos el mundo. ¿Seremos capaces de intentar que sea un poco más justo o ni tan siquiera vamos a intentarlo? Hemos perdido la noción de comunidad, se cuestionan derechos fundamentales y se normaliza que más de 100 millones de personas sufran de pobreza extrema en el mundo (mientras el resto para limpiarnos la conciencia diferenciamos entre pobreza absoluta y relativa).

Tras encadenar varias crisis sabemos que el mercado y el bien común casi nunca van alineados. Pero solo la política, hasta donde pueda, es capaz de frenar la voracidad neoliberal. En España, el Gobierno de coalición diseñó un escudo social para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania que aunque insuficiente se ha demostrado que era la respuesta correcta. Es la prueba

de que las soluciones, por escasas que sean, nunca vendrán de los mercados ni de aquellos que desde la política anteponen siempre las rentas a las necesidades.

¿Qué podemos hacer nosotros? Luchar por no ser una estadística y rebelarnos contra el tecnopopulismo y la desideologización de la sociedad porque en nuestras manos está también evitar que se siga socavando la democracia.

Duden de quien quiera imponerles un único modelo de familia o su manera de entender la sexualidad porque la familia “natural” solo existe en las mentes estrechas y a menudo reaccionarias que tampoco reconocen la diversidad sexual y de género. La España de 2023 tiene más de arcoiris que de blanco y negro, aunque debemos combatir a diario el riesgo de viajar atrás en el tiempo.

Lo sabemos bien las mujeres, puesto que hemos protagonizado la gran revolución de este siglo y asistimos con no poca rabia a los intentos de amordazarnos o situarnos en el segundo plano del que tanto nos costó salir. No lo conseguirán. Nos defenderemos en la calle y en las urnas como demostramos en las últimas elecciones.

Permítanme una confesión. Los años no solo sirven para intentar acertar en las convicciones. También para escoger los objetivos. Cada vez son menos pero más firmes. El de mi generación debería ser el de acelerar los cambios tanto como podamos para luchar contra la emergencia climática. Si en alguna herencia tenemos que pensar es en esa. Nuestros hijos merecen un mundo mejor.

¿Y si las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local?



El 90% de las compras efectuadas por Iberdrola se realizan a proveedores locales, muchos de ellos pymes.

Compromiso
sostenibilidad





Tu viaje de ensueño comienza aquí



Viaje combinado Cuba
Habana y Varadero
9 días
desde **899€**

Viaje Combinado Tailandia
Phuket, Phi Phi, Krabi y Bangkok
12 días
desde **1.095€**

Circuito Clásico Jordania
Jordania con noche en Wadi Rum
8 días
desde **899€**



Todos tus Circuitos,
Viajes Combinados y Rutas en coche



Tus vacaciones empiezan en
www.logitravel.com



Estamos a tu disposición en
971 927 594



LOGITRAVEL
Especialistas en **vacaciones**